



ANALES DEL CONCEJO

DE BOGOTÁ, D.C.

PROYECTOS DE ACUERDO

AÑO II N°. 3998 DIRECTORA: LUZ ANGÉLICA VIZCAINO SOLANO JUL. 22 DEL AÑO 2025

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 642 DE 2025 PRIMER DEBATE.</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL SISTEMA DE CORREDORES CIVICOS SEGUROS, DIVERSOS Y CUIDADORES; EN EL TRANSPORTE PUBLICO”.....	37476
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 643 DE 2025 PRIMER DEBATE.</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE LA CREACION DE ROCKERITOS AL PARQUE”.....	37484
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 644 DE 2025 PRIMER DEBATE.</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DE PACIENTES CRONICOS (HIPERTENSOS Y DIABETICOS) EN ESTADO DE POBREZA Y VULNERABILIDAD DEL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.....	37491
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 645 DE 2025 PRIMER DEBATE.</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA AUDIOVISUAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. “BOGOTÁ CIUDAD SEGURA Y PROTECTORA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”.....	37503
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 646 DE 2025 PRIMER DEBATE.</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE BUSCA FORTALECER LOS SERVICIOS Y ACCESO A LA JUSTICIA EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.””.....	37513
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 647 DE 2025 PRIMER DEBATE.</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN PERMANENTE DE LA ESTRATEGIA DISTRITAL, JORNADA COMPLEMENTARIA EN DEPORTE, RECREACIÓN, ARTE Y CULTURA (JORNADA DRAC)”.....	37523
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 648 DE 2025 PRIMER DEBATE.</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA ESTRATEGIA CONTRA LA RECEPCIÓN DE AUTOPARTES, CELULARES Y MOBILIARIO URBANO EN BOGOTA”.....	37536
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 649 DE 2025 PRIMER DEBATE.</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 3 DEL ACUERDO 526 DE 2013 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.....	37546
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 650 DE 2025 PRIMER DEBATE.</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL SISTEMA DE VOLUNTARIOS BICI-USUARIOS EN SEGURIDAD PARA CICLORUTAS DE LA CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.....	37548
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 651 DE 2025 PRIMER DEBATE.</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE DEFINEN LINEAMIENTOS EN MATERIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AL SERVICIO PÚBLICO INDIVIDUAL DE PASAJEROS - TAXI EN EL DISTRITO CAPITAL”.....	37560
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 652 DE 2025 PRIMER DEBATE.</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE BUSCA INCENTIVAR, IMPULSAR Y ESTABLECER CORREDORES TURÍSTICOS SEGUROS DE BOGOTÁ D.C.”.....	37576

Pág.

PROYECTO DE ACUERDO NO 653 DE 2025 PRIMER DEBATE. “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UNA JORNADA DE REFLEXIÓN POR LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN EN CONMEMORACIÓN DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A BOGOTÁ”

37586

PROYECTO DE ACUERDO NO 642 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL SISTEMA DE CORREDORES CIVICOS SEGUROS, DIVERSOS Y CUIDADORES; EN EL TRANSPORTE PUBLICO”

OBJETO DEL PROYECTO

“SEGURIDAD AL INTERIOR DE LOS PORTALES, ESTACIONES Y BUSES DE LA EMPRESA DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO”.

I. SUSTENTO JURÍDICO

• DE ORDEN CONSTITUCIONAL

Preámbulo de la Constitución.

En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente: (...)

(Subrayado fuera de texto).

ARTÍCULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

(...)

ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado

promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

Artículo 95: Son deberes de la persona y del ciudadano: 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. (...)

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.

Artículo 365: señala que “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado” y es deber de éste “asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”.

- **DE ORDEN LEGAL**

Decreto 3109 de 1997. “Por el cual se reglamenta la habilitación, la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros y la utilización de los recursos de la Nación”

Artículo 9º.- Previo al inicio de la operación de las empresas de transporte masivo presentarán una póliza de seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual amparando los riesgos de muerte, incapacidad total y permanente, incapacidad temporal, daños a bienes de terceros y gastos médicos y de hospitalización a terceros, sin perjuicio de los demás seguros que se establezcan en la ley y en los términos de referencia o pliegos de condiciones.

Decreto 309 de 2009. “Por el cual se adopta el Sistema Integrado de Transporte Público para Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones

Decreto 392 de 2015. “Por medio del cual se reglamenta la figura del Defensor de la Ciudadanía en las entidades y organismos del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.”

La Ley 105 de 1993, consagró el marco legal de la actividad del transporte y la Ley 336 de 1996, denominada Estatuto Nacional del Transporte y estableció los lineamientos generales que tienen que ver con el transporte público.

Ley 336 de 1996. Estatuto General de Transporte.

Artículo 2. La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y del Sistema de Transporte.

Artículo 3. Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las

autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizar a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los Artículos 333 y 334 de la Constitución Política.

Artículo 5. El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo. El servicio privado de transporte es aquel que tiende a satisfacer necesidades de movilización de personas o cosas, dentro del ámbito de las actividades exclusivas de las personas naturales y/o jurídicas. En tal caso sus equipos propios deberán cumplir con la normatividad establecida por el Ministerio de Transporte. Cuando no se utilicen equipos propios, la contratación del servicio de transporte deberá realizarse con empresas de transporte público legalmente habilitadas en los términos del presente Estatuto.

Artículo 61. Sin perjuicio de las garantías establecidas por las normas pertinentes, las empresas de Transporte Terrestre Automotor podrán constituir Fondos de Responsabilidad como mecanismo complementario para cubrir los riesgos derivados de la prestación del servicio. Para los efectos pertinentes, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito continuará rigiéndose por las normas que regulan la materia.

• **NORMATIVIDAD DISTRITAL**

Acuerdo Distrital 638 de 2016. “Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 257 de 2006, se crea el Sector Administrativo de Gestión Jurídica, la Secretaría Jurídica Distrital, se modifican las funciones de la Secretaría General, y se dictan otras disposiciones”

Artículo 6. Modifíquese el artículo 48 del Acuerdo Distrital 257 de 2006. d). Formular, orientar y coordinar las políticas, planes y programas para la atención y prestación de los servicios a la ciudadana y al ciudadano en su calidad de usuarios de los mismos en el Distrito Capital. Para tal fin la Secretaría General reglamentará lo referente al defensor del ciudadano en cada una de las entidades u organismos distritales conforme a las normas legales y reglamentarias.

Decreto 413 de 2016 de la alcaldía mayor de Bogotá, D.C. que establece la estructura organizacional y funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, conforme a las asignadas por el acuerdo distrital 637 de 2016. decreto 194 de 2022 alcaldía mayor.

II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

Concepto Amplio de Seguridad

De acuerdo con la resolución 66/290 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, “la seguridad humana es un enfoque que ayuda a los Estados Miembros a determinar y superar las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos. En la resolución se exigen respuestas centradas en las personas, exhaustivas, adaptadas a cada contexto y orientadas a la prevención que refuercen la protección y el empoderamiento de todas las personas” (Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana, s.f.)

Cifras de Inseguridad en Transmilenio Según información de la policía nacional durante los meses de enero y febrero del 2020, se registraron 1.566 hurtos a personas en alimentadores y buses de Transmilenio, 783 hurtos promedio mensual. De los cuales:

- 237 se realizaron con arma blanca/ cortopunzante.
- 21 con arma de fuego
- 13 con arma contundente
- 4 con uso de escopolamina
- 3 no reportan arma
- 1288 sin empleo de armas.

En el año 2019 del 01 de enero al 30 de junio se registró la siguiente información:

- Total hurtos a personas en alimentadores y buses de Transmilenio: 5769
- 1211 hurtos con arma blanca/ cortopunzante
- 76 con arma de fuego
- 19 contundentes
- 6 con escopolamina
- 4468 sin empleo de armas

Del 01 de Julio a 31 de diciembre de 2019 se registra la siguiente información:

- Total hurtos a personas en alimentadores y buses de Transmilenio: 5729.
- 875 hurtos con arma blanca/ cortopunzante
- 64 con arma de fuego
- 21 contundentes
- 5 con escopolamina
- 4753 sin empleo de armas.

Según la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana (2021), para el total nacional, a la pregunta sobre si las personas de 15 años y más se sienten seguras o inseguras en

diferentes lugares públicos, se observó que la vía pública es el lugar en el que más personas manifestaron sentirse inseguras con 48,0%, seguido por el transporte público (incluyendo paraderos y estaciones) con 42,9%. (DANE, 2021)

III. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así:

DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.

Art. 12. Atribuciones. *Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: (...)*

*1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.
(...)*

IV. IMPACTO FISCAL:

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación. Las medidas a adoptar deberán ser financiadas con el presupuesto de las entidades pertinentes.

Es relevante mencionar, para el caso en concreto, que no obstante lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia C-911 de 2007, puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en obstáculo para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa, afirmando:

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo”.

“(…) Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del ministro de Hacienda”.

V. TÍTULO – ATRIBUCIONES - CONSIDERANDOS

PROYECTO DE ACUERDO NO 642 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL SISTEMA DE CORREDORES CÍVICOS
SEGUROS, DIVERSOS Y CUIDADORES; EN EL TRANSPORTE PÚBLICO”
EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 12 numeral 1 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA:

ARTICULO 1. La Secretaria Distrital De Seguridad, Convivencia Y Justicia creará la estrategia del Sistema de Transporte Público, Seguro, Diverso y Cuidador.

PARAGRAFO 1- La estrategia del Sistema de Transporte Público, Seguro, Diverso y Cuidador busca intervenir los factores que afectan la seguridad y la convivencia en los componentes troncal y zonal del Sistema Integrado de Transporte Público –SITP-, en el transporte público individual con el gremio taxista y en los espacios públicos de la ciudad.

ARTICULO 2. Son elementos constitutivos de la estrategia del Sistema de Transporte Público, Seguro, Diverso y Cuidador:

- 1- La Secretaria Distrital De Seguridad, Convivencia y Justicia priorizará los corredores viales de mayor ocurrencia del acoso contra la mujer y todo tipo de discriminación con el fin de enfrentar y prevenir estos delitos y contravenciones dentro del sistema TRANSMILENIO.
- 2- La Secretaria Distrital De Seguridad, Convivencia y Justicia generará Planes y Estrategias que protejan a la ciudadanía con el fin de lograr una disminución de casos de hurto a personas en SITP.
- 3- La Secretaria Distrital De Seguridad, Convivencia y Justicia ejecutará una estrategia de Seguridad Integral en los puntos “críticos o calientes”, en los componentes troncal y zonal del Sistema Integrado de Transporte Público –SITP-, en el transporte público individual con el gremio taxista y en los de los entornos y espacios públicos de la ciudad.

ARTICULO 3- . La Secretaria Distrital De Seguridad, Convivencia y Justicia creará

Programas de prevención, reacción, judicialización – articulación contra rentas y estructuras criminales y control y disuasión / Intervención intersectorial contra el delito, que permitan reducir los factores que afectan la convivencia y la seguridad en los componentes troncal y zonal del Sistema Integrado de Transporte Público –SITP-, en el transporte público individual con el gremio taxista, y en los espacios públicos de la ciudad relacionados con estos delitos.

ARTICULO 4 - La Secretaria Distrital De Seguridad Convivencia Y Justicia en conjunto con la Secretaria de Cultura y de Movilidad creará un modelo para el sistema de prevención y cultura ciudadana del cuidado y el autocuidado, convivencia en los corredores viales a toda la ciudadanía de la capital en el Sistema Integrado de Transporte Público –SITP.

ARTICULO 5. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia implementará la creación de un sistema de información de rutas de atención y protocolos ciudadanos como contribución a la consolidación de una ciudad segura y protectora de derechos en el sistema de transporte público, tendientes a la prevención, la reducción y la ocurrencia del delito y las contravenciones, el rechazo a las violencias en especial hacia la mujer y la promoción de la convivencia pacífica a través de la cultura ciudadana y de la no violencia.

ARTICULO 6. Articular con las entidades del orden territorial y nacional acciones orientadas a fortalecer el Sistema público de transporte

ARTICULO 7. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

H.C. JULIÁN ESPINOSA ORTÍZ.

Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

PROYECTO DE ACUERDO NO 643 DE 2025**PRIMER DEBATE*****“POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE LA CREACION DE ROCKERITOS AL PARQUE”*****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****OBJETO DEL PROYECTO**

“EL PRESENTE PROYECTO PRETENDE APERTURAR UN ESPACIO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL EN EL MARCO DEL FESTIVAL ROCK AL PARQUE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”.

I. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente proyecto de acuerdo está sustentado en las siguientes normas circunscritas a la constitución nacional, a las leyes colombianas y los acuerdos del distrito capital, relacionadas.

• DE ORDEN CONSTITUCIONAL

Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.

Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

Artículo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.

Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de

la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

– DE ORDEN LEGAL

LEY 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”

Artículo 8. Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.

Artículo 10. Corresponsabilidad. Para los efectos de este Código, se entiende por corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos los sectores e instituciones del Estado. No obstante, lo anterior, instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación de servicios sociales, no podrán invocar el principio de la corresponsabilidad para negar la atención que demande la satisfacción de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

Artículo 30. Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes. Igualmente, tienen derecho a que se les reconozca, respete, y fomente el conocimiento y la vivencia de la cultura a la que pertenezcan.

Parágrafo 1. Para armonizar el ejercicio de este derecho con el desarrollo integral de los niños, las autoridades deberán diseñar mecanismos para prohibir el ingreso a establecimientos destinados a juegos de suerte y azar, venta de licores, cigarrillos o productos derivados del tabaco y que ofrezcan espectáculos con clasificación para mayores de edad.

Parágrafo 2. Cuando sea permitido el ingreso a niños menores de 14 años a espectáculos y eventos públicos masivos, las autoridades deberán ordenar a los organizadores, la destinación especial de espacios adecuados para garantizar su seguridad personal

– NORMATIVIDAD DISTRITAL.

Acuerdo 120 de 2004 Por el cual se declara el Festival de Rock al Parque de Bogotá, D.C., como un evento de interés cultural.

Acuerdo 887 de 2023 Por medio del cual se declara a Bogotá D.C., como “La ciudad de las niñas, niños y adolescentes”, y se dictan otras disposiciones.

Art 8 numeral 6. Las entidades públicas planearán e implementarán acciones que convoquen a las niñas, niños y adolescentes a usar y recuperar el espacio público para el juego y el encuentro intergeneracional.

II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

El escenario cultural y recreativo en el territorio nacional ha venido cambiando, las experiencias innovadoras para el desarrollo de las potencialidades de los niños, niñas y adolescentes, emergen como avance y desarrollo en las culturas que en la ciudad transitan, así las cosas, el escenario cultural del rock en el Distrito Capital, viene aumentando, trayendo cada vez más manifestaciones en torno a este fenómeno musical que trasciende fronteras, y por supuesto edades, a tal punto que nuestro país cuenta con el ganador del Grammy Latino 2021 en la categoría “Mejor Álbum de Música Latina para Niños”, así las cosas la oferta musical ha venido creciendo en todo el mundo, bandas emergentes de rock para niños se posicionan cada vez más en el mundo, el distrito ya tuvo un primer acercamiento exitoso fue en el año 2019 donde el grupo chileno 31 minutos llenó el escenario del Teatro Jorge Eliecer Gaitán, agotando la boletería gratuita, la idea de escenarios de rock para niños se complementa con la existencia del festival kidsapalooza realizado en Chile, Brasil Y Argentina, en México el festival vive latino adopta un escenario llamado el parque donde mezcla la cultura rock con experiencias recreativas y culturales para los niños, niñas y adolescentes junto a sus familias, tal como ha sucedido en algunas experiencias de renombre pero de menor impacto, se propone la iniciativa de rockeritos al parque, un espacio para la convivencia, la familia, la paz, el disfrute y el rock and roll.

El Instituto Distrital de las Artes – Idartes, como gestor de las prácticas artísticas en Bogotá, está comprometido con aumentar la confianza de los artistas, gestores y ciudadanía en el sector de las artes en Bogotá a través de un esfuerzo continuo de mejora en su gestión con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Para este fin establece su plataforma estratégica:

Misión

“Garantizar el pleno ejercicio y disfrute de los derechos culturales por parte de la ciudadanía, acercando las prácticas artísticas y la vivencia de sus diferentes dimensiones a la vida cotidiana de las personas; mediante la ejecución de las políticas públicas, proyectos, planes y programas que aporten a la construcción de un nuevo contrato social que contribuya al desarrollo de las personas como seres creativos, sensibles, solidarios y corresponsables con los otros seres vivos que les rodean.”

Visión

“En 2030 Idartes será la entidad líder en la gestión de las artes en la Ciudad Región, movilizandolas dimensiones y procesos de las prácticas artísticas para integrarlas en la vida cotidiana de las personas, a través de: la articulación con los demás sectores de la sociedad; la ejecución de las políticas públicas culturales; la potenciación de las ciudadanías creativas; la construcción de memoria para la transformación social y la integración de las ciencias y las tecnologías, desde una mirada intercultural que reconoce el valor del territorio y su interrelación en un entorno local y global.

Objetivos Estratégicos

- Objetivo 1

“Aportar a la construcción de un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, en el que las artes sean parte fundamental de la vida cotidiana de la ciudadanía, garantizando los derechos culturales para el reconocimiento, apropiación, intercambio, innovación y conjugación de las dimensiones artísticas, desde los enfoques: diferencial, de género y territorial, hacia la construcción de una ciudad cuidadora, sostenible, incluyente, innovadora y consciente.”

- Objetivo 3

“Generar la disponibilidad de recursos humanos y de infraestructura tecnológica, de alta calidad y eficiencia para la efectiva y oportuna operación de la entidad y de la gestión del conocimiento.”

- Objetivo 4

“Generar condiciones para que el ejercicio de las prácticas artísticas que desarrollan agentes y organizaciones del sector de las artes, con procesos asertivos de planeación, información, fomento, organización, participación, regulación y control, que consoliden a Bogotá - Región como un escenario para el disfrute y goce de los derechos culturales.”

- Objetivo 5

“Fortalecer la articulación y cooperación con actores comunitarios, sociales, públicos y privados del ámbito local, regional, nacional e internacional que amplíen y potencien los recursos técnicos, humanos y financieros con los que cuenta la entidad para la garantía de los derechos culturales de la ciudadanía.”

ROCK AL PARQUE

Rock al Parque es el festival de música rock gratuito más grande de latinoamérica, se celebra en Bogotá. La primera edición se llevó a cabo en 1995 y el festival de 2023 se realizó del 11 al 13 de noviembre.

La historia de Rock al Parque se remonta a 1992, cuando se realizaban encuentros informales de música en el Planetario Distrital de Bogotá. En 1994, el cantante y actor Mario Duarte, miembro de la banda La Derecha, formalizó el evento con el apoyo del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá.

La primera edición de Rock al Parque se realizó del 26 al 29 de mayo en el Estadio Olaya Herrera, la Media Torta, el Parque Simón Bolívar y la Plaza de Toros La Santamaría.

El festival se especializaba inicialmente en bandas de rock, pero poco a poco se fue abriendo a otros géneros, como el punk, reggae, ska y blues. Rock al Parque es un crisol de géneros, desde el rock más contundente hasta los ritmos autóctonos colombianos y del mundo.

El festival de 2023 contó con 64 bandas entre invitados internacionales, nacionales y ganadores de convocatorias, en este año el Festival fue histórico, Más de 390 mil asistentes en Rock al Parque, tres días, tres escenarios, 65 bandas y 600 artistas en escena hicieron de la versión 2023 una de las más grandes de la historia.

En su versión 2023 Rock al Parque demostró por qué es considerado el festival de acceso libre más grande de música en América Latina al reunir a más de 390 mil personas en un mismo lugar, el Parque Metropolitano Simón Bolívar, para disfrutar del completo universo sonoro que durante tres días presentaron las bandas invitadas con sus propuestas sólidas, novedosas y un fuerte componente de música en español, así como las diferentes experiencias que en esta ocasión hicieron parte del evento organizado por el Instituto Distrital de las Artes - Idartes.

La Zona de Arte y Emprendimiento - ZAE, por ejemplo, permitió a los asistentes acceder a productos, ropa, accesorios, libros, música y otros elementos creativos y sostenibles inspirados en el rock; allí se registraron ventas por más de 200 millones de pesos. Por su parte, el Domo recibió al público rockero con proyecciones láser de grandes éxitos musicales, mientras que en el Mercado vinilero se disfrutaba de una completa selección de vinilos y la experiencia de DJ invitados.

Así, Rock al Parque 2023 hace historia con una asistencia récord de 390 mil personas que se unieron durante tres días en torno a la música, la sana convivencia y la diversidad, a quienes se sumaron 2,4 millones de personas que sintieron el

poder del festival a través de sus pantallas gracias a la transmisión de Capital Sistema de Comunicación Pública de Bogotá y más de 250 mil usuarios que accedieron a los contenidos del festival en www.rockalparque.gov.co, donde se registraron un total de 410 mil visitas.

El Idartes agradece a Bogotá por aceptar el llamado y por hacer de los Festivales al Parque un verdadero hito para la ciudad, el país y el mundo. Las cifras históricas de este 2023 lo demuestran y posicionan a este programa como un espacio único para el disfrute de la música en vivo en escenarios de libre acceso para todos los públicos.¹

• III. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

-
- El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así:
-
- **DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.**
- *Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: (...)*
- *1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.*
- (...)

IV. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación. Las medidas a adoptar deberán ser financiadas con el presupuesto de las entidades pertinentes.

El Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, estableció:

“Artículo 7°. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”

-
- ¹ Idartes Quiénes somos | Instituto Distrital de las Artes. (s. f.). <https://www.idartes.gov.co/es/idartes-quienes-somos>
 - ¡Festival Histórico! Más de 390 mil asistentes en Rock al Parque | Festival Rock al Parque | 11, 12 y 13 de noviembre de 2023. (s. f.). <https://rockalparque.gov.co/articulos/festival-historico-mas-de-390-mil-asistentes-en-rock-al-parque>

Es relevante mencionar, para el caso en concreto, que no obstante lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia C-911 de 2007 M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería, puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en obstáculo para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa, afirmando:

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo”.

“(…) Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda”.

Por lo tanto, debido a que esta iniciativa se orienta en cumplir lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 en el Artículo 13 – Programa Estratégico 1 – Meta Estratégica 6 - 19 - 22; Artículo 14. – Programa General 14 - Meta Sectorial 98 – 100 - Programa General 20 - Meta Sectorial 138 – 141; y Artículo 15 – Programa 14, no habrá lugar a la modificación del marco fiscal de mediano plazo o la creación de una fuente adicional de financiación. En consecuencia, el presente Proyecto de Acuerdo no tiene impacto fiscal.

V. TÍTULO – ATRIBUCIONES - CONSIDERANDOS

PROYECTO DE ACUERDO NO 643 DE 2025**PRIMER DEBATE*****“POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE LA CREACIÓN DE ROCKERITOS AL PARQUE”***
EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 12 numeral 1 del Decreto Ley 1421 de 1993.

VI. ARTICULADO**ACUERDA:**

Artículo 1. Objeto. Aperturar un espacio de participación infantil en el marco del festival Rock al Parque en la ciudad de Bogotá

Artículo 2. . Jornada. Este espacio se creará en la jornada de la mañana del día domingo, previo a la apertura oficial de la jornada tradicional del festival Rock al Parque.

Artículo 3. La administración Distrital en cabeza del Instituto Distrital para las Artes se encargará de la convocatoria de las bandas y la ambientación del escenario acorde al público infantil y sus familias

Artículo 4. Implementación. El tiempo de implementación del presente acuerdo será de seis (6) meses a partir de su sanción

Parágrafo: De acuerdo a lo anterior, el Distrito informará anualmente al Concejo Distrital de Bogotá en cabeza de las entidades del sector.

Artículo 6. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

H.C. JULIÁN ESPINOSA ORTÍZ.
Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

PROYECTO DE ACUERDO NO 644 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DE PACIENTES CRONICOS (HIPERTENSOS Y DIABETICOS) EN ESTADO DE POBREZA Y VULNERABILIDAD DEL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****OBJETO DEL PROYECTO**

Establecer los lineamientos para fortalecer la atención en salud de la población pobre y vulnerable del distrito capital que presenten enfermedades crónicas como la Hipertensión y la Diabetes.

I. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente proyecto de acuerdo está sustentado en las siguientes normas circunscritas a la Constitución Nacional, a las leyes colombianas y los acuerdos del distrito capital:

– DE ORDEN CONSTITUCIONAL**Constitución política de Colombia**

Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.

• DE ORDEN LEGAL**Decreto 780 de 2016**

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

ARTÍCULO 2.11.1. (Parte adicionada por el art. 1, decreto 1599 de 2022) Objeto. Esta Parte tiene por objeto establecer los lineamientos para garantizar el acceso a los servicios de salud a toda la población, mediante la implementación de la operación de la Política de Atención Integral en Salud -PAIS, contemplando las áreas geográficas para la gestión en salud como un instrumento necesario para reducir las brechas de inequidad existentes frente al acceso, atendiendo las realidades diferenciales que existen en el territorio colombiano

Marco estratégico de la política de atención integral en salud, PAIS

La Política de Atención Integral en Salud debe contener las estrategias e instrumentos que permitan la transformación del modelo institucional de la Ley 100 de 1993 a los objetivos de un Sistema de Salud centrado en la población y sus

relaciones a nivel familiar y comunitario.

La política recoge el marco de determinantes sociales adoptado por el PDSP 2012- 2021. Bajo ese contexto, el Estado reconoce que los problemas de salud son generados o potenciados por las condiciones ambientales, sociales, culturales, políticas, económicos, educacionales, de hábitat y genéticos que afectan a las poblaciones en los diferentes ámbitos territoriales que conforman la nación. Los determinantes sociales de la salud consolidan tanto los factores protectores de las condiciones de salud como las causas primarias de la enfermedad. De acuerdo con la Ley Estatutaria de la Salud, el legislador deberá definir procesos para su intervención, y su abordaje se considera intersectorial, financiado con recursos diferentes a los destinados a proveer servicios. Toda política nacional o territorial de salud debe partir del análisis de los determinantes y se deben considerar como factores condicionantes de las intervenciones planteadas desde la PAIS. La política además supone la interacción coordinada de las entidades territoriales a cargo de la salud pública, los aseguradores y los prestadores de servicios.

Considerados los determinantes, son cuatro las estrategias centrales de la Política de Atención Integral en Salud: 1. La atención primaria en salud con enfoque de salud familiar y comunitaria, 2. el cuidado, 3. La gestión integral del riesgo en salud y 4. El enfoque diferencial de territorios y poblaciones.

- 1. La atención primaria en salud (APS) es la estrategia básica y es la integradora entre las necesidades de la población, la respuesta del sistema y los recursos disponibles en la sociedad como elemento esencial para la viabilidad en la progresividad del ejercicio del derecho. Una APS con enfoque de salud familiar y comunitaria que sirve de interfaz entre la necesidad de desarrollo de nuevas competencias del recurso humano y equipos interdisciplinarios empoderados en el desarrollo de sus capacidades para dar una respuesta social dirigida hacia la persona, la familia y la comunidad.
- 2. El cuidado debe ser entendido como las capacidades, decisiones y acciones que el individuo y el Estado adoptan para proteger la salud del individuo, la de su familia, la comunidad y el medio ambiente que lo rodea, es decir las responsabilidades del ciudadano consigo mismo y con la comunidad. No es posible esperar resultados en salud si el propio individuo y la comunidad no adoptan conductas y prácticas que los protejan frente a los riesgos de salud.
- 3. La gestión integral del riesgo en salud, como estrategia de articulación entre la salud pública, el aseguramiento y la prestación de servicios de salud. Su finalidad es la minimización del riesgo y el manejo de enfermedad.
- 4. El enfoque diferencial en la atención, adaptando el modelo a las particularidades de los territorios, las características de la población y las estructuras de servicios disponibles considerados como factores críticos de éxito en el desempeño del Sistema de Salud.

Estas estrategias permiten la articulación y armonización del aseguramiento, la prestación de servicios de salud y el desarrollo de las políticas y programas en salud pública de acuerdo con la situación de salud de las personas, familias y comunidades, soportada en procesos de gestión social y política de carácter intersectorial, las cuales deben aplicarse con cada uno de los contextos poblacionales y territoriales específicos, así como contar con un enfoque diferencial. El instrumento que adopta las estrategias y las transforma en procesos se consolida como un modelo de atención integral en salud.

Enfoque Diferencial

El enfoque diferencial es la estrategia que permite a la política de atención reconocer y organizarse frente a las diferencias de las personas y colectivos frente a los determinantes sociales. Estos determinan condiciones de vulnerabilidad y potencialidad asociadas a factores físicos, psíquicos, sociales, psicosociales, culturales (creencias y valores), económicos, ambientales, entre otros. Es una dimensión relativa, pues cada persona tiene su propio nivel y tipo de vulnerabilidad en

función de situaciones socioeconómicas, culturales, políticas, religiosas, de género y personales.

Diferenciación poblacional: La vulnerabilidad es entendida como un elemento que incrementa la probabilidad de ser afectado diferencialmente por un riesgo de cualquier naturaleza y, en este sentido, está vinculada con la capacidad de enfrentarlo. La vulnerabilidad puede originarse en condiciones permanentes, como la ancianidad, la discapacidad o la pobreza estructural-cuando no se interviene -, la discriminación por pertenecer a algún grupo poblacional (grupos étnicos) o deberse a condiciones transitorias, como la dependencia durante la niñez, la juventud, la ancianidad, el desplazamiento forzoso o victimización por el conflicto, los grupos étnicos, población privada de la libertad o la caída drástica de ingresos por crisis económica. En otros términos, se ha expresado como la baja capacidad de los individuos, grupos, hogares y comunidades para prever, resistir, enfrentar y recuperarse del impacto de eventos de origen interno o externo, que inciden en las necesidades, capacidades, problemáticas y potencialidades de la población.

Existen poblaciones vulneradas y vulnerables. La población vulnerada se asimila a la condición de pobreza; es decir que ya padecen una carencia efectiva que implica la imposibilidad actual de sostenimiento y desarrollo y una debilidad a futuro a partir de esta incapacidad (víctimas del conflicto armado); y las poblaciones vulnerables son aquellas para las cuales el deterioro de sus condiciones de vida no se ha materializado aún, sino que aparece como una situación de gran probabilidad en un futuro inmediato a partir de las condiciones de fragilidad que los afecta. En ese sentido, el enfoque diferencial es dinámico y se transforma permanentemente según las características de la población, sus modos de vida y sus contextos socios culturales, económicos y políticos.²

Esta diferenciación también incluye el fortalecimiento de potencialidades de personas y grupos específicos, como grupos étnicos, población con discapacidades, niños, niñas, mujeres gestantes, personas con discapacidad, adultos mayores, víctimas, desmovilizados, entre otros, y que aportan al cuidado de la salud, tanto de modo intramural como extramural, principalmente a nivel familiar y comunitario, en el marco de procesos de construcción intercultural.

PLAN DE BENEFICIOS Resolución 2808 de 2022 del 30 de diciembre

Por el cual se establece los servicios y tecnologías de la salud financiado con recursos de la Unidad de Pago por capitación UPC

***Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.** La presente resolución tiene por objeto establecer los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, que deberán ser garantizados por las entidades promotoras de salud - EPS y las entidades adaptadas, a sus afiliados en las condiciones de calidad establecidas por la normatividad vigente.*

Las disposiciones contenidas en esta resolución aplican a los organismos de dirección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a las entidades promotoras de salud, entidades adaptadas, prestadores de servicios de salud, Administradora de los Recursos de Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES y demás actores y agentes que intervienen en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

(...)

***Artículo 4. Referentes de/a actualización.** Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC requieren haber surtido los procesos de Evaluación de Tecnologías en Salud (ETES), o análisis de grupos terapéuticos o del mercado, o análisis de tecnologías derivadas de*

²Ministerio de Salud y Protección Social. Enfoque diferencial de discapacidad en el contexto de la atención a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Jaime Collazos y Claudia Suárez. Documento de trabajo. 2012

recomendaciones de Guías de Práctica Clínica (GPC), adoptadas por este Ministerio, así como otros análisis que se consideren necesarios y la toma de decisión por parte de la autoridad competente.

Parágrafo. *La mención de tecnologías en Guías de Práctica Clínica (GPC), Guías de Atención Integral (GAI), normas técnicas, protocolos, lineamientos técnicos u operativos, no implica su financiación con recursos de la UPC.*

Artículo 5. *Anexos. La presente resolución contiene cuatro (4) anexos que hacen parte integral de la misma, así: Anexo 1: "LISTADO DE MEDICAMENTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA UPC"; Anexo 2: "LISTADO DE PROCEDIMIENTOS EN SALUD FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA UPC"; Anexo 3: "LISTADO DE PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO CLÍNICO FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA UPC" y Anexo 4 "LISTADO DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES EN SALUD PÚBLICA".*

Artículo 6. *Descripción de procedimientos financiados con recursos de la UPC. Los procedimientos incluidos en el presente acto administrativo, de conformidad con las normas vigentes, se describen en términos de la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS) y se consideran financiados con recursos de la UPC los contenidos en los Anexos Nos. 2 y 3 del presente acto administrativo.*

Parágrafo 1. *Para el Anexo 2 "LISTADO DE PROCEDIMIENTOS EN SALUD FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA UPC", se consideran incluidas en esta financiación, todas las subcategorías que conforman cada una de las categorías contenidas en el mismo, salvo aquellas referidas como no financiadas en la nota aclaratoria y las que corresponden a un ámbito diferente al de salud.*

Parágrafo 2. *El Anexo 3 "LISTADO DE PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO CLÍNICO FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA UPC" se describe en términos de subcategorías de la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS).*

(...)

Artículo 14. Servicios y tecnologías de salud. *Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, contenidos en el presente acto administrativo, deberán ser garantizados por las EPS o las entidades que hagan sus veces y las entidades adaptadas, con cargo a los recursos que reciben para tal fin, en todas las fases de la atención, para todas las enfermedades y condiciones clínicas, sin que trámites de carácter administrativo se conviertan en barreras para el acceso efectivo al derecho a la salud.*

Artículo 15. Cobertura de promoción y prevención. *Las EPS y entidades adaptadas deberán identificar los riesgos en salud de su población de afiliados para que, de conformidad con la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) y los lineamientos de política pública vigentes, establezcan acciones eficientes y efectivas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Para tal fin, podrán usar la información generada durante la adscripción a una IPS, estrategias de tamizaje con las tecnologías de diagnóstico financiadas con recursos de la UPC, o mediante la aplicación de instrumentos que identifiquen el tipo de riesgo en salud y uso de bases de datos, atendiendo la normatividad vigente relacionada con el uso de datos personales.*

Artículo 16. Promoción de la salud. Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC incluyen toda actividad de información, educación, y comunicación a los afiliados de todo grupo de edad y género, de manera preferencial para la población infantil y adolescente, población de mujeres gestantes y lactantes, la población en edad reproductiva y el adulto mayor, para fomento de factores protectores, la inducción a estilos de vida saludables y para el control de enfermedades crónicas no transmisibles, articulado con lo dispuesto en los lineamientos de política pública vigentes.

Artículo 17. Protección específica y detección temprana. Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC incluyen todas las tecnologías en salud y servicios contenidos en el presente acto administrativo para la protección específica y detección temprana, según las normas técnicas vigentes, incluyendo la identificación y canalización de las personas de toda edad y género, articulado con lo dispuesto en los lineamientos de política pública vigentes.

Artículo 18. Prevención de la enfermedad. Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC para la prevención de la enfermedad incluyen las tecnologías en salud y servicios contenidos en el presente acto administrativo. Las EPS y entidades adaptadas deben apoyar la vigilancia de su cumplimiento, a través de los indicadores de protección específica y detección temprana, definidos con ese propósito, articulado con lo dispuesto en los lineamientos de política pública vigentes.

(...)

Artículo 25. Atención domiciliaria. La atención en la modalidad extramural domiciliaria como alternativa a la atención hospitalaria institucional está financiada con recursos de la UPC, en los casos que sea considerada pertinente por el profesional tratante, bajo las normas vigentes. Esta financiación está dada sólo para el ámbito de la salud.

Artículo 35. Medicamentos. Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC incluyen los medicamentos de acuerdo con las siguientes condiciones: principio activo, concentración, forma farmacéutica y uso específico, en los casos en que se encuentren descritos en el Anexo 1 "Listado de medicamentos financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación", que hace parte integral de este acto administrativo. Para la financiación deben coincidir todas estas condiciones, según como se encuentren descritas en el listado.

NORMATIVIDAD DISTRITAL

ACUERDO No. 761 DE 2020 “Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2020-2024 “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”

- **CAPÍTULO I**
PROPÓSITOS Y LOGROS DE CIUDAD AL 2030

Artículo 9. Propósitos y Logros de ciudad. El Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” se organiza en torno a 5 propósitos que se cumplen a través de 30 logros de ciudad mediante la articulación de acciones materializadas en programas.

- **CAPÍTULO III**

PROGRAMAS Y METAS DEL CUATRIENIO DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO

Artículo 12. Metas trazadoras. Las metas trazadoras del Plan Distrital de Desarrollo serán aquellas cuyo logro puede atribuirse a varios programas y metas, las cuales implican la alineación de esfuerzos entre los gobiernos distrital y nacional y el contexto macroeconómico

Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política

No	Metas Trazadoras	Indicador	Línea Base	Fuente y año	Meta 2024
11	A 2024 mantener la tasa de mortalidad evitable por enfermedades crónicas no transmisibles por debajo de 127 por 100,000 personas en edades de 30 a 69 años	Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles	Tasa 129,48 muertes por condiciones crónicas por 100,000 personas de 30 a 69 años. Año 2017, fuente RUAF - Estadísticas vitales	Fuente: Estadísticas Vitales (Actualizado a diciembre de 2019) SDS/EEVV.	<127 por 100.000
17	A 2024 logra el 95% de intercambio recíproco de la información de los procesos (administrativos-asistenciales) en la historia clínica de las 4 subredes de servicios de salud y el 50% de intercambio recíproco de la información de los procesos (administrativos asistenciales) en los sistemas de información de historias clínicas en las IPS privadas que concentran el	Intercambio recíproco Procesos asistenciales y administrativos de historia clínica en las 4 subredes del Distrito. Avance de intercambios recíprocos procesos de	21% línea base corresponde a HIS actualizados y disponibles en las 4 redes de servicios de salud y a la infraestructura TIC de las 4 subredes	SDS, 2020	Llegar al 95% de interoperabilidad de la HCEU, lo que corresponde a un aumento del 79% en la red pública. Llegar al 50% de interoperabilidad de la HCEU con las IPS privadas que concentran el 80% de la oferta de los servicios de salud de alta complejidad que se encuentran incluidos en el plan de beneficios en

80% de la oferta de los servicios de salud de alta complejidad que se encuentran incluidos en el plan de beneficios en salud, interoperen con la HCEU según lo establecido en la Ley 2015 de 2020	historia clínica en la red privada	notaria y operativa. 0% de avance		salud, interoperen con la HCEU según lo establecido en la Ley 2015 de 2020
---	------------------------------------	--------------------------------------	--	--

Fuente: [Acuerdo 761 de 2020 Concejo de Bogotá, D.C. \(alcaldiabogota.gov.co\)](#)

II. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

Partamos de la identificación de la población afiliada al sistema general de seguridad social en salud, clasificada por régimen de afiliación.





Fuente: Base de datos Única Afiliados en Salud BDUA corte octubre 2023

En Bogotá a corte del 31 de octubre de 2023 se encontraban afiliadas al sistema de salud 7.993.067 personas, de las cuales según ADRES 2,038,789 se encuentran afiliados al Régimen Subsidiado (población que no tiene recursos económicos y no puede aportar al sistema, es decir, aquellos que no tienen dinero suficiente para afiliarse al régimen contributivo o a un régimen excepcional) y 5,921,784 al Régimen contributivo (empleados, trabajadores independientes con ingresos totales mensuales, iguales o superiores a un (1) salario mínimo mensual legal vigente y los pensionados) y el restante a regímenes especiales (Ecopetrol, Policía, Fuerzas Militares, Magisterio, Unisalud)

En lo relacionado al comportamiento de las enfermedades crónicas

Según la OMS, en 2016, la diabetes mellitus causó 1,6 millones de muertes en todo el mundo. Por su parte, en Colombia, la tasa de mortalidad por Diabetes Mellitus para 2019 fue de 16.13.

La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea por encima de los límites sobre los cuales aumenta el riesgo cardiovascular.

Según la OMS la **hipertensión arterial** es, probablemente, la enfermedad más prevalente que hay en el mundo y afecta, aproximadamente, a un tercio de la población. Es el principal factor de riesgo cardiovascular. Se le conoce como el “asesino silencioso”, porque en la mayoría de los casos no presenta síntomas, por lo que se pueden llegar a desarrollar problemas cardíacos, cerebrales o renales sin ser conscientes de padecerla.

Se estima que en el mundo hay 1280 millones de adultos de 30 a 79 años con hipertensión y que la mayoría de ellos (cerca de dos tercios) vive en países de ingresos bajos y medianos. Según los cálculos, el 46% de los adultos hipertensos desconocen que padecen esta afección.

La hipertensión se diagnostica y trata a menos de la mitad de los adultos que la presentan (solo al 42%). Apenas uno de cada cinco adultos hipertensos (el 21%) tiene controlado el problema. La hipertensión es una de las causas principales de muerte prematura en el mundo.

Una de las metas mundiales para las enfermedades no transmisibles es reducir la prevalencia de la hipertensión en un 25% en 2030 (con respecto a los valores de referencia de 2010).

La Cuenta de Alto Costo (CAC) ha presentado un informe reciente sobre la situación de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), la Hipertensión Arterial (HTA) y la Diabetes Mellitus (DM) en Colombia durante el 2020.

Este ha sido un análisis detallado de la información reportada por las empresas administradoras de planes de beneficios (EAPB) con los datos de cada una de las personas con estas enfermedades, que son atendidos en el sistema de Salud.

Cabe resaltar que, la ERC se caracteriza por la alteración de la estructura o función del riñón con implicaciones específicas en la salud de quien la padece. Las causas más comunes de ERC son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial.

Asimismo, el documento ha indicado que el año 2020 estuvo marcado por la pandemia causada por la COVID-19, la cual ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los pacientes con ERC y sus precursoras en cuanto a la inequidad en salud durante las crisis sanitarias.

Esta situación ha exigido cambios drásticos en la atención y en las políticas sanitarias a nivel nacional y mundial, que pueden comprometer el seguimiento clínico de los pacientes con ERC, debido a la cancelación, postergación o atención por telemedicina; a la escasez de recursos sanitarios y al riesgo de infección de estos pacientes, ha recalcado el informe.

Sobre algunos datos que representan el comportamiento de la ERC y su impacto en la salud del país:

-Para el periodo comprendido entre el primero de julio de 2019 al 30 de junio de 2020, se ha incluido en el análisis la información de 4.934.914 personas diagnosticadas con hipertensión arterial o diabetes mellitus o enfermedad renal crónica, de los cuales 4.751.706 fueron casos vivos y activos y 253.726 muertos o desafiliados.

-La prevalencia cruda para hipertensión arterial ha sido de 9,08 casos por cada 100 habitantes, la cual ha tenido una tendencia creciente desde el año 2013.

-Se han reportado 168.778 casos nuevos de diabetes mellitus, de los cuales el promedio de edad de los casos fue de 61,34 años (DE $\pm 13,72$).

Según la CAC en Bogotá en el año 2021, se registraron 54.233 muertes, lo que representa una tasa de mortalidad general de 692,3 muertes por cada 100.000 habitantes, siendo mayor la mortalidad en hombres con una tasa de 796,8 versus la tasa en mujeres que fue de 596,2. Claramente la tasa de mortalidad general en 2021 presenta un valor atípico comparado con el resto de la serie años 2005 a 2019, pues la emergencia pandémica ocasionada por el virus SARS COVID-19 incidió en la mortalidad prematura y afectó el comportamiento del indicador.

En el grupo de edad de 45 a 59 años, la primera causa de muerte en 2021 fue resto de enfermedades infecciosas y parasitarias en ambos sexos y de 2019 hacia atrás en la primera causa se sitúan las enfermedades isquémicas del corazón, y el comportamiento empieza a variar en este caso evidenciándose diferencias de causas de mortalidad por sexo, siendo para hombres la principal causa la grupo de las enfermedades del corazón, mientras que para las mujeres, el cáncer de mama es el que ocupa el primer lugar.

En el siguiente grupo que son los mayores de 60 años, la tasa de mortalidad es mayor en hombres que en mujeres, este grupo comparte la principal causa de mortalidad en el periodo 2005 a 2019, las cuales corresponden al grupo de las **enfermedades isquémicas del corazón**, en este sentido es importante mencionar que la hipertensión arterial (HTA) es una de las enfermedades base que daña el corazón porque es un factor de riesgo que acelera el desarrollo de aterosclerosis de las arterias coronarias y puede favorecer la aparición de cardiopatía isquémica (angina de pecho, infarto de miocardio...).

Por otra parte, la HTA mal controlada puede provocar en el corazón hipertrofia ventricular izquierda (el músculo del ventrículo izquierdo "engorda") lo que puede debilitarlo y provocar insuficiencia cardíaca.

La presión arterial alta (hipertensión) puede dañar de manera discreta el organismo durante años antes de que se manifiesten los síntomas. La hipertensión arterial no controlada puede generar discapacidad, una mala calidad de vida o incluso un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular letal.

El tratamiento y los cambios en el estilo de vida pueden ayudar a controlar la hipertensión arterial para reducir el riesgo de complicaciones que ponen en riesgo la vida. (Fuente texto Mayo Clinic)

En cuanto a la atención domiciliaria en salud

Fortalecer la atención domiciliaria para pacientes crónicos radica en la necesidad imperante de abordar las complejidades asociadas con la gestión de enfermedades crónicas dentro del entorno del hogar.

En la actualidad, el aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas ha generado una presión significativa sobre los sistemas de salud, requiriendo estrategias innovadoras para abordar las complejas necesidades de los pacientes afectados. La justificación para que los pacientes crónicos sean atendidos en salud en el ámbito domiciliario se fundamenta en los siguientes aspectos cruciales:

1. Mejora de la Calidad de Vida:

- La atención domiciliaria ofrece la oportunidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes crónicos al proporcionar cuidados personalizados en un entorno familiar. La familiaridad del hogar puede contribuir a la comodidad psicológica y emocional, elementos fundamentales para el bienestar de quienes enfrentan enfermedades a largo plazo.

2. Eficiencia en la Utilización de Recursos:

- La atención domiciliaria no solo responde a las necesidades individuales de los pacientes, sino que también presenta la posibilidad de optimizar la utilización de recursos de salud. La reducción de hospitalizaciones innecesarias y visitas a salas de emergencia puede aliviar la carga sobre los sistemas de atención médica y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios.

3. Promoción de la Autonomía del Paciente:

- La atención domiciliaria empodera a los pacientes crónicos al fomentar su participación activa en el manejo de su salud. La autonomía y la autogestión son aspectos cruciales para afrontar las complejidades de las enfermedades crónicas y mejorar la adherencia al tratamiento.

4. Integración de Tecnologías Innovadoras:

- El uso de tecnologías de la salud en el hogar, como monitores remotos y aplicaciones móviles, permite un seguimiento continuo y la recopilación de datos valiosos. La investigación en este ámbito puede explorar cómo estas herramientas contribuyen a la gestión efectiva de las enfermedades crónicas y facilitan la comunicación entre pacientes y profesionales de la salud.

5. Reducción de Costos a Largo Plazo:

- La atención domiciliaria tiene el potencial de reducir los costos asociados con la atención a pacientes crónicos a lo largo del tiempo. Al prevenir complicaciones y mejorar la gestión de la salud, se pueden lograr ahorros significativos en comparación con enfoques más tradicionales.

6. Desarrollo de Modelos de Atención Innovadores:

- La atención en domicilio para los pacientes crónicos contribuirá al desarrollo de modelos de atención innovadores y sostenibles. Estos modelos pueden servir como base para la mejora continua de la atención médica, adaptándose a las cambiantes necesidades de una población envejecida y con enfermedades crónicas en aumento.

La propuesta se justifica teniendo como base el proceso de transformación positiva que tendrá la atención a pacientes crónicos, promoviendo la calidad de vida, la eficiencia en el uso de recursos y la integración de enfoques centrados en el paciente. La comprensión de estos aspectos no solo beneficiará a los individuos afectados, sino que también contribuirá al desarrollo de sistemas de salud más efectivos y sostenibles.

III. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así:

DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.

Art. 12. Atribuciones. *Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: (...)*

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

(...)

III. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación. Las medidas a adoptar deberán ser financiadas con el presupuesto de las entidades pertinentes.

Es relevante mencionar, para el caso en concreto, que no obstante lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia C-911 de 2007, puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en obstáculo para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa, afirmando:

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo”.

“(…) Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del ministro de Hacienda”.

V. TÍTULO – ATRIBUCIONES - CONSIDERANDOS

VI. ARTICULADO

PROYECTO DE ACUERDO NO 644 DE 2025**PRIMER DEBATE****POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DE PACIENTES CRONICOS (HIPERTENSOS Y DIABETICOS) EN ESTADO DE POBREZA Y VULNERABILIDAD DEL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES****EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.,**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993

Artículo 1. Establecer los lineamientos para fortalecer la atención en salud de la población pobre y vulnerable del distrito capital que presenten enfermedades crónicas como la Hipertensión y la Diabetes.

- a) Establecer la atención médica en domicilio como puerta de entrada al acceso a los servicios de salud requeridos por esta población que dadas sus condiciones socioeconómicas no accede de forma oportuna a los servicios médicos.
- b) Garantizar la continuidad de los servicios en salud complementarios, terapéuticos y de diagnóstico en el ámbito domiciliario de acuerdo con las normas vigentes.
- c) Verificar y garantizar la existencia y suficiencia de dispositivos médicos y medicamentos requeridos para la atención adecuada, de esta población con la entrega efectiva en domicilio.
- d) Promover en domicilio espacios de capacitación donde se trabaje el autocuidado a partir de talleres en los que se ofrece información básica sobre la enfermedad y donde se trabajan distintas habilidades para favorecer que la ciudadanía adopte un rol más activo y responsable en el cuidado de su salud.
- e) Desarrollar investigaciones y reportes estadísticos que permitan realizar análisis y evaluación del impacto en términos de mejora en la calidad de vida de esta población, así como el impacto en la disminución de ingresos a urgencias y hospitalizaciones a causa de complicaciones por el mal control de estas enfermedades.
- f) Fomentar entre los actores del sistema de salud en el distrito este modelo de atención en el cual se trabaje de forma cooperativa y multidisciplinaria.
- g) Prevenir complicaciones médicas en esta población y con ello aportar a la sostenibilidad del sistema.

Artículo 2. La Secretaría de Salud será la encargada de realizar el diseño, implementación y desarrollo de las estrategias necesarias para implementar y poner en marcha los lineamientos para fortalecer la atención en salud de la población pobre y vulnerable del distrito capital que presenten enfermedades crónicas como la Hipertensión y la Diabetes.

Artículo 3. La Administración Distrital, podrá buscar alianzas o articular acciones con otras entidades públicas, que le permitan cumplir el presente Acuerdo.

Artículo 4. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

H.C. JULIÁN ESPINOSA ORTÍZ.

Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

PROYECTO DE ACUERDO NO 645 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA AUDIOVISUAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. “BOGOTÁ CIUDAD SEGURA Y PROTECTORA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES””

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**OBJETO DEL PROYECTO**

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto, la creación y puesta en funcionamiento de la estrategia Distrital de divulgación y prevención de la violencia infantil, “Bogotá ciudad segura y protectora de niños, niñas y adolescentes” a través de creación de un programa audiovisual de prevención de la violencia infantil y la implementación de acciones de capacitación para los empleados públicos y contratistas de las diferentes entidades de orden distrital que en su misionalidad laboral y obligaciones contractuales deben interactuar con niños, niñas y adolescentes. Estrategias que tienen como propósito identificar, apropiar y aplicar las diferentes rutas para denunciar casos de violencia infantil.

I. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente proyecto de acuerdo está sustentado en las siguientes normas circunscritas a la Constitución Nacional, a las leyes colombianas y los acuerdos del distrito capital, relacionadas con la seguridad y el acceso a la información.

• DE ORDEN CONSTITUCIONAL

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. Artículos 44 y 45 Los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos contra toda forma de abandono, violencia, explotación laboral o económica, trabajos riesgosos, sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás. Así mismo, se establece un margen de protección al adolescente y a su formación integral, en el marco del bloque de constitucionalidad y la legislación vigente.

• DE ORDEN LEGAL

Decreto 2158 de 1948 Nivel Nacional. Se regula los requisitos para solicitar y otorgar permisos a menores para laborar.

Ley 74 de 1968. Aprueba el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos. Fija como una obligación la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.

Decreto 859 de 1995. Por medio del cual se crea el Comité Interinstitucional para la erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Menor Trabajador.

Ley 515 de 1999. Por medio de la cual se aprueba el Convenio 138 sobre la Edad Mínima de Admisión de Empleo, adoptada por la 58 Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza, el veintiséis (26) de junio de mil novecientos setenta y tres (1973).

Ley 679 de 2001. Medidas de protección contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores de edad.

Ley 833 de 2003. Aprueba el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados.

Ley 1146 de 2007. Prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente.

Ley 1620 de 2013 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.

Ley 1804 de 2016. Por la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones.

Ley 1878 de 2018. Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones.

Ley 704 de 2001. Aprueba el Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, en su artículo 3° que define lo que se entiende bajo la expresión "peores formas de trabajo infantil".

Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia: Requiere al Estado, la sociedad y la familia a proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Armoniza las normativas internas con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, indicando que su naturaleza es pública, irrenunciable y de aplicación preferente. El Código de Infancia y Adolescencia incorpora el enfoque de protección integral y establece su obligatorio cumplimiento. Así las cosas, dispone la obligación de actuar para proteger a los niños y las niñas frente a la amenaza y vulneración de sus derechos. Establece que la edad mínima de admisión al trabajo es los 15 años. Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la respectiva autorización expedida por el Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el Ente Territorial Local y gozarán de las protecciones laborales consagrados en el régimen laboral colombiano, las normas que lo complementan, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, la Constitución Política y los derechos y garantías consagrados en este código. Los adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la formación y especialización que los habilite para ejercer libremente una ocupación, arte, oficio o profesión y a recibirla durante el ejercicio de su actividad laboral.

Ley 1146 de 2007 Expide normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. Crea el Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas del Abuso Sexual. En esta norma se define la violencia sexual contra menor de edad todo acto o comportamiento de tipo

sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor, particularmente la ejercida por grupos armados organizados o grupos armados delincuenciales organizados.

Decreto 4690 de 2007. Se creó la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Organizados al Margen de la Ley y de los Grupos Delictivos Organizados, con el mandato de articular las acciones de prevención de estas vulneraciones con las entidades del Estado en los ámbitos nacional y local y aquellas desarrolladas por las organizaciones sociales y la cooperación internacional.

Ley 2137 de 2021. Por la cual se crea el Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas y Adolescentes, se modifica la Ley 1146 de 2007 y se dictan otras disposiciones.

RESOLUCIÓN(ICBF) 316 de 2011. Por medio de la cual se establecen medidas para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes frente al trabajo y obras en la minería.

RESOLUCIÓN(ICBF) 1513 de 2016 Por medio de la cual se aprueba el lineamiento técnico para la atención de niños, las niñas y adolescentes, con derechos inobservados, amenazados o vulnerados, en situación de trabajo infantil.

- **NORMATIVIDAD DISTRITAL**

Acuerdo 238 de 2006. Por el cual se ordenó la creación y estructuración del Sistema de Monitoreo de las condiciones de vida de la infancia y adolescencia del Distrito Capital; y lo define como “el conjunto de procesos, procedimientos y herramientas que permiten evaluar de forma continua, los efectos y las tendencias y señalar alertas en períodos determinados, sobre las políticas, planes, programas y proyectos desarrollados por los diferentes actores sociales, tendientes a garantizar los derechos de los niños, las niñas y adolescentes de Bogotá”.

Decreto 031 de 2007. Define el sistema operativo y técnico del SMIA, y pone en cabeza de la Secretaría Distrital de Integración Social su administración, “entendida como los procesos de identificación de necesidades de información, análisis y uso de la información, y de la actualización del sistema”.

Directiva 4 de 2010 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Con ocasión de la expedición de la Directiva 03 de 2010, relacionada con la implementación de prácticas efectivas que contribuyan a la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, tales como: incorporar previsiones en los contenidos de los contratos que se celebren para garantizar la protección legal relacionada con la contratación o vinculación de menores, la Secretaría Distrital de Integración Social ha remitido la "Guía para el Control del Desarrollo de la Política Pública de Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Protección al Joven Trabajador". Por lo anterior, es pertinente que los Despachos conozcan las principales acciones que sobre la materia ha venido adelantando el Distrito Capital, las cuales se

condensan en la citada Guía, cuyo contenido puede ser consultado en el Sistema de Información Régimen Legal de Bogotá, disponible en la página web www.alcaldiabogota.gov.co a efecto que éstas sean orientadoras en el propósito de contribuir con dicha prevención y erradicación, desde los diferentes sectores de la Administración Distrital. Asimismo, establece la conformación de la Mesa Distrital de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil, así como el objetivo de la misma.

Directiva 003 de 2010 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Solicita a las entidades y organismos distritales implementar prácticas efectivas que contribuyan a la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, en el marco de sus competencias y funciones, entre éstas, incorporar previsiones en los contenidos de los contratos que celebren, según su naturaleza, para garantizar la protección legal relacionada con la contratación o vinculación de menores de edad en actividades de las definidas en la Lista adoptada mediante la Resolución 4448 de 2005, emitida por el Ministerio de la Protección Social. De igual forma instruye que debe informarse el resultado de la gestión a la Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia.

Decreto 520 de 2011 que adopta la Política Pública de Infancia y Adolescencia para Bogotá 2011 – 2021, en su artículo 13, incorpora el SMIA.

ACUERDO 702 DE 2018. Por el cual se adoptan lineamientos para la definición de estrategias de prevención frente a la ocurrencia de crímenes cibernéticos que amenazan o vulneran los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del distrito capital.

Acuerdo 785 del 2020. Por medio del cual se fortalecen y articulan el sistema de monitoreo de condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes (SMIA), la ruta integral de atención desde la gestación hasta la adolescencia (RIAGA) y el sistema de seguimiento niño a niño (SSNN), para la prevención, detección y atención del trabajo infantil en Bogotá y se dictan otras disposiciones.

Acuerdo 828 de 2021. Por el cual se establece el diseño, la implementación, monitoreo y evaluación de un plan distrital en prevención de violencia por razones de sexo y género con énfasis en violencia intrafamiliar y sexual.

II. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

La ciudad de Bogotá presenta grandes desafíos en la protección y cuidado de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), la protección de la infancia y adolescencia debe contemplar las medidas y acciones destinadas a garantizar el bienestar físico, emocional y psicológico de los NNA. Esto incluye prevenir y responder a situaciones de violencia, abuso, negligencia, explotación y otras formas de violación de sus derechos.

Los garantes de la protección de los NNA son aquellas personas, instituciones y organizaciones que tienen la responsabilidad y el deber de protegerlos, esto incluye al Estado, la sociedad civil, las familias, las escuelas y otros actores relevantes.

Los casos de violencia infantil son alarmantes según los reportes de la Estadística Delictiva de la Policía Nacional, entre enero y agosto del año 2023, se presentaron en el país 8.295 delitos sexuales contra menores de edad; de los cuales 4.605 fueron contra niños y niñas y 3.690 contra adolescentes. igualmente, un informe

reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha revelado una cifra alarmante: 360.000 menores de edad trabajan en el país. (determinar como pie de pagina la fuente precisa de donde se toma la información)

A continuación, se relacionan cifras que dan cuenta de la violencia de los NNA en la ciudad de Bogotá, para el año 2023.

CIFRAS SISTEMA DE ALERTAS - BOGOTÁ 2023

SITUACIONES TIPO III - VIOLENCIA SEXUAL	EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1.934
	EN REDES SOCIALES	105
	SALIDAS PEDAGÓGICAS	11
	TOTAL CONTEXTO EDUCATIVO	2.050
PRESUNTO AGRESOR	ASEADORES (AS)	2
	COMPAÑEROS (AS)	1.688
	COORDINADOR (A)	2
	DOCENTES	296
	MADRE	1
	OTRO	16
	ORIENTADOR (A)	11
	PERSONAL DE VIGILANCIA	5
	RECTOR (A)	2
	SECRETARIO (A)	1
	REPARADORES	1
	SIN IDENTIFICAR	25

CICLO DE VIDA DE LA VÍCTIMA	PRIMERA INFANCIA (3 A 5 AÑOS)	101
	INFANCIA (6 A 11 AÑOS)	791
	ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS)	1.130
	ADULTEZ (MAYOR DE EDAD)	28
NACIONALIDAD DE LA VÍCTIMA	COLOMBIANOS	1.944
	VENEZOLANOS	104
	OTROS EXTRANJEROS	2
TIPO DE COLEGIO	PÚBLICO	1.585
	PRIVADO	465

Fuente: Sistema Alertas Distrito Capital - cálculos PGN - 30 de agosto de 2023

Fuente: Procuraduría General de la Nación.³

Muertes violentas en niños, niñas y adolescentes, según manera.
Colombia, ciudades capitales año 2023* (enero- febrero)

Municipio del hecho	Homicidio	Eventos de transporte	Accidental	Suicidio	Total
Armenia	1	-	-	4	5
Barranquilla	5	-	2	-	7
Bogotá, D.C.	14	4	1	5	24
Bucaramanga	2	-	1	-	3

³ <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/procuraduria-revelo-alarmando-panorama-violencia-sexual-infantil-Colombia.aspx>

Lesiones no fatales en niños, niñas y adolescentes, según contexto.

Colombia, ciudades capitales, enero - febrero de 2023*

Municipio del hecho	Exámenes médico legales por presunto delito sexual	Violencia interpersonal	Violencia intrafamiliar	Lesiones en eventos de transporte	Violencia de pareja	Lesiones accidentales	Total
Arauca	8	5	5	1	-	-	19
Armenia	23	10	6	2	-	2	43
Barranquilla	45	31	16	-	4	1	97
Bogotá, D.C.	486	285	244	29	21	16	1.081
Bucaramanga	23	36	11	5	1	1	77

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.⁴

Los datos revelan que la violencia en NNA en la ciudad de Bogotá, es un problema grave y alarmante, es importante tomar medidas para combatirla, comprendiendo la situación actual para poder proteger eficazmente, minimizando los impactos y daños físicos y emocionales que genera. La violencia infantil puede causar lesiones físicas y psicológicas duraderas en los niños, afectando su salud y bienestar a largo plazo.

Por lo anteriormente expuesto, es prioritario promover una iniciativa que inste a la Administración Distrital a implementar una estrategia de divulgación, educación y prevención de la violencia infantil en la ciudad de Bogotá, que funcione como un componente pedagógico al servicio de la ciudadanía en especial con los empleados públicos y contratistas de entidades distritales que en sus funciones, objeto contractual u obligaciones realicen acciones con NNA.

La violencia infantil es un delito que debe ser denunciado de manera efectiva para proteger a los menores de edad. Con la implementación de la estrategia “Bogotá ciudad segura y protectora de niños, niñas y adolescentes” se busca que los diferentes empleados de las entidades distritales identifiquen, apropien y apliquen las diferentes rutas para denunciar casos de violencia infantil.

Al capacitar a los empleados públicos sobre cómo reconocer y reportar la violencia contra los NNA, previene su ocurrencia y protege a los más vulnerables de nuestra sociedad. La educación ciudadana contra la violencia infantil ayuda a crear un ambiente en el que ellos se sientan seguros y protegidos. Al capacitar a los empleados públicos sobre la importancia de proteger y cuidar a los NNA se crea una cultura de cooperación social que trabaja mancomunadamente para garantizar el bienestar de ellos.

Denunciar los casos de abuso y violencia es crucial para proteger a la niñez y la adolescencia. Es importante saber cómo denunciar estos casos a las autoridades correspondientes, de la forma más efectiva, clara y precisa que garantice que los NNA reciban la protección y el apoyo necesario.

III. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

⁴ https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/879608/boletin_NNA_2023_junio.pdf

EL Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así:

DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.

Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:
(...)

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

(...)

IV. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación. Las medidas a adoptar deberán ser financiadas con el presupuesto de las entidades pertinentes.

I. ARTICULADO

PROYECTO DE ACUERDO NO 645 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA AUDIOVISUAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. “BOGOTÁ CIUDAD SEGURA Y PROTECTORA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES””

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C.

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993,

ACUERDA:

Artículo 1. Objeto. El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto, la creación y puesta en funcionamiento de una estrategia Distrital de divulgación y prevención de la violencia infantil, “Bogotá ciudad segura y protectora de niños, niñas y adolescentes”.

Artículo 2. Crear un programa de transmisión audiovisual que proporcione la identificación y la prevención del maltrato infantil a través del sistema de comunicación pública de Bogotá-región. (Canal Capital)

Artículo 3. Crear un curso de 20 horas que permita la implementación de acciones de capacitación para los empleados públicos y contratistas de las diferentes entidades de orden distrital, que en su misionalidad laboral y obligaciones contractuales deban interactuar con niños, niñas y adolescentes. Esta estrategia tiene como propósito, la prevención, la identificación, apropiación y aplicación de las diferentes rutas existentes para denunciar casos de violencia infantil. La capacitación aludida se puede dar en espacios de inducción y reinducción.

Artículo 4. La administración en cabeza de la Secretaría de Integración Social y el Canal Capital, desde sus competencias crearán el programa audiovisual y diseñarán las rutas pedagógicas y de divulgación e implementación y coordinación progresiva de la estrategia “Bogotá ciudad segura y protectora de niños, niñas y adolescentes”

Parágrafo. El programa audiovisual a que se ha hecho referencia tendrá un formato de 30 minutos con transmisión semanal.

Artículo 5. De forma periódica se deberá evaluar la incidencia e impacto por parte de sus ejecutores, teniendo en cuenta el diseño pedagógico y de divulgación, proporcionando la apropiación y aplicación de las rutas de denuncia por parte de las entidades y sus empleados.

Parágrafo. De acuerdo con lo anterior, el distrito informara anualmente al Concejo Distrital de Bogotá en cabeza de la entidad de realizar la aplicación.

Artículo 6. Implementación: la administración tendrá 6 meses para la implementación del acuerdo a partir de su formulación.

Artículo 7. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación

H.C. JULIÁN ESPINOSA ORTÍZ.

Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

PROYECTO DE ACUERDO NO 646 DE 2025**PRIMER DEBATE****OBJETO DEL PROYECTO**

“POR MEDIO DEL CUAL SE BUSCA FORTALECER LOS SERVICIOS Y ACCESO A LA JUSTICIA EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”

I. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente proyecto de acuerdo está sustentado en las siguientes normas circunscritas a la constitución nacional, a las leyes colombianas y los acuerdos del distrito capital, relacionadas.

- **DE ORDEN CONSTITUCIONAL**

ARTICULO 228°—La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.

Artículo 229 ARTICULO 229°—Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.

- **DE ORDEN LEGAL**

Ley 270 de 1996. Artículo 1. Administración De Justicia. La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional.

Artículo 2. Acceso A La Justicia. El Estado garantiza el acceso de todos los asociados a la administración de justicia. Será de su cargo el amparo de pobreza y el servicio de defensoría pública. En cada municipio habrá como mínimo un defensor público.

Artículo 3. Derecho De Defensa. En toda clase de actuaciones judiciales y administrativas se garantiza, sin excepción alguna, el derecho de defensa, de acuerdo con la Constitución Política, los tratados internacionales vigentes ratificados por Colombia y la ley. Los estudiantes de derecho pertenecientes a los consultorios jurídicos de las universidades debidamente reconocidas por el Estado podrán ejercer la defensa técnica con las limitaciones que señale la ley, siempre y cuando la universidad certifique que son idóneos para ejercerla

Ley 1285 de 2009 Artículo 6°. Gratuidad. La administración de justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las agencias en derecho, costas, expensas y aranceles judiciales que se fijen de conformidad con la ley. No podrá cobrarse arancel en los procedimientos de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, ni en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la tutela y demás acciones constitucionales. Tampoco podrá cobrarse aranceles a las personas de escasos recursos cuando se decrete el amparo de pobreza o en aquellos procesos o actuaciones judiciales que determinen la ley.

Decreto 1477 de 2000. Por el cual se adopta el Programa Nacional Casas de Justicia, cuyo objeto es facilitar a la comunidad el acceso a la justicia, prioritariamente en las zonas marginales, en las cabeceras municipales y en centros poblados de los corregimientos de más 2.500 habitantes.

Decreto 2897 de 2011. Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho. Asigna las funciones a la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, entre estas, las relacionadas con el programa.

Decreto 1069 de 2015. Decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho, el cual incorporó el decreto 1477 de 2000, que adopta el Programa Nacional de Casas de Justicia con el “objeto facilitar a la comunidad el acceso a la justicia, prioritariamente en las zonas marginales, en las cabeceras municipales y en centros poblados de los corregimientos de más 2.500 habitantes”. Destaca los objetivos fundamentales del programa, los servicios, las entidades participantes y las responsabilidades de cada una de ellas.

Decreto 1427 de 2017. Modifica el decreto ley 2897 de 2011, estableciendo las funciones de la Dirección de MASC (Métodos alternativos de solución de conflictos), entre las que se encuentra: “apoyar en el diseño, coordinación, divulgación y fomento de la política pública en materia de acceso a la justicia a través del Programa Nacional de Casas de Justicia y del Programa Nacional de Centros de Convivencia Ciudadana, en coordinación con las entidades competentes”.

- **CONVENIOS**

Convenio Nacional de 2005. Ante la necesidad de incorporar nuevos elementos para la proyección y sostenibilidad del programa nacional, se firmó el 29 de julio de 2005 el convenio nacional para la puesta en marcha del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana en Colombia.

SENTENCIAS.

C-037 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, señalo:

“El acceso a la administración de justicia implica, entonces, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Sin embargo, la función en comento no se entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados”.

T-799 de 2011, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

(..)

“Como se puede observar el derecho en mención tiene un contenido múltiple, del cual se pueden identificar tres categorías (i) aquéllas que tienen que ver con el acceso efectivo de la persona al sistema judicial; (ii) las garantías previstas para el desarrollo del proceso; y (iii)

finalmente las que se vinculan con la decisión que se adoptó dentro del proceso en cuestión o la ejecución material del fallo.

La primera comprende: (i) el derecho de acción; (ii) a contar con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de derechos y obligaciones[5]; y (iii) a que la oferta de justicia permita el acceso a ella en todo el territorio nacional[6]. La segunda incluye el derecho a (iv) que las controversias planteadas sean resueltas dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas[7]; (v) que éstas sean decididas por un tribunal independiente e imparcial; (vi) a tener todas las posibilidades de preparar una defensa en igualdad de condiciones; (vii) que las decisiones sean adoptadas con el pleno respeto del debido proceso[8]; (viii) que exista un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias[9]; (ix) que se prevean herramientas necesarias para facilitar el acceso a la justicia por parte de las personas de escasos recursos[10]. La última de éstas abarca (x) la posibilidad efectiva de obtener respuesta acorde a derecho, motivada y ejecutable; y que (xi) se cumpla lo previsto en esta.

(...)

“Así las cosas, para la garantía del derecho a la prestación jurisdiccional es imprescindible garantizar la puerta de entrada al sistema de administración de justicia de los ciudadanos que concurren al aparato estatal en busca de la solución a sus conflictos, las garantías para transitar por el proceso y una salida satisfactoria de éste, según lo previsto por el ordenamiento jurídico, lo que comporta la materialización de los derechos a través del respaldo coactivo del Estado para el cumplimiento efectivo de las decisiones adoptadas en el curso del proceso.

Al respecto, cabe anotar que el derecho de acceso a la administración de justicia va más allá del mero acceso formal a las instancias jurisdiccionales y de la obtención de un pronunciamiento formal de los jueces o tribunales conocedores de la controversia, sino que exige para su concreción, que las decisiones emitidas sean efectivamente cumplidas, pues solo así se logra la firme materialización de los derechos. Circunstancia que se ve coartada con la indebida retención de documentos como la primera copia, que impiden la oportunidad que una autoridad jurisdiccional conozca de la controversia.”

T-421 de 2018 M.P. Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

“Facilitar el derecho a la administración de justicia conlleva la adopción de medidas para que todas las personas, sin distinción, tengan la posibilidad de ser parte en un proceso. Asimismo, ese deber de tomar medidas implica la obligación de remover los obstáculos económicos para acceder a la justicia, crear la infraestructura necesaria para administrarla y asegurar la asequibilidad de los servicios del sistema de justicia para toda la población.. Por su parte, la creación de infraestructura judicial implica la asignación de recursos técnicos y la provisión de los elementos materiales adecuados en los puestos de trabajo de los operadores de justicia para garantizar un acceso eficiente a la administración de justicia.

13.- Lo anterior, permite concluir que el acceso a la justicia en términos constitucionales es un derecho fundamental en sí mismo y un derecho garantía. En efecto, la obligación de garantía

respecto del derecho de acceso a la justicia se refiere al deber que tiene el Estado de hacer todo lo que esté a su alcance para el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Es decir, se trata de lograr el buen gobierno de la función y la provisión de infraestructura para que los jueces puedan ejercer su importante labor.

Entonces, la realización de dicho derecho no se limita a la posibilidad que debe tener cualquier persona de plantear sus pretensiones ante las respectivas instancias judiciales, sino que se trata de una garantía que se extiende a dotar de infraestructura a las juezas y jueces para que puedan acceder al ejercicio de administrar justicia y de esta forma garantizar la eficiente prestación de este servicio público.”

- **NORMATIVIDAD DISTRITAL**

Convenio Interadministrativo 1 de 2005 Secretaría Distrital de Gobierno. Convenio Local para el desarrollo y puesta en funcionamiento del Programa de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana en Bogotá, D.C., suscrito entre el Ministerio del Interior y la Secretaría Distrital de Gobierno. Convienen que la estructura básica de las Casas de Justicia de Bogotá estará conformada por las siguientes dependencias distritales: Secretaría de Gobierno: Inspecciones de Policía, Unidad de Apoyo a la Justicia Comunitaria con sus correspondientes salas de Conciliación, Centro de Recepción e Información (CRI), Oficina de Desarrollo Comunitario, Centro de Cómputo y por el Departamento Administrativo de Bienestar Social -DABS- Comisaría de Familia. Así mismo, y previa la suscripción de los respectivos convenios, participarán las siguientes entidades: Personería Distrital, Fiscalía General de la Nación - Salas de Atención al Usuario - SAU-; Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -INML- Consultorio de Médico Legista; Defensoría del Pueblo - Defensor Público: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF- Defensoría de Familia; Ministerio de la Protección Social - Inspector de Trabajo y Universidades Consultorios jurídicos y psico-sociales.

II. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

La ciudad de Bogotá se ha caracterizado por ser referente político administrativo en Colombia, sus administraciones han dejado legados valiosos desde la Cultura Ciudadana del alcalde Mockus, pasando por la Bogotá sin Hambre del alcalde Lucho Garzón hasta las Manzanas del Cuidado de la alcaldesa Claudia López. Siempre, por sus particularidades, Bogotá está en constante dinámica de enfrentar los retos que desde los territorios se le proponen a la administración.

Uno de esos retos actualmente está compuesto por la triada de: la seguridad, la convivencia y el acceso a la justicia, entendiendo que una ciudad de 20 localidades de más de 7 millones de habitantes según censo del 2018 debe hacer frente a las problemáticas que cada una de estas variables presenta. Si bien es cierto que es tarea de los gobiernos locales brindar las condiciones necesarias para el goce pleno y efectivo de los derechos, en especial para el acceso a la justicia también es cierto que, por razones económicas, de capacidad instalada, de voluntad política esto no siempre se cumple.

Bogotá es una ciudad que ha avanzado en el Programa Nacional de Casas de Justicia pasamos de tener 13 en 2016 casas a 16 en el 2023 algunas con ruta especial de atención mujeres y niños las mismas se encuentran ubicadas de la siguiente manera:



Tomado de: <https://scj.gov.co/es/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/casas-justicia>

Pero ¿qué es una casa de justicia y para qué sirve?

Es un espacio físico a través del cual se brinda información, orientación y direccionamiento a los ciudadanos para poder tramitar sus conflictos y adelantar los trámites que requieran, a través de los actores que prestan sus servicios en sus instalaciones. En este sentido, la Casa agrupa a las entidades del sector justicia bajo un mismo techo. En una misma Casa pueden prestar sus servicios: la Comisaría de Familia, la Inspección de Policía, la fiscalía general de la Nación, Personería, Secretaría de la Mujer, ICBF, Medicinal Legal, entre otras. No en todas las Casas de Justicia se encuentran las mismas entidades operadoras. Sin embargo, obre el servicio que prestan casas de justicia en Bogotá la Personería Distrital advierte en noviembre de 2023 que:

Algunos servicios ofertados no funcionan en todas las sedes lo que dificulta la priorización y atención de poblaciones en situación de vulnerabilidad y zonas marginales de la Capital.

El informe de vigilancia y control, adelantado este año por la Personería de Bogotá, verificó el funcionamiento, gestión y estrategias de atención en las Casas de Justicia en Bogotá, las cuales deberían agrupar servicios prestados por distintos operadores como la Secretaría de la Mujer, el ICBF, Comisarias de Familia, Inspecciones de Policía, Fiscalía General de la Nación, Juzgados de Pequeñas Causas y la Dirección de Acceso a la Justicia y la Secretaría Distrital para la Seguridad, Convivencia y Justicia.

Entre las deficiencias halladas por los profesionales de la Personería de Bogotá se resalta que en ninguna Casa de Justicia de la ciudad se tienen habilitados convenios para contar con inspectores de trabajo, defensores públicos, jueces de paz y mecanismos de justicia de pueblos étnicos.

Las visitas realizadas permitieron confirmar, además, que el servicio de Consultorio Jurídico que ofrecen las Casas de Justicia se realiza casi exclusivamente de manera virtual, con excepción de la Casa de Justicia de Engativá, donde se presta este servicio presencial, una vez a la semana. Aunque todas las Casas cuentan con disponibilidad de espacios para la prestación de este servicio, la virtualidad casi exclusiva se presenta como una barrera de acceso a la justicia, toda vez que el programa prioriza la atención de la población con condiciones de vulnerabilidad y marginalidad, sobre la cual se presumen dificultades de acceso al internet, equipos de cómputo y/o manejo de estos.

Llama la atención de este informe que:

...la Casa de Justicia de Puente Aranda tiene una infraestructura cinco pisos, de los cuales solo dos se encuentran habilitados para la atención al público, ya que de momento la Casa cuenta únicamente con los servicios de Centro de Recepción e Información (CRI) y Comisaría de Familia. En la Casa de Justicia de Tunjuelito no se encuentran habilitados servicios presenciales prestados por operadores del orden nacional (Fiscalía, Juzgados, ICBF y Medicina Legal).

Otra situación que dificulta el acceso de las comunidades a los servicios de las Casas de Justicia, es la ubicación de su sede física.

En la localidad de Kennedy los servicios para el acceso a la justicia se encuentran ubicados en zonas de estrato tres, principalmente al costado oriental de la Localidad. En contraste, se puede identificar una franja conformada por manzanas pertenecientes al estrato socioeconómico dos hacia el occidente. Se puede notar que existe una gran distancia entre esta franja y el sector donde se ubican los servicios judiciales. Así mismo, es notorio que las Casas de Justicia de Kennedy y Puente Aranda se encuentran ubicadas en zonas aledañas, pero distantes de los barrios más pobres de cada localidad.

En la Localidad de Usme se evidenció que la Casa de Justicia se ubica en el sector Usme Pueblo, que, si bien es principalmente identificado como de estrato dos, queda muy retirado de los sectores que concentran la mayoría de población de la Localidad, los cuales presentan estratificación uno y dos. Por su parte, en la Localidad de Usaquén la Casa de Justicia se ubica en el costado más occidental, mientras que los sectores identificados con estrato uno y dos se localizan en el borde oriental, hacia los cerros.

En localidades como Puente Aranda, Suba y Barrios Unidos las Casas de Justicia se ubican en sectores socioeconómicos que van desde la clase media hasta la clase alta, a pesar de lo cual se encontró que estas

localidades se presentan alta comisión de delitos y problemáticas ligadas a la violencia intrafamiliar en contra de mujeres y niños, niñas y adolescentes de menores recursos.⁵

Si bien es cierto la ciudad de Bogotá trata de responder con calidad de manera eficaz y eficiente en la oferta de servicios al ciudadano como lo propone el programa nacional de Casas de Justicia donde convergen las siguientes instituciones:

- Fiscalía Local o Seccional
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF
- Inspección de Trabajo (Min. de Trabajo)
- Medicina Legal
- Registraduría Nacional del Estado Civil
- Policía Nacional
- Procuraduría General de la Nación -PGN Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas –
- UARIV Agencia para la Reincorporación y la Normalización-ARN

Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial También es cierto que hay algunos vacíos en la prestación de los servicios de las mismas. En el caso concreto de la Fiscalía, en localidades como Ciudad Bolívar, Bosa o Kennedy, localidades que presentan un alto tráfico de necesidades al respecto, los ciudadanos han manifestado que no siempre está el funcionario que atienda o reciba los requerimientos que estos presentan o por la complejidad del requerimiento debe ser interpuesto en otro sitio que tenga el servicio.

El caso de los Centro de Radicación de Demandas da una vista rápida de la carencia e insuficiencia de los servicios prestados en las Casas de Justicia a saber: si bien es cierto existe 16 Casas de Justicia solo en 3 funcionan los Centros de Radicación como lo advierte la misma Secretaría Justicia Seguridad y Convivencia:

- CASA DE JUSTICIA CIUDAD BOLIVAR
- CASA DE JUSTICIA MÁRTIRES
- CASA DE JUSTICIA BOSA

La pregunta salta a la vista ¿qué sucede con otras localidades donde seguro se requiere el servicio? Que pasa con Kennedy, Engativá, Suba, o Teusaquillo localidades de gran tamaño territorial y poblacional. ¿Como los ciudadanos acceden a esos servicios?

⁵ Rescatado el 5 de diciembre 2023 <https://www.personeriabogota.gov.co/sala-de-prensa/notas-de-prensa/item/1180-deficiencias-en-el-acceso-a-los-servicios-de-las-casas-de-justicia-para-la-poblacion-mas-vulnerable-advierte-personeria-de-bogota>

El caso de oferta de servicios a continuación es el de la localidad de Tunjuelito, como se observa en la imagen la localidad no cuenta con servicio de Fiscalía.

Operadores y otros servicios	Horarios de atención	Tipo de atención
Centro de Recepción e Información	L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m.	Presencial Atención por el canal virtual
Comisaría de Familia (Móvil)	Mi - J 9:00 a.m. - 1:00 p.m.	Presencial
Unidades de Mediación y Conciliación	L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m.	Presencial
Receptor de denuncias	L-V 8:00 a.m. a 4:00 p.m.	Presencial
Facilitadores para el Acceso a la Justicia	Ma y J 7:30 a.m. a 4:00 p.m.	Presencial (Requiere previo agendamiento)
Secretaría de la Mujer	M y J 9:00 a.m. - 4:00 p.m.	Presencial

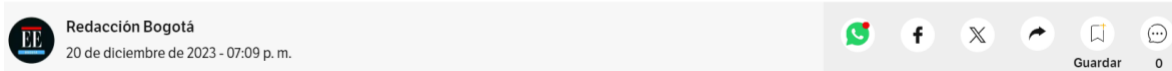
Dirección: Calle 51 sur # 7 - 35

Tomado de: https://scj.gov.co/es/justicia/casas-justicia-1#informacion_entidad-block_2-15

De otro lado el servicio de facilitadores de justicia solo se presta dos días a la semana. La atención en los servicios debe ser de calidad y constante y si se requiere doblar esfuerzos aún más. Para temporadas fuertes como las de fin de año por el desarrollo de las festividades también sería necesario tener planes de contingencia aun así sorprende la noticia del diario el Espectador:

Radicación de demandas en casas de justicia se suspenderá hasta el próximo año

El avance en los procesos radicados antes de la fecha, también retomará el curso a partir del 10 de enero. Lo anterior, debido al periodo de vacaciones de los despachos judiciales.



Tomado de: <https://www.elespectador.com/bogota/casas-de-justicia-no-recibiran-demandas-hasta-el-proximo-ano-bogota-noticias-hoy/>

Pese a contar dentro de la SSCJ con una dirección llamada: Acceso a la Justicia cuya finalidad es: *la encargada de organizar y liderar la política pública en materia de justicia a nivel distrital. Su objetivo es articular la justicia formal, no formal, comunitaria para lograr satisfacer las necesidades que tienen los ciudadanos en este campo, fortaleciendo la confianza en la justicia.* Se hace pertinente fortalecer los vínculos o convenios que con las distintas entidades de orden local y nacional se tiene, para la prestación óptima de los servicios y así garantizar el goce pleno y efectivo de los derechos de los ciudadanos en Bogotá.

III. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

EL Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en los numerales 1 y 3 que facultan a la Corporación para dictar normas así:

DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.

Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: (...)

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

IV. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación.

PROYECTO DE ACUERDO NO 646 DE 2025

PRIMER DEBATE
PROYECTO DE ACUERDO XXX DE 2025

(XXXX)

“POR MEDIO DEL CUAL SE BUSCA FORTALECER LOS SERVICIOS Y ACCESO A LA JUSTICIA EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 12 numerales _____

I. ARTICULADO

ARTICULO PRIMERO: la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia gestionara los convenios para garantizar la presencia de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo en las casas de justicia de la ciudad de Bogotá.

PARAGRAFO PRIMERO: La SSCJ en conjunto con las entidades definirán las acciones pertinentes para que los funcionarios de las mismas presten los servicios durante todos los días de la semana.

PARAGRAFO SEGUNDO: En ningún caso Bogotá a través de las diferentes entidades, podrá cobrar arriendo a las entidades nacionales que gratuitamente garanticen canales de denuncia en estas casas de justicia

ARTICULO SEGUNDO: La Secretaría De Seguridad, Convivencia y Justicia promoverá en conjunto con la Fiscala y Defensoría del Pueblo la creación de una ruta rápida de atención de las denuncias interpuestas por los ciudadanos en las diferentes localidades de Bogotá.

PARAGRAFO: La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo coordinaran una plataforma de denuncias a través de los medios digitales para los servicios de justicia en la ciudad de Bogotá.

ARTICULO TERCERO: La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia debe propender por la creación de un plan pedagógico interinstitucional que informe sobre los servicios a los que tienen acceso los ciudadanos.

ARTICULO CUARTO: La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia podrá establecer alianzas estratégicas con diferentes sectores con el fin de garantizar formas de acceso a la justicia en las diferentes localidades de Bogotá.

ARTÍCULO QUINTO. Implementación. El tiempo de implementación del presente acuerdo será de doce (12) meses a partir de su sanción.

Parágrafo: De acuerdo con lo anterior, La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, informará anualmente al Concejo de Bogotá los avances del presente acuerdo

Artículo 6. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

H.C. JULIÁN ESPINOSA ORTÍZ.

Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

PROYECTO DE ACUERDO NO 647 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN PERMANENTE DE LA ESTRATEGIA DISTRITAL, JORNADA COMPLEMENTARIA EN DEPORTE, RECREACIÓN, ARTE Y CULTURA (JORNADA DRAC)”****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****OBJETO DEL PROYECTO**

Establecer lineamientos para la implementación permanente de la estrategia distrital, jornada complementaria en deporte, recreación arte y cultura.

I. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente proyecto de acuerdo está sustentado en las siguientes normas circunscritas a la Constitución nacional, a las leyes colombianas y los acuerdos del distrito capital:

- **DE ORDEN CONSTITUCIONAL**

Constitución política de Colombia

Artículo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

- **DE ORDEN LEGAL**

Ley 181 de enero 18 de 1995. Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte.

ARTÍCULO 1º.- Los objetivos generales de la presente Ley son el patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de todas las personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la educación física para contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad.

Artículo 7.- Los entes deportivos departamentales y municipales coordinan y promoverán la ejecución de programas de programas recreativos para la comunidad, con la asociación con entidades públicas y privadas.

Artículo 14.- Los entes deportivos departamentales y municipales diseñarán conjuntamente con las secretarías de educación correspondientes los programas necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Educación General y concurrirán financieramente para el adelanto de programas específicos, tales como centros de educación física, centros de iniciación y formación deportiva, festivales recreativos escolares y juegos Intercolegiados.

LEY 115 DE 1994 Ley general de educación

Señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad.

ARTÍCULO 14. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatoria en los niveles de la educación preescolar, básica y media cumplir con:

b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión o desarrollo

ARTÍCULO 85. *Jornadas en los establecimientos educativos.* El servicio público educativo se prestará en las instituciones educativas en jornada única, la cual se define para todos los efectos, como la jornada escolar en la cual los estudiantes desarrollan actividades que forman parte del plan de estudios del establecimiento educativo y el receso durante al menos siete (7) horas al día. Tratándose de preescolar el tiempo dedicado al plan de estudios será al menos de seis (6) horas.

Las secretarías de educación implementarán los mecanismos para asegurar que los establecimientos educativos entreguen, dentro de sus informes periódicos de evaluación, la relación del total de horas efectivas desarrolladas en cada una de las áreas obligatorias y fundamentales, establecidas por la Ley General de Educación.

LEY 1098 DE 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia.

ARTÍCULO 30. DERECHO A LA RECREACIÓN, PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL Y EN LAS ARTES. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes.

LEY 397 DE 1997. Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.

Artículo 1º—De los principios fundamentales y definiciones de esta ley. La presente ley está basada en los siguientes principios fundamentales y definiciones:

3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana.

8. El desarrollo económico y social deberá articularse estrechamente con el desarrollo cultural, científico y tecnológico. El plan nacional de desarrollo tendrá en cuenta el plan nacional de cultura que formule el gobierno. Los recursos públicos invertidos en actividades culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público social.

Artículo 2º—Del papel del Estado en relación con la cultura. Las funciones y los servicios del Estado en relación con la cultura se cumplirán en conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la política estatal sobre la materia son la preservación del patrimonio cultural de la Nación y el apoyo y el estímulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional.

Artículo 17. —Del fomento. El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacífica. Temas: Estímulos y promoción a la creación.

Artículo 18. —De los estímulos. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo en cada una de las siguientes expresiones culturales: a) Artes plásticas; b) Artes musicales; c) Artes escénicas; d) Expresiones culturales tradicionales, tales como el folclor, las artesanías, la narrativa popular y la memoria cultural de las diversas regiones y comunidades del país; e) Artes audiovisuales; f) Artes literarias; g) Museos (museología y museografía); h) Historia; i) Antropología; j) Filosofía; k) Arqueología; l) Patrimonio; m) Dramaturgia; n) Crítica; ñ) Y otras que surjan de la evolución sociocultural, previo concepto del Ministerio de Cultura.

• **NORMATIVIDAD DISTRITAL**

Acuerdo 4 de 1978 Por el cual se crea el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte

Artículo 2º.- Funciones. El Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte tendrá las siguientes funciones:

1. Formular políticas para el desarrollo masivo del deporte y la recreación en el Distrito Especial, con el fin de contribuir al mejoramiento físico y mental de sus habitantes, especialmente de la juventud.
2. Coordinar con otras instituciones oficiales o privadas, dedicadas a estas materias, el planeamiento y ejecución de sus programas.

Decreto Distrital 558 de 2006 "Por el cual se determina el objeto, la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y se dictan otras disposiciones"

Artículo 1 - OBJETO. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte tiene por objeto orientar y liderar la formulación concertada de políticas, planes y programas en los campos cultural, patrimonial, recreativo y deportivo del Distrito Capital en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y con la participación de las entidades a ella adscritas y vinculadas y la sociedad civil.

Artículo 2. FUNCIONES. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, tendrá las siguientes funciones básicas:

- a. Formular estrategias para garantizar la conservación y enriquecimiento de la creación y expresiones culturales propias de la ciudad diversa en su conformación étnica, socio cultural e histórica.
- b. Diseñar estrategias de divulgación y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible.
- c. Velar por el ejercicio del deporte en sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas en pro de la formación de las personas y la preservación del desarrollo de una mejor salud en el ser humano.
- d. Formular mecanismos para lograr la participación de los ciudadanos y ciudadanas en programas recreativos y deportivos en desarrollo del derecho constitucional que le asiste a todas las personas para la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre.
- f. Impulsar la formación y gestión de actividades y programas artísticos, culturales, deportivos y de alto rendimiento, acorde con los planes sectoriales y con el plan de desarrollo económico y social y de obras públicas del Distrito Capital.
- i. Coordinar la ejecución de las políticas, planes y programas en los campos cultural, patrimonial, recreativo y del deporte que desarrollen las entidades adscritas y vinculadas y las localidades.
- m. Promocionar actividades recreativas e impulsar masivamente la práctica deportiva no competitiva prioritariamente para los niños, jóvenes y adultos mayores.

Decreto No. 229 de 16 de junio de 2015 y modificado por el **decreto 483 de 2018** “Adoptase la Política Publica de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos para Bogotá - DRAFE, como instrumento de planeación de la administración para garantizar la realización efectiva de los derechos de las personas al deporte, la recreación, la actividad física, así como al disfrute de parques y escenarios”

TÍTULO III ESTRUCTURA

Artículo 9o.- Promover la participación. Garantizar el acceso de los habitantes de Bogotá D.C., al Deporte, la Recreación y la Actividad Física, generando las condiciones para el ejercicio efectivo y progresivo de sus derechos, en los Parques, Escenarios y equipamientos recreativos y Deportivos del Distrito Capital, mediante el desarrollo de las siguientes estrategias:

9.2 Promover la práctica del deporte, la recreación y la actividad física. Generar oportunidades para el goce del Deporte, la Recreación y la Actividad Física.

ACUERDO No. 761 DE 2020 “Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2020-2024 “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”

TÍTULO II

Propósitos, Logros De Ciudad Y Programas

CAPÍTULO I

Propósitos y Logros De Ciudad Al 2030

Artículo 9. Propósitos y Logros de ciudad

Se organiza en torno a 5 propósitos que se cumplen a través de 30 logros de ciudad mediante la articulación de acciones materializadas en programas.

Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.

Logro de Ciudad

9. Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro.

CAPÍTULO III

Programas y Metas Del Cuatrienio Del Plan Distrital De Desarrollo

Artículo 13. Programas estratégicos

Programas Estratégicos Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política

Programa estratégico 1

Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes.

Meta estratégica 6

Atender al 25% de los estudiantes de colegios públicos en jornada completa con tres días semanales de actividad. Atender adicionalmente al 12,15% de los estudiantes de colegios públicos con actividades complementarias para el buen uso del tiempo para su formación integral, mínimo un día a la semana.

Meta estratégica 19

Garantizar en los colegios públicos la implementación de estrategias en educación media a través de la orientación socio-ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que puedan elegir su proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI.

Meta estratégica 22

Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos y patrimoniales.

Artículo 14. Metas sectoriales en los programas generales

Programa general 14

Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

Meta sectorial 98

Atender al 25% de los estudiantes Públicos en jornada completa con 3 días semanales de actividad. Atender, adicionalmente al 12,15% de estudiantes de colegios públicos con actividades complementarias para el buen uso del tiempo para su formación integral, mínimo 1 día a la semana.

Meta sectorial 100

Realizar 1 proceso integral de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura.

Programa general 20

Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud

Meta sectorial 138

Formar 40.000 niñas, niños y adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria

Meta sectorial 141

Implementar 1 estrategia que articule el deporte en el Distrito Capital, para el desarrollo en la base deportiva

CAPÍTULO IV

Definición De Programas y Cumplimiento de ODS

Artículo 15. Definición de Programas

Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política.

Programa 14. Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios. Aumentar la calidad de la educación, con la pertinencia de la jornada única y completa, a la vez disminuir brechas de inequidad que existen en el sistema educativo. Así, Bogotá debe avanzar paulatinamente para que su fortalecimiento no redunde en impactos negativos sobre la cobertura, de manera integral y con articulación interinstitucional.

Esto significa, por una parte, que se debe fortalecer y garantizar el desarrollo de estrategias de formación integral relacionadas con áreas socio-ocupacionales, deportivas, artísticas, científicas, tecnológicas y ambientales, entre otras, con enfoque de familias, de derechos y considerando las condiciones excepcionales y de vulnerabilidad de los estudiantes.

TÍTULO IV Estrategias Para El Manejo De Los Impactos Social Y Económico Del Virus Covid-19

CAPÍTULO ÚNICO Estrategias Para El Manejo De Los Impactos Social Y Económico Del Virus Covid-19

Artículo 35. Priorización de las acciones del sector Cultura, Recreación y Deporte en la ejecución del Plan Distrital de Desarrollo. A fin de aportar de manera eficiente y articulada, al cumplimiento de los propósitos, logros, programas y metas contenidas en este Plan Distrital de Desarrollo en el marco de la emergencia y post emergencia sanitaria por el COVID 19, las entidades del sector Cultura, Recreación y Deporte, deberán ejecutar prioritaria y prevalentemente las acciones y recursos a su cargo.

c.- La ejecución de programas y proyectos que, desde el Sector Cultura, Recreación y Deporte permitan apoyar a los agentes que hacen parte del sector en condición de vulnerabilidad, en el marco de la normatividad vigente;

e.- La implementación de procesos integrales de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura, la creación, el patrimonio, la recreación y el deporte

II. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

La ciudad de Bogotá presenta grandes retos en materia de educación física, recreación, deporte, arte y cultura; por tanto, los estudiantes (niños, adolescentes y jóvenes) requieren opciones adecuadas para el aprovechamiento positivo y creativo del tiempo libre, además de la generación de nuevas oportunidades para el desarrollo de sus talentos deportivos, recreativos y artísticos.

Por otro lado, la implementación progresiva de la jornada escolar única que plantea la ley de educación nacional, que propende por crear mejores experiencias educativas, de mayor calidad y con miras a un desarrollo integro de los

estudiantes, daría un paso importante con la implementación permanente de procesos conscientes que se estructuren desde una pedagogía crítica como una práctica política, social y cultural.

La educación física es uno de los factores que inciden en el proceso educativo integral de los estudiantes y desarrolla habilidades desde lo motriz, combate la falta de actividad física en los niños y jóvenes escolarizados, educando en la higiene corporal; por otro lado, el sedentarismo se caracteriza por una insuficiente actividad física, deportiva o recreativa e incrementa el riesgo de padecer sobre peso u obesidad que trae consigo una serie de enfermedades asociadas; sumando a esto una mala alimentación, conlleva a la aparición de enfermedades como la diabetes, problemas del corazón, cáncer, problemas musculares y de huesos, así como aumenta el riesgo de sufrir de depresión.

En el estudio publicado en la revista 'The Lancet Child & Adolescent Health'. De la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Leanne Riley sobre práctica de ejercicio físico entre adolescentes, se dieron a la tarea de estimar el número de personas de 11 a 17 años que no cumplen con una hora diaria de actividad física, analizando los datos reunidos en 146 países entre 2001 y 2016 entre 1,6 millones de estudiantes, el estudio reveló que:

- Cuatro de cada cinco jóvenes en el mundo son sedentarios
- 81 por ciento de los adolescentes escolarizados (el 85 % de las niñas y el 78 % de los niños) no cumplían la recomendación de una hora diaria de actividad física, en el 2016, frente a 82,5 % en el 2001.
- En latinoamericana es peor, 80 % de los chicos y 89 % de las chicas no cumplen
- En Colombia, en el 2001 en 81,7 % de los jóvenes y el 86,8 % de ellas eran sedentarios, en el 2016 las cifras se ubicaban en 81 y 87 por ciento, respectivamente. En general el sedentarios está en 83,9 %.

Según este estudio, los expertos recomiendan la puesta en marcha de medidas en sectores como el educativo para conseguir el objetivo que la OMS se fijó en su asamblea anual de 2018: reducir el porcentaje de jóvenes que no hacen ejercicio, en ambos sexos, a un 70% antes de 2030.

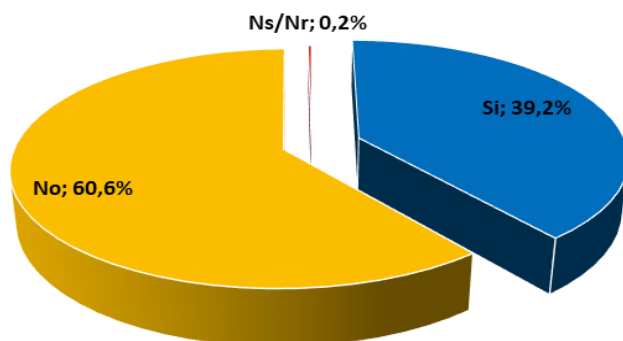
Según la experta de la OMS Leanne Riley “Las escuelas tienen que asumir el papel de aumentar y animar la educación física y acrecentar las oportunidades de participar en deportes escolares”

Así mismo, el director del Centro de Estudios en Medición de la Actividad Física (Cema) de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario en 2017, Jorge Correa Bautista, explica que “**solo 3 de cada 10 niños entre 9 y 17 años, en Bogotá, cumplen las recomendaciones de actividad física de la Organización Mundial de la Salud (OMS): 60 minutos diarios de ejercicio, entre moderado y vigoroso**”.

El Cema cuenta con una línea base de estilos de vida de la población escolar de varias ciudades del país, entre ellas Bogotá, que muestra una baja condición física de los escolares, que en un estudio evaluó a 12.000 niños y adolescentes entre los 9 y los 17 años, pertenecientes a 24 colegios distritales; revelando entre otras cosas que:

- 6 de cada 10 alumnos de noveno grado de la capital tienen bajo nivel de condición cardiorrespiratoria, relación que se sube a siete en el caso de las mujeres.
- Dos de cada 10 estudiantes de este mismo grado presentan un peso superior al normal.
- Cuatro de cada 10 niños entre 9 y 17 años han consumido cigarrillos y alcohol en los últimos seis meses.
- Dejo en evidencia “la baja fuerza en miembros superiores e inferiores, significa que no están haciendo suficiente ejercicio, tenemos niños que no se mueven, y eso es un riesgo cardio metabólico. Esa es la razón por la cual vemos infartos en edades cada vez más tempranas”

Según la encuesta bienal de Culturas que se aplicó en 2017 a 16.132 personas mayores de 13 años; el 60,6% de los encuestados no practica ningún deporte.

P112.¿Practica algún deporte en la actualidad?**P119.Principalmente, ¿por qué razón no practica deporte?**

Aunque según la EBC la práctica de algún tipo de deporte paso del 34% en 2015 al 39% en 2017, mejorando en algo la práctica deportiva en Bogotá, aún existen grandes retos por cumplir al respecto.

Ahora bien, la práctica recurrente de actividad física a través de actividades recreativas o deportivas constituyen para un niño y joven grandes beneficios que redundan en lo físico, cognitivo, emocional y social.

Del mismo modo, la Organización Mundial de la Salud OMS, en su **Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud**, recomienda que, para los niños y jóvenes entre los 5 y 17 años, la actividad física consiste en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en el contexto de

la familia, la escuela o las actividades comunitarias. Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles ENT, se recomienda que:

1. Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa.
2. La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor para la salud.
3. La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en particular, los músculos y huesos.

En este punto los colegios juegan un papel preponderante en la promoción de la práctica deportiva y recreativa que trae consigo diferentes beneficios. Múltiples investigaciones afirman que los programas de ejercicio físico se asocian con aumentos significativos en la autoestima, particularmente en individuos con autoconcepto bajo (Sonstroem, 1997). Se encontró que los niveles altos de autoestima estaban asociados a la participación en programas de educación física, con lo que se reafirma que la actividad física es un protector importante para aquellas personas que tienen un autoconcepto bastante bajo (Gruber 1986).

De acuerdo a los resultados de investigaciones realizadas en torno al deporte en la escuela, se evidenció que la mejora en el rendimiento académico de los niños se encuentra relacionada positivamente con los logros en la escuela, específicamente en las matemáticas y la lectura. Los jóvenes que practican actividad adicional a la contemplada en los programas de formación en las escuelas, tienden a mostrar mejores cualidades como un mejor funcionamiento del cerebro; en términos cognitivos, niveles más altos de concentración de energía, cambios en el cuerpo que mejoran la autoestima y un mejor comportamiento que incide en los procesos de aprendizaje.

Las cualidades del cerebro que se mejoraron se asociaron a la actividad física regular y consisten en el alto flujo de sangre que recibe el órgano, los cambios en los niveles hormonales, la asimilación de los nutrientes, y la mayor activación del mismo (Shephard, 1997).

Como muestra de esto, la coordinadora técnica del programa Ludonutrición de la Corporación Juego y Niñez en 2017, Carolina Orjuela, hace las siguientes recomendaciones:

1. Los colegios deben tener en su pénsum, y de manera transversal, la enseñanza de estilos de vida saludable, lo cual incluye promover la actividad física y la alimentación sana.
2. Promover actividades físicas (no solo fútbol, baloncesto y voleibol) para los estudiantes en el tiempo libre o extracurricular.

De acuerdo a todo lo anteriormente mencionado, podemos evidenciar como la implementación de la jornada complementaria DRAC, puede traer mejoras significativas en el desempeño de los estudiantes y beneficios intrínsecos que impactan de diversas formas en el individuo y en su comunidad.

En el mismo sentido, el estudio de HARVARD FAMILY RESEARCH PROJECT. News and announcements 2008. Disponible en: [http://www.hfrp.org/hfrp-news/news-announcements/\(year\)/2008](http://www.hfrp.org/hfrp-news/news-announcements/(year)/2008), afirma que se pueden alcanzar mejoras con la jornada complementaria en los siguientes campos:

Académicos:

- Actitud positiva ante el colegio.
- Disminución en tasas de deserción escolar.
- Mejores resultados en las pruebas.
- Mayor aspiración educativa.

Sociales:

- Menos niveles de indisciplina.
- Mayor sociabilidad.
- Mejoramiento de la autoestima.
- Menores niveles de depresión y ansiedad.

Adicionalmente, conjuntamente la estrategia nacional del ministerio de educación junto con la fundación Carvajal en 2014 “**Lineamientos para la implementación de la Jornada Complementaria Educativa y Cultural**” encontró que existe “una correlación significativa entre la participación en esta estrategia y la reducción y prevención de comportamientos de riesgo, disminución de los factores generadores de violencia que afectan la vida escolar, contribuyendo así a la prevención de la violencia en los barrios, al mismo tiempo que se asocian con el mejoramiento de comportamientos tales como la capacidad para la resolución pacífica de conflictos, la interrelación con compañeros y la participación del núcleo familiar en asuntos relacionados con la vida escolar y la educación de sus hijos”.

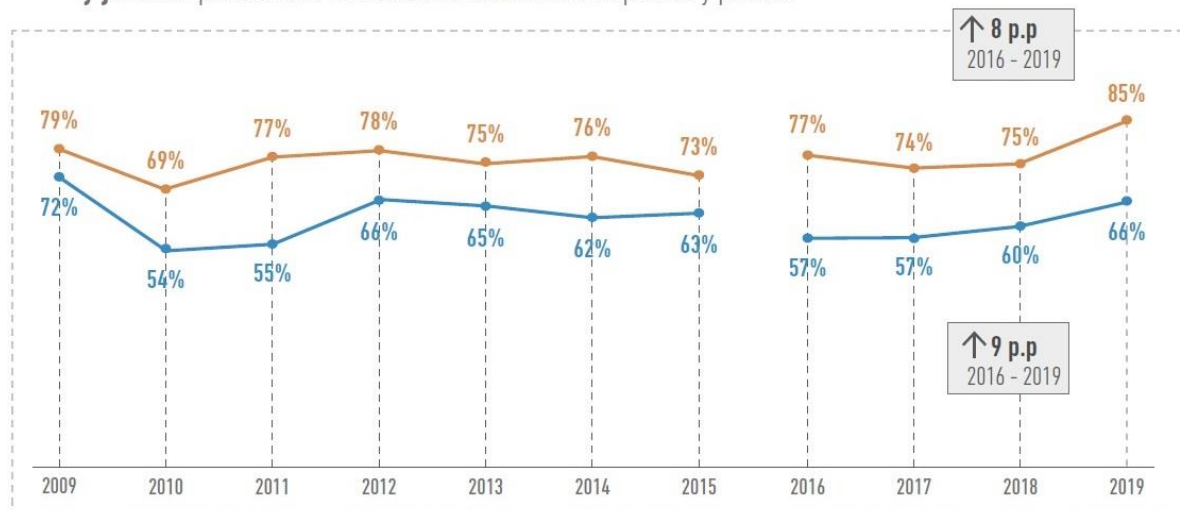
Es decir, la puesta en marcha de esta estrategia mejora significativamente la calidad de la educación en el distrito, propendiendo por mas y mejores espacios pedagógicos que fortalecen procesos motrices, lúdicos, sociales, psicológicos, artísticos y culturales, en toda la comunidad escolar de las diferentes instituciones educativas distritales; en consecuencia, relacionamos a continuación la encuesta de percepción ciudadana realizada en Bogotá hasta el 2019, que evidencia el camino recorrido y el por recorrer en términos de percepción y comparado con lo privado.



EDUCACIÓN

Ciudadanos que se sienten **satisfechos con la educación que reciben los niños y jóvenes** que asisten a un establecimiento educativo público y privado:

■ Satisfecho (Privados)
■ Satisfecho (Públicos)



Dentro de la educación, un factor importante es el acceso a las artes y la cultura, ya que son sinónimos de calidad y oferta diversa para todos; en relación, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes - CIDE Universidad Alberto Hurtado de Chile (2016) dice que “en efecto, cuando en la educación se incluyen diferentes manifestaciones creativas, como la música, el teatro, la danza o movimiento corporal y las artes visuales, mediales y literarias, se provee el máximo de oportunidades para el desarrollo integral y autónomo de las personas como sujetos de su propia experiencia”

Antecedentes

Es fundamental precisar que desde el año 2012 se crea el programa piloto 40X40 con el fin de enriquecer la experiencia de los estudiantes en el contexto escolar, como una apuesta fundamental en el camino de la calidad educativa, la excelencia académica y la formación integral, en un principio con 25 IED vinculadas desde lo recreativo, cultural y deportivo.

Según el estudio realizado por parte del IDEP (Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico) en el 2015 y denominado “*Jornada 40 x 40 Sistematización y análisis de la experiencia piloto*” este encontró entre otras que:

- La JE40h ha incorporado otras fuentes de conocimiento que bien pueden ser nuevos actores educativos, nuevos contextos, nuevos temas de interés que viven en la cultura y no han hecho su ingreso al aula, e incluso territorios inexplorados como el del cuerpo y otros sentidos. Al generar y sostener las condiciones para que los estudiantes accedan a estas nuevas fuentes, la JE40h está abriendo caminos hacia un conocimiento más significativo, más vivencial y más atractivo para los estudiantes.
- El proyecto JE40h como política educativa ha mostrado su potencial de transformación de la escuela. Es una estrategia importante, decisiva, de transformación y generación de condiciones de calidad educativa y de vida para los estudiantes y las familias.

Luego de la ejecución del programa 40X40 y para la entrada del nuevo gobierno, este transformo esta propuesta inicial en un nuevo proyecto de inversión que en su momento se denominó “Tiempo Escolar Complementario TEC” en el año 2016, por parte del Instituto distrital de recreación y deporte IDRDE en alianza con la secretaria de educación del distrito, con el objetivo general de ofertar alternativas de deporte y actividad física a los escolares de las Instituciones Educativas Distritales, a través de los centros de interés, con el propósito de contribuir a la formación integral y a cambios comportamentales de los mismos.

En consecuencia, existen múltiples factores por lo que la implementación permanente de la estrategia **Jornada complementaria en deporte, recreación, arte y cultura (jornada DRAC)** es de vital importancia para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas del distrito; además, debido a las acciones ya realizadas en años anteriores en este sentido, se ha venido avanzando de gran manera en el aprendizaje para la implementación permanente de un proyecto que pueda recoger estas experiencias organizándolas y estructurando una nueva estrategia que implemente la Jornada Complementaria

III. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así:

DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.

Art. 12. Atribuciones. *Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: (...)*

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

(...)

IV. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación. Las medidas a adoptar deberán ser financiadas con el presupuesto de las entidades pertinentes.

El Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, estableció:

“Artículo 7°. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”

Es relevante mencionar, para el caso en concreto, que no obstante lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia C-911 de 2007, puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en obstáculo para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa, afirmando:

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo”.

“(…) Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda”.

Por lo tanto, debido a que esta iniciativa se orienta en cumplir lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 en el *Artículo 13 – Programa Estratégico 1 – Meta Estratégica 6 - 19 - 22; Artículo 14. – Programa General 14 - Meta Sectorial 98 – 100 - Programa General 20 - Meta Sectorial 138 – 141; y Artículo 15 – Programa 14*, no habrá lugar a la modificación del marco fiscal de mediano plazo o la creación de una fuente adicional de financiación. En consecuencia, el presente Proyecto de Acuerdo no tiene impacto fiscal.

V. TÍTULO – ATRIBUCIONES - CONSIDERANDOS

PROYECTO DE ACUERDO NO 647 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN PERMANENTE DE LA ESTRATEGIA DISTRITAL, JORNADA COMPLEMENTARIA EN DEPORTE, RECREACIÓN, ARTE Y CULTURA (JORNADA DRAC)”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 12 numeral 1 del Decreto Ley 1421 de 1993,

VI. ARTICULADO**ACUERDA:**

Artículo 1. Lineamientos. Establecer lineamientos que conduzcan a la implementación de la estrategia jornada complementaria en deporte, recreación, arte y cultura (jornada DRAC) que tiene por objetivo brindar alternativas deportivas, en actividad física, actividades recreativas, artísticas y culturales a los estudiantes de las Instituciones Educativas Distritales; con el propósito de contribuir al adecuado desarrollo integral, físico, cognitivo, social y emocional de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Artículo 2. Recopilación técnica y teórica. Se deberá realizar un estudio que recopile los datos, información y experiencias acumuladas en los últimos años a través de los diferentes procesos similares llevados a cabo en el distrito, con la finalidad de relacionar y estructurar información relevante en la definición e implementación de la estrategia, para así construir la oferta deportiva, recreativa, artística y cultural adecuada a las necesidades de los niños, adolescentes y jóvenes del distrito.

Artículo 3. Implementación Jornada DRAC. La Secretaría de Educación del Distrito, la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, definirán planes de acción para la implementación coordinada y progresiva de la estrategia en los diferentes colegios del distrito por medio de acciones que propendan por su adecuada puesta en marcha. Lo anterior en el marco de sus competencias.

Artículo 4. Evaluación. Se deberá evaluar la incidencia e impacto de esta estrategia por parte de sus ejecutores, teniendo en cuenta el diseño, implementación y efectos, de acuerdo con el número de Instituciones educativas y estudiantes beneficiados, así como su impacto, deportivo, recreativo, artístico, social y cultural en estas comunidades. De lo anterior se informará anualmente al Concejo Distrital de Bogotá.

ARTICULO 5. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación

H.C. JULIÁN ESPINOSA ORTÍZ.

Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

PROYECTO DE ACUERDO NO 648 DE 2025

PRIMER DEBATE

**“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA ESTRATEGIA
CONTRA LA RECEPCIÓN DE AUTOPARTES, CELULARES Y MOBILIARIO
URBANO EN BOGOTÁ”**

OBJETO DEL PROYECTO

CREAR LA ESTRATEGIA CONTRA LA RECEPCIÓN DE AUTOPARTES, CELULARES Y MOBILIARIO URBANO EN BOGOTÁ.

VI. SUSTENTO JURÍDICO

• DE ORDEN CONSTITUCIONAL

Artículo 1º de la Constitución Política establece que *"Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general"*

Artículo 2º de la Constitución Política consagra que *"Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;*

(...) asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las Autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares."

Artículo 95 de la Constitución Política, el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en Colombia implica responsabilidades. Toda persona está obligada a respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas, defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica y propender al logro y mantenimiento de la paz.

- **DE ORDEN LEGAL**

Código Penal. Ley 599 de 2000. ARTÍCULO 327C. Receptación. Adicionado por la Ley 1028 de 2006 El que sin haber tomado parte en la ejecución de las conductas punibles descritas en los artículos 327-A y 327-B adquiera, transporte, almacene, conserve, tenga en su poder, venda, ofrezca, financie, suministre o comercialice a cualquier título hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan debidamente reglamentadas o sistemas de identificación legalmente autorizados, cuando tales bienes provengan de la ejecución de alguno de estos delitos, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de mil (1.000) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que destine mueble o inmueble o autorice o tolere en ellos tal destinación o realice cualquier actividad que facilite la comisión de las conductas mencionadas en el inciso anterior.

Código de Procedimiento Penal. Ley 906 de 2004.

VII. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

La creación de proyectos para combatir la receptación de celulares, autopartes y mobiliario público es crucial por varias razones:

Reducción del Crimen y la Delincuencia: La receptación es un delito que alimenta la cadena delictiva al darle salida a productos robados. Al desalentar este comportamiento, se puede reducir la motivación para cometer hurtos.

Protección del Patrimonio Público y Privado: La receptación afecta tanto a entidades públicas como a individuos privados. La recuperación de mobiliario público, celulares y autopartes robadas contribuye a proteger el patrimonio colectivo y personal.

Desarticulación de Redes Delictivas: Las personas que se dedican a la receptación suelen formar parte de redes delictivas más grandes. Al focalizarse en esta actividad, se puede dismantelar parte de estas redes y dificultar la circulación de bienes robados.

Restauración de la Seguridad Ciudadana: El hurto de celulares, autopartes y mobiliario público generan inseguridad en la ciudadanía. Al reducir este tipo de delitos, se contribuye a generar un entorno más seguro y confiable para todos.

Disminución del Mercado Negro y la Economía Ilícita: La receptación fomenta un mercado negro para los bienes robados. Al dificultar la venta y distribución de estos bienes, se desincentiva esta economía ilícita.

Promoción de la Colaboración Ciudadana: Proyectos contra la receptación pueden involucrar a la comunidad, fomentando la denuncia de actividades sospechosas y promoviendo la participación activa en la prevención del crimen, así como generando acciones que también desincentiven la compra de objetos hurtados.

En resumen, los proyectos orientados a combatir la receptación de celulares, autopartes y mobiliario público no solo protegen el patrimonio y la seguridad, sino que también contribuyen a debilitar redes delictivas, disminuir la economía ilegal y promover una cultura de colaboración ciudadana en la lucha contra el crimen.

VIII. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así:

DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.

Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: (...)

***1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.
(...)***

IX. IMPACTO FISCAL

El presente proyecto no genera ningún impacto fiscal adicional, solo traza una ruta adicional dentro del plan de acción de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, la cual puede llevarse a cabo con el presupuesto actual.

X. TÍTULO – ATRIBUCIONES - CONSIDERANDOS

PROYECTO DE ACUERDO NO 648 DE 2025

PRIMER DEBATE

PROYECTO DE ACUERDO XXX DE 2025

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA ESTRATEGIA

CONTRA LA RECEPTACIÓN DE AUTOPARTES, CELULARES Y MOBILIARIO URBANO EN BOGOTÁ

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 12 numeral 1 del Decreto Ley 1421 de 1993.

VI. ARTICULADO

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. La Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia y la Secretaría Distrital de Gobierno crearán la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá.

PARÁGRAFO 1: Entiéndase como autopartes las piezas de un vehículo automóvil o motocicleta que se pueden comercializar por separado.

PARÁGRAFO 2: Entiéndase como celular a los dispositivos telefónicos móviles de comunicación.

PARÁGRAFO 3: Entiéndase como mobiliario urbano, los paraderos, sillas, mesas, bancas, señales y otros elementos que están dados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos cuando se encuentran en los espacios públicos.

PARÁGRAFO 4: Entiéndase como mobiliario de servicios públicos, los contadores, tapas, canecas, luces, cables y demás elementos necesarios para brindar un óptimo servicio a la ciudadanía.

ARTÍCULO 2. Son elementos constitutivos de la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá los siguientes:

1. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia priorizará las zonas de acuerdo con los factores de riesgo y ocurrencia de delitos por hurto de vehículos y motocicletas, celulares y mobiliario urbano y de servicios públicos, así como las zonas de comercio de autopartes y talleres mecánicos, comercialización y reparación de celulares y comercio de reciclaje y materiales.
2. La Secretaría Distrital de Gobierno, a través de las Alcaldías Locales, llevará un detallado listado de los establecimientos comerciales de autopartes, talleres mecánicos, venta y reparación de celulares, bodegas de reciclaje y venta de materiales de la localidad, así como las zonas en las que se realice alguna de estas actividades de manera ilegal.

3. La Secretaría Distrital de Gobierno, a través de las Alcaldías Locales, llevará un archivo actualizado que contenga la información completa de los operativos de Inspección Vigilancia y Control (IVC) realizados en estos establecimientos, con el fin de hacer seguimiento a las medidas correctivas aplicadas a cada uno de estos y garantizar el posterior traslado a las inspecciones de policía.
4. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en conjunto con la Secretaría Distrital de Gobierno a través de las Alcaldías Locales, coordinarán las acciones de control conjuntamente con la Estación de Policía de la localidad, con el fin de verificar el correcto cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento de los establecimientos comerciales con venta de autopartes, talleres mecánicos, establecimientos de venta y reparación de celulares y bodegas de reciclaje. Estas acciones de control se deberán realizar como mínimo una vez al mes en cada una de las diferentes líneas de acción (Autopartes – Celulares – Mobiliario).
5. La Secretaría Distrital de Gobierno a través de las Alcaldías Locales, dispondrá de los recursos necesarios para llevar a cabo los operativos de control. (Transporte, carga de elementos y bodega para almacenaje).
6. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en conjunto con la Secretaría Distrital de Gobierno a través de las Alcaldías Locales, coordinarán las acciones de control conjuntamente con la Estación de Policía de la localidad, con el fin de realizar registros a vehículos y motocicletas, carretas u otros medios de transporte utilizados para la carga del reciclaje, así como registros a personas realizando la respectiva verificación de IMEI (International Mobile Equipment Identity) número único de identificación de dispositivos móviles, con el fin de garantizar que los vehículos, motocicletas o los celulares no se encuentren reportados por hurto. Estas acciones de control se deberán realizar como mínimo una vez por semana en los sectores previamente priorizados.
7. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en conjunto con la Secretaría Distrital de Gobierno a través de las Alcaldías Locales, rendirán un informe trimestral al Consejo Local de Seguridad, que contenga acciones realizadas y resultados de estas.
8. Cuando la evidencia así lo indique, se dará traslado de las direcciones de establecimientos comerciales, talleres de mecánica o puntos críticos, a la Dirección de Seguridad de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, área que articulará acciones con los entes investigadores (DIJIN – SIJIN – FISCALÍA) con el fin de impactar estructuras delincuenciales dedicadas a la receptación de autopartes, celulares o mobiliario público.

ARTÍCULO 3. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia a través de la Dirección de Seguridad, articulará con los entes investigadores (SIJIN – DIJIN – FISCALÍA) acciones de control por lo menos dos veces al mes en la ciudad de Bogotá, con el fin de prevenir el delito de receptación de autopartes. Celulares y mobiliario público.

ARTÍCULO 4. La Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia conjuntamente con la Secretaría Distrital de Gobierno a través de las Alcaldías Locales crearán la mesa intersectorial local contra la receptación.

ARTÍCULO 5. Son funciones de la mesa intersectorial local contra la receptación las siguientes:

- a. Realizar seguimiento, evaluación y priorización de acciones de prevención, convivencia ciudadana y control en las zonas priorizadas por cada una de las líneas de acción (Autopartes, celulares y mobiliario público).
- b. Citar a las entidades distritales involucradas para articular las acciones de prevención, convivencia ciudadana y control a implementar.
- c. Coordinar acciones intersectoriales con el fin de sensibilizar y capacitar a los actores involucrados en la problemática. (Comerciantes, mecánicos, vendedores, recicladores, habitantes de calle, carreteros y comerciantes del reciclaje).
- d. Rendir informe trimestral al Consejo Local de Seguridad, de las Mesas realizadas, acciones operativas y resultados obtenidos.
- e. La mesa intersectorial local contra la receptación sesionará como mínimo cada 3 meses. Para ello la Secretaría Distrital de Gobierno a través de las Alcaldías Locales coordinará la logística para la realización de las reuniones.

ARTÍCULO 6. Son integrantes permanentes de la mesa intersectorial local contra la receptación las siguientes entidades:

1. Un delegado de la Alcaldía Local del área de Gestión Políciva quien presidirá el espacio.
2. Un delegado de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia quien llevará la Secretaría Técnica.
3. Los delegados de la UAESP de Recolección, barrido y limpieza, Aprovechamiento y Alumbrado público
4. Un delegado de la Subdirección Local de la Secretaría Distrital de Integración Social.
5. Un delegado del DADEP.
6. Un delegado de la Secretaría Distrital de Movilidad.
7. Un delegado de la Estación de Policía Local (Dinamizador de código).

ARTÍCULO 7. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

H.C. JULIÁN ESPINOSA ORTÍZ.

Concejal de Bogotá

Partido Alianza Verde

PROYECTO DE ACUERDO NO 649 DE 2025**PRIMER DEBATE*****“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 3 DEL ACUERDO 526 DE 2013 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”*****OBJETO DEL PROYECTO**

“MODIFICAR EL ARTICULO 3 DEL ACUERDO 526 DE 2013 EN LO QUE TIENE QUE VER CON LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE SEGURIDAD PARA LAS MUJERES”

XI. SUSTENTO JURÍDICO

- **DE ORDEN CONSTITUCIONAL**

Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia señala que "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones".

- **DE ORDEN LEGAL**

Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia en el inciso primero de su artículo 19 dispuso que "Los Consejos de Seguridad y Convivencia son cuerpos consultivos y de decisión para la prevención y reacción ante los problemas relacionados con la seguridad y la convivencia en el nivel nacional, regional, departamental, distrital, municipal o metropolitano. El Gobierno nacional establecerá mediante reglamentación los objetivos, funciones, integrantes y demás aspectos relacionados con el funcionamiento de los Consejos de Seguridad y Convivencia. De manera subsidiaria, las autoridades ejecutivas de los niveles distrital, departamental y municipal, considerando su especificidad y necesidad, podrán complementar la regulación hecha por el Gobierno nacional.

- **NORMATIVIDAD DISTRITAL.**

Acuerdo 526 de 2013. “Por el cual se crean los Consejos Locales de Seguridad de la Mujer”

XII. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

Este proyecto busca actualizar la conformación del quorum del Consejo Local de Seguridad para las Mujeres, garantizando la participación de entidades directamente involucradas en el mejoramiento de las condiciones que redundarán en una mayor seguridad para ellas.

Se plantea la inclusión de un(a) delegado(a) de la Secretaría Distrital de Salud en cambio de los Gerentes de los Hospitales de la localidad, teniendo en cuenta que la Secretaría Distrital de Salud es la entidad encargada de orientar y liderar la formulación, adaptación, adopción e implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias conducentes a garantizar el derecho a la salud de los habitantes del Distrito Capital.

Así mismo, la inclusión del(a) Subdirector(a) Local de Integración Social, esto teniendo en cuenta el incremento en los índices de habitabilidad en calle y su implicación con la seguridad de las mujeres, así como para garantizar la seguridad de las mujeres que habitan la calle que requiere atenciones diferenciales.

También se propone incluir al Director(a) Local de Educación, quienes son los mayores conocedores de las problemáticas en materia de seguridad que afectan a las niñas y adolescentes tanto en las entidades educativas como en los entornos escolares y familiares. Problemáticas que se han venido incrementando sobre todo en delitos como acoso sexual y abuso hacia las estudiantes de la ciudad.

Por último, se propone que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia como entidad encargada de liderar, planear, implementar y evaluar la política pública en materia de seguridad, convivencia y acceso a la justicia haga parte del quorum decisorio del Consejo Local de Seguridad para las Mujeres que debido a su creación en 2013 (antes de la creación de la Secretaría de Seguridad) requiere una actualización.

XIII. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así:

DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.

Art. 12. Atribuciones. *Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: (...)*

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

(...)

XIV. IMPACTO FISCAL

El presente proyecto no genera impacto fiscal alguno.

XV. TÍTULO – ATRIBUCIONES - CONSIDERANDOS

PROYECTO DE ACUERDO NO 649 DE 2025**PRIMER DEBATE*****“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 3 DEL ACUERDO 526 DE 2013
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”*****EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 12 numeral 1 del Decreto Ley 1421 de 1993.

VI. ARTICULADO**ACUERDA:**

Artículo 1. Modifíquese el artículo 3 del Acuerdo 526 de 2013, el cual quedará así:

“Artículo 3. Los Consejos Locales de Seguridad de Mujeres en las 20 localidades de Bogotá estarán conformados por:

1. El/la Alcalde/sa Local quien lo presidirá.
2. La delegada de la Secretaría Distrital de la Mujer, quien ejercerá la Secretaría Técnica.
3. El/la Comandante de la Estación de Policía de la Localidad.
4. El/la Personero/a Local.
5. Una delegada de las organizaciones de mujeres.
6. El/la coordinador (a) de la Comisaría de Familia de la localidad.
7. El/la delegada de la Secretaría Distrital de Salud.
8. El/la Subdirector/a de Integración Social de la localidad.
9. El/la Director/a Local de Educación.
10. El/la delegado/a de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia.

Parágrafo 1: A las sesiones del Consejo Local de Seguridad de mujeres, podrán asistir, como invitados, con voz pero sin voto, las autoridades y demás personas naturales o de derecho público o privado que el Consejo Local de Seguridad de Mujeres estime conveniente, previa invitación.

Parágrafo 2: Cada Consejo Local de Mujeres tendrá su propio reglamento protocolizado mediante un decreto local.

Parágrafo 3: La delegada de la organización de mujeres ante el Consejo de Seguridad de Mujeres, será elegida de ternas que presenten las organizaciones sin ánimo de lucro, jurídicamente reconocidas y cuyo objeto sea la promoción, el desarrollo y la protección de los derechos y la seguridad de las mujeres a través de un proceso democrático determinado y liderado por la Secretaría Distrital de la Mujer.

Parágrafo 4: La Secretaría Técnica del Consejo Local de Mujeres, la ejercerá la Secretaría Distrital de la Mujer, a través de la persona que esta designe. Las sesiones del Consejo constarán en actas realizadas por la Secretaría Técnica, las cuales serán suscritas por el/la Presidente/a del Consejo Local de Seguridad de Mujeres y la secretaria técnica, acompañadas de la planilla de asistencia a la sesión y los soportes que se anexen.

Parágrafo 5: En todo caso de diferencias de criterios o empates en votaciones para la toma de decisiones dentro del Consejo Local de Seguridad de Mujeres, el/la Alcalde/sa local, en su calidad de Jefe de Policía de la localidad dirimirá la diferencia, observando siempre el principio de concurrencia.

Artículo 2. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

H.C. JULIÁN ESPINOSA ORTÍZ.

Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

PROYECTO DE ACUERDO NO 650 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL SISTEMA DE VOLUNTARIOS BICI-USUARIOS EN SEGURIDAD PARA CICLORUTAS DE LA CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****OBJETO DEL PROYECTO**

“EL PRESENTE PROYECTO TIENE POR OBJETO DICTAR LOS LINEAMIENTOS PARA CREAR EL SISTEMA DE VOLUNTARIOS BICI-USUARIOS EN SEGURIDAD PARA DISMINUIR EL IMPACTO DE HURTOS EN LAS CICLO-RUTAS DE LA CAPITAL”.

I. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente proyecto de acuerdo está sustentado en las siguientes normas circunscritas a la Constitución nacional, a las leyes colombianas y los acuerdos del distrito capital:

- **DE ORDEN CONSTITUCIONAL**

Constitución Política de Colombia

Artículo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

ARTÍCULO 269. En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.

- **DE ORDEN LEGAL**

Ley 1801 de 2026 Por medio del cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana.

Ley 599 de 2000 Por el cual se expide el Código Penal.

Ley 906 de 2004 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

Ley 1811 de 2016, artículo 1 señala que se incentivará “(...) el uso de la bicicleta como medio principal de transporte en todo el territorio nacional; incrementar el número de viajes en bicicleta, avanzar en la mitigación del impacto ambiental que produce el tránsito automotor y mejorar la movilidad urbana”

- **DE ORDEN LEGISLATIVO.**

Decreto 497 de 2023 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C, **ARTÍCULO 15 “Fortalecer el transporte público como sistema posibilitador de la proximidad urbana y como sistema accesible en la escala local del Distrito”** Al respecto, la administración distrital deberá implementar corredores verdes de proximidad, rutas circulares de transporte público, expandir la red de cicloinfraestructura.

Acuerdo Distrital 386 de 2009, “Por medio del cual se declara de Interés Social, Recreativo y Deportivo la Ciclovía de Bogotá y se dictan otras disposiciones”;

Resolución conjunta 750 de 2020. “Por medio de la cual se crea la Mesa Técnica de Monitoreo y Seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana para los Ciclistas de Bogotá ‘La Bici nos Mueve con Seguridad’.” 2310460-FT-078 Versión 01 formulación de acciones que promuevan el uso de la bicicleta en todas las localidades del distrito Capital.

Decreto Distrital 657 de 2011, artículo 38 modificado por el Decreto Distrital 079 de 2018, establece que el Consejo Distrital de Seguridad y Convivencia: “es un cuerpo consultivo y de toma de decisiones en materia de prevención y reacción ante los problemas relacionados con la seguridad y la convivencia ciudadana en el Distrito Capital. Constituye la instancia o espacio de coordinación interinstitucional. en los que participan las autoridades político administrativas del Distrito Capital y las autoridades nacionales con la finalidad de propiciar la materialización de los principios de coordinación, concurrencia, subsidiaridad, solidaridad, planeación. complementariedad, eficiencia y responsabilidad entre las autoridades de diferentes órdenes del gobierno, que tienen competencias directas en materia de convivencia y seguridad ciudadana”

- **NORMATIVIDAD DISTRITAL**

ACUERDO 637 DE 2016: Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones

Artículo 5. Funciones básicas de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Además de las atribuciones generales establecidas para las Secretarías en el artículo 23 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia tendrá las siguientes funciones básicas:

- a. Liderar, orientar y coordinar la formulación, la adopción y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y la preservación del orden público en la ciudad.
- b. Liderar, orientar y coordinar con las entidades distritales competentes, el diseño, la formulación, la adopción y la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de prevención y cultura ciudadana que promuevan la convivencia, la resolución pacífica de conflictos y el cumplimiento de la ley.
- c. Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas para el mejoramiento de las rutas de acceso a la justicia y el fortalecimiento de los mecanismos de justicia formal, no formal y comunitaria.
- d. Coordinar y operar el Sistema Integral de Seguridad y Emergencias NUSE 123 del Distrito Capital, de manera conjunta, con la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE, y la Policía Metropolitana de Bogotá - MEOG, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y eficiente para la prevención y atención de los eventos de emergencias y seguridad en el Distrito Capital.
- e. Liderar, orientar y coordinar políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a la prevención del delito en niños, niñas y adolescentes, y las competencias del Distrito frente al sistema de responsabilidad penal adolescente en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
- f. Liderar, orientar y coordinar la política pública para el mejoramiento de la política carcelaria y penitenciaria en la ciudad de Bogotá y la atención al pos penado.
- g. Orientar y apoyar los programas de Policía Cívica en la ciudad de Bogotá D.C. de acuerdo con los lineamientos establecidos en la ley.
- h. Liderar, orientar y coordinar los servicios de emergencia del Distrito Capital en el marco del primer respondiente.
- i. Coordinar y liderar los consejos distritales y locales de seguridad y ejercer su secretaría técnica.
- j. Implementar mecanismos de cooperación con las entidades y organismos nacionales e internacionales, de acuerdo con la normativa que regula las actividades de inteligencia y contrainteligencia en Colombia y las directrices que sobre la materia expida el Gobierno Nacional.
- k. Liderar, orientar y coordinar las acciones sectoriales relacionadas con la seguridad ciudadana, la convivencia y el acceso a la justicia.
- l. Liderar, orientar y coordinar la formulación de los Planes Integrales de Seguridad para Bogotá, D.C., y las localidades, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 135 de 2004, o la normativa que lo modifique o sustituya.
- m. Definir los lineamientos estratégicos para la seguridad ciudadana y el orden público con las instituciones, entidades y organismos de seguridad del nivel territorial y Nacional.

n. Adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital.

o. Propiciar las condiciones de seguridad y convivencia pacífica a través del fortalecimiento de las acciones que adelantan la Policía Metropolitana de Bogotá, la Brigada XIII del Ejército Nacional, los Organismos de Seguridad e Inteligencia del Estado con Jurisdicción en el Distrito Capital y en general las autoridades cuya competencia se oriente a la prevención, conservación y mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la defensa dentro del perímetro de Bogotá, D.C.

p. Liderar, orientar y coordinar la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación estratégica para el fortalecimiento de la convivencia, la seguridad y la justicia, en coordinación con las entidades distritales, territoriales y nacionales competentes.

q. Liderar, orientar y coordinar las alianzas estratégicas con las comunidades, el sector privado y las entidades del orden distrital, territorial y Nacional, orientadas a la convivencia, la prevención del delito, la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia.

r. Liderar, orientar y coordinar la formulación y adopción de políticas, planes programas y proyectos dirigidos a la promoción, desarrollo y organización de las iniciativas y procesos ciudadanos solidarios desde la perspectiva de seguridad ciudadana.

s. Coordinar las acciones de protección que se requieran para grupos vulnerables en condición especial de riesgo asociado a su seguridad.

t. Participar con la Policía Metropolitana de Bogotá, D.C., en la identificación de líneas generales de diseño, formulación, adopción, seguimiento y evaluación de planes, proyectos y programas en seguridad ciudadana, que deban ser ejecutados por dicha institución, siguiendo las directrices, instrucciones y órdenes de la primera autoridad de Policía del Distrito Capital.

u. Recopilar, centralizar y coordinar la información sobre seguridad ciudadana y sistemas de acceso a la justicia de manera cualitativa y cuantitativa, incluyendo aquella relativa a las reacciones, posturas, propuestas y acciones de otras autoridades y de la sociedad civil.

v. Apoyar técnicamente a las Alcaldías Locales en la formulación y adopción de planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana, convivencia y acceso a la justicia de acuerdo con los lineamientos definidos por el Alcalde Mayor.

w. Evaluar y revisar periódicamente el impacto, la pertinencia y la oportunidad de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y acceso a la justicia trazadas por la Alcaldía Mayor y ejecutadas por las entidades y organismos distritales y las Alcaldías Locales.

x. Fomentar la participación ciudadana para el seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas que adelante la Secretaría de Seguridad.

Acuerdo Distrital 386, “Por medio del cual se declara de Interés Social, Recreativo y Deportivo la Ciclovía de Bogotá y se dictan otras disposiciones”;

“Por medio de la cual se crea la Mesa Técnica de Monitoreo y Seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana para los Ciclistas de Bogotá ‘La Bici nos Mueve con Seguridad’.” 2310460-FT-078 Versión 01 formulación de acciones que promuevan el uso de la bicicleta en todas las localidades del distrito Capital.

Estas estrategias se fundamentan en la construcción de Marcos Normativos Distritales sobre temas de la mayor relevancia como la seguridad, la protección de los derechos de las personas y de sus bienes jurídicamente tutelables.

II. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

En Bogotá se realizan diariamente 880.367 viajes en bicicleta, posicionándola como una de las pocas ciudades de Latinoamérica con cifras de uso envidiables. El número de viajes en bicicleta al día ha superado a ciudades como Amsterdam que tiene un promedio de 665.000; Copenhague, 250.000 y Santiago de Chile, 676.000. Su topología plana, en gran parte de su extensión, junto con las condiciones climáticas, la ha convertido en una ciudad propicia para el uso masivo de este medio de transporte.

Las cifras de trayectos han aumentado con los años debido a que la bicicleta ha dejado de ser exclusivamente de uso recreativo, convirtiéndose en un medio de transporte de uso diario. De acuerdo con la [Encuesta de Movilidad 2019](#), el 44 % de los viajes que se realiza por este medio son para desplazarse al lugar de trabajo mayoritariamente desde el suroccidente (localidades de Bosa y Kennedy) hacia el centro de la ciudad; y un 16,5 % para ir a estudiar, en su mayoría desde el suroccidente y Suba para llegar a las universidades concentradas en el centro y norte de la ciudad.

A partir de este caso de éxito nace el libro **"Ciclismo urbano, avances y retos para el caso de Bogotá"**, que aborda desde lo teórico y lo práctico cómo lograr el objetivo de llegar al uso masivo de la bicicleta. Los autores proponen un nuevo paradigma de diseño de ciclo-infraestructura que se construye no solo desde la provisión de infraestructura, sino desde las necesidades del ciclista.

De acuerdo con la publicación, los factores que influyen en el creciente número de bogotanos que están pasándose a usar la bicicleta como medio de transporte están el ahorro en tiempo, dinero, la mejora en su estado de ánimo y salud. Los más experimentados se sienten motivados por la pasión que sienten al usar la bicicleta.

Según los autores del libro la implementación de infraestructura para ciclistas ha crecido de forma constante desde el año 2000, pero para seguir incentivando el uso de la bicicleta es necesario pensar en estrategias efectivas desde el diseño vial. “Un entorno amigable es fundamental para el ciclista: buena iluminación, árboles, mayor presencia de la policía y reducción de velocidad de tráfico motorizado, sin duda motiva al ciclista a seguir usando este medio de transporte”, afirma Álvaro Rodríguez, uno de los expertos.

La investigación hace énfasis en que también es importante analizar las experiencias de las personas por género y diversas poblaciones. Según la encuesta Origen destino de hogares de 2019, en Bogotá el 75,2 % de los viajes en bicicleta son realizados por hombres. Uno de los factores que influye en esta brecha es que las mujeres no se sienten seguras al pedalear en el espacio público y se encuentran vulnerables frente al acoso sexual y los hurtos. “Hay que pensar en las necesidades diferenciales que tienen las mujeres en el espacio público cuando viajan en bicicleta”, resaltó Andrea Navarrete, gerente de la bicicleta en Bogotá, durante el lanzamiento del libro en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Aunque Bogotá ha avanzado notoriamente en la construcción de infraestructura y en la motivación de su uso, para los investigadores hay varios retos que se deben tener en cuenta para hacer que la bicicleta sea una posibilidad para todos: la reducción de muertes de ciclistas, el aumento de su seguridad, la mejora de las condiciones de calidad del aire y el mantenimiento a la infraestructura existente.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se constituye con el Acuerdo Distrital 257 de 2006 con la misión de liderar, planear y orientar la formulación, la adopción, la ejecución, la evaluación y el seguimiento de las políticas públicas, los planes, los programas y proyectos, las acciones y las estrategias en materia de seguridad ciudadana,

convivencia, acceso a la justicia, orden público, prevención del delito, las contravenciones y conflictividades, y la coordinación de los servicios de emergencias en el Distrito Capital en el marco del primer respondiente.

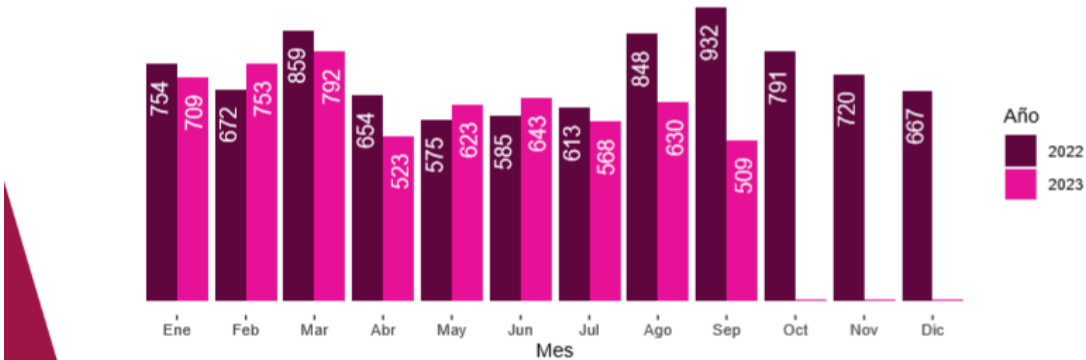
Como un organismo del sector central con autonomía administrativa y financiera, cuyo objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la política pública para la seguridad ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del Distrito Capital, en sus fases de prevención, promoción, mantenimiento y restitución; el mantenimiento y la preservación del orden público en la ciudad; la articulación de los sectores administrativos de coordinación de la Administración Distrital en relación con la seguridad ciudadana y su presencia transversal en el Distrito Capital, la coordinación del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, la integración y coordinación de los servicios de emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y convivencia ciudadana en Bogotá D.C

Puntualmente el hurto de bicicletas en la capital es uno de los delitos con más alto impacto en la capital como se logra evidenciar en los informes publicados en la página de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia,

Hurto de bicicletas

Sexo de la Víctima	Ene-Sep2022	Ene-Sep2023	Diferencia Ene-Sep	Variación % Ene-Sep	Sep 2022	Sep 2023	Diferencia Sep	Variación % Sep
FEMENINO	1399	1296	-103	-7.4 %	212	121	-91	-42.9 %
MASCULINO	5059	4411	-648	-12.8 %	716	385	-331	-46.2 %
NO REPORTA	34	43	9	26.5 %	4	3	-1	-25 %
TOTAL GENERAL	6492	5750	-742	-11.4 %	932	509	-423	-45.4 %

Comportamiento mensual



Fuente: Cálculos propios con información de SIEDCO de la DIJIN - POLICÍA NACIONAL. Información suministrada el día 2023-10-25 a las 12:00 horas. Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Información sujeta a cambios.
*Las cifras de hurto de celulares corresponden a un subconjunto del hurto a personas, hurto a residencias y hurto a establecimientos de comercio. Los hurtos de celulares aquí reportados corresponden a la cantidad de dispositivos celulares que se han hurtado.

Hurto de bicicletas

LOCALIDAD	Ene-Sep2022	Ene-Sep2023	Diferencia Ene-Sep	Variación % Ene-Sep	Sep 2022	Sep 2023	Diferencia Sep	Variación % Sep
ANTONIO NARINO	116	84	-32	-27.6%	15	6	-9	-60%
BARRIOS UNIDOS	223	307	84	37.7%	29	24	-5	-17.2%
BOSA	500	334	-166	-33.2%	68	35	-33	-48.5%
CANDELARIA	8	9	1	12.5%	0	1	1	100%
CHAPINERO	247	145	-102	-41.3%	37	17	-20	-54.1%
CIUDAD BOLÍVAR	176	148	-28	-15.9%	28	14	-14	-50%
ENGATIVÁ	933	990	57	6.1%	126	86	-40	-31.7%
FONTIBÓN	632	467	-165	-26.1%	115	54	-61	-53%
KENNEDY	1071	1033	-38	-3.5%	185	92	-93	-50.3%
LOS MÁRTIRES	145	112	-33	-22.8%	13	10	-3	-23.1%
PUENTE ARANDA	269	238	-31	-11.5%	31	20	-11	-35.5%
RAFAEL URIBE URIBE	148	126	-22	-14.9%	12	9	-3	-25%
SAN CRISTÓBAL	106	85	-21	-19.8%	8	4	-4	-50%
SANTA FE	156	128	-28	-17.9%	22	15	-7	-31.8%
SIN LOCALIZACION	0	0	0	0%	0	0	0	0%
SUBA	976	855	-121	-12.4%	147	76	-71	-48.3%
SUMAPAZ	0	0	0	0%	0	0	0	0%
TEUSAQUILLO	256	312	56	21.9%	40	14	-26	-65%
TUNJUELITO	112	79	-33	-29.5%	9	7	-2	-22.2%
USAQUÉN	377	258	-119	-31.6%	46	22	-24	-52.2%
USME	41	40	-1	-2.4%	1	3	2	200%
TOTAL GENERAL	6492	5750	-742	-11.4%	932	509	-423	-45.4%

Fuente: Cálculos propios con información de SIEDCO de la DIJIN - POLICÍA NACIONAL. Información suministrada el día 2023-10-25 a las 12:00 horas. Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Información sujeta a cambios. *Las cifras de hurto de bicicletas corresponden a un subconjunto del hurto a personas, hurto a residencias y hurto a establecimientos de comercio.

OAIEE

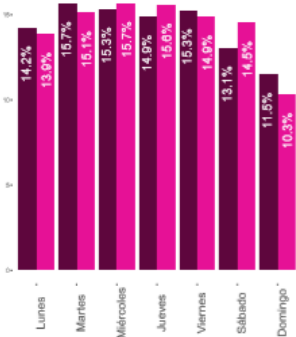


SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

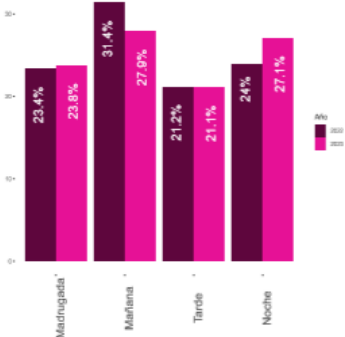


Hurto de bicicletas

Participación por día de la semana Ene - Sep



Participación por jornada del día Ene - Sep



Día de la semana	Ene-Sep2022	Ene-Sep2023	Diferencia	Variación %
Lun-Jue	3906	3465	-441	-11.3%
Vie-Dom	2586	2285	-301	-11.6%
TOTAL GENERAL	6492	5750	-742	-11.4%

Rango del día	Ene-Sep2022	Ene-Sep2023	Diferencia	Variación %
Madrugada	1517	1370	-147	-9.7%
Mañana	2039	1605	-434	-21.3%
Tarde	1378	1215	-163	-11.8%
Noche	1558	1560	2	0.1%
TOTAL GENERAL	6492	5750	-742	-11.4%

Fuente: Cálculos propios con información de SIEDCO de la DIJIN - POLICÍA NACIONAL. Información suministrada el día 2023-10-25 a las 12:00 horas. Para presentar la tabla de jornada se excluyen los registros que no tienen asignada hora del hecho. Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Información sujeta a cambios. *Las cifras de hurto de bicicletas corresponden a un subconjunto del hurto a personas, hurto a residencias y hurto a establecimientos de comercio.

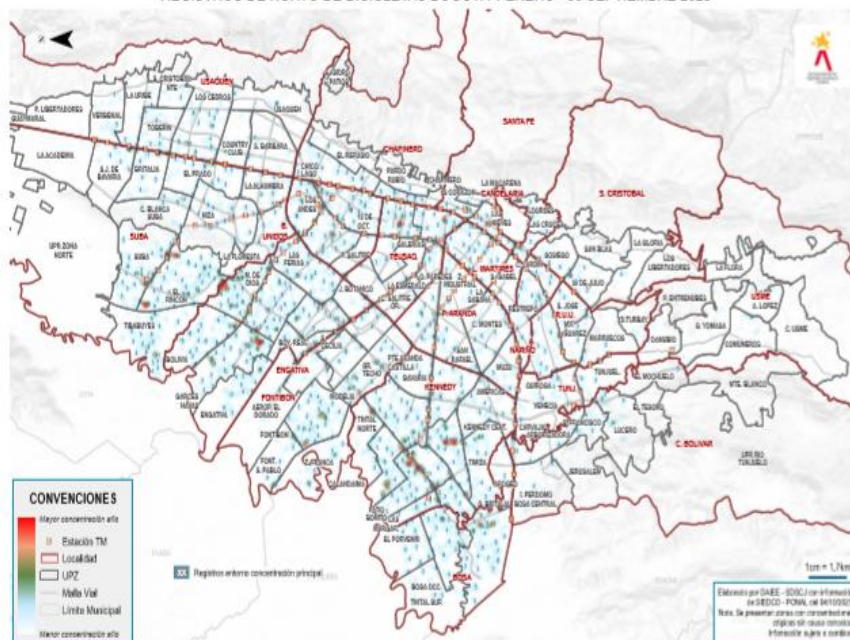


SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



Hurto de bicicletas

REGISTROS DE HURTO DE BICICLETAS BOGOTÁ 1 ENERO - 30 SEPTIEMBRE 2023



OAIIE



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



BIBLIOGRAFIA

<https://scj.gov.co/es/transparencia/marco-legal/normatividad>

<https://scj.gov.co/es>

<https://uniandes.edu.co/es/noticias/ingenieria/bogota-tiene-mas-viajes-en-bicicleta-que-amsterdam>

III. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.

Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: (...)

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

IV. IMPACTO FISCAL

De conformidad con lo anterior y en cumplimiento del Artículo 7° de la Ley 819 de 2003, aclaramos que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación. Las medidas a adoptar serán financiadas con los presupuestos definidos en las diferentes entidades y de acuerdo a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Distrital 2024- 2027

V. TÍTULO – ATRIBUCIONES – CONSIDERANDOS

PROYECTO DE ACUERDO NO 650 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL SISTEMA DE VOLUNTARIOS BICI-USUARIOS EN SEGURIDAD PARA CICLORUTAS DE LA CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 1 del artículo 12, del Decreto Ley 1421 de 1993,

VII. ARTICULADO**EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.,**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993

Artículo 1. La presente iniciativa tiene como objeto dictar los lineamientos para crear el sistema de voluntarios en seguridad para disminuir el impacto de hurtos en las ciclo-rutas de la capital.

Parágrafo 1- Promover la creación del sistema de voluntarios bici-usuarios en seguridad para ciclo-rutas

Parágrafo 2- Promover la capacitación de los voluntarios bici-usuarios sobre, programas y estrategias que incentivan el correcto uso de las ciclo-rutas a partir de la cultura ciudadana del ciclista, los elementos de protección y el respeto por la señalización.

Parágrafo 3- Fomentar la capacitación de los voluntarios bici-usuarios en la aplicación de la ruta de acción en caso de hurto en articulación con la Policía Nacional en las ciclo-rutas seguras en Bogotá.

Parágrafo 4- Facilitar espacios que permitan generar conciencia pedagógica sobre la importancia del buen comportamiento del ciclista, bajo principios de cultura, tolerancia y amor por la vida que logren disminuir los accidentes fatales en las vías de la capital.

Artículo 2. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, implementará el sistema de monitoreo con cámaras de seguridad en las ciclo-rutas y en los sitios críticos en hurto de bicicletas.

Artículo 3. La Administración Distrital, en cabeza del IPES promoverá la creación de puntos de comercio en sectores estratégicos de las ciclo-rutas para mejorar la afluencia de público para evitar tramos solos con alta inseguridad.

Artículo 4. La administración en cabeza de la UAESP instalará luminarias tipo LED en todas las ciclo-rutas de la capital

Parágrafo 1- La UAESP prestará especial mantenimiento y reposición de las luminarias tipo LED, sobre todo en los sectores identificados como sitios críticos en hurto a bicicletas.

Artículo 5. La Administración Distrital, en cabeza del IDU se hará responsable de hacer el mantenimiento correspondiente a las ciclo-rutas de la capital, mejorando su infraestructura y conectividad, fortaleciendo un tránsito seguro de baja accidentalidad.

Artículo 6. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

H.C. JULIÁN ESPINOSA ORTÍZ.

Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

PROYECTO DE ACUERDO NO 651 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE DEFINEN LINEAMIENTOS EN MATERIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AL SERVICIO PÚBLICO INDIVIDUAL DE PASAJEROS - TAXI EN EL DISTRITO CAPITAL”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente proyecto de acuerdo está sustentado en las siguientes normas circunscritas a la constitución nacional, a las leyes colombianas y los acuerdos del distrito capital:

○ **DE ORDEN CONSTITUCIONAL**

ARTICULO 24. “Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”.

○ **DE ORDEN LEGAL**

- **Ley 105 de 1993.** *Artículo 2: Señala los principios fundamentales del transporte, y dispone que le corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas. Igualmente, establece que la seguridad de las personas es una prioridad del sistema y del sector y que el transporte constituye un elemento básico para la unidad nacional y el desarrollo de todo el territorio colombiano;*

Artículo 3: Establece que el transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios. Esto implica, entre otros aspectos, que el usuario pueda transportarse en buenas condiciones de accesibilidad, comodidad, calidad y seguridad, a través del medio y modo que escoja, y que sea informado sobre las formas para utilizar los medios y modos de transporte. Así mismo, dispone que el Estado regulará y controlará la prestación del servicio y que existirá un nivel básico accesible a todos los usuarios, permitiéndose, de acuerdo con la reglamentación correspondiente, transporte de lujo, turístico y especial, que no compita deslealmente con el sistema básico;

- **Ley 336 de 1996**, artículo 5: establece que el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo;

Artículos 23 y 31, disponen que las empresas habilitadas para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, solo podrán hacerlo con equipos matriculados o registrados para dicho servicio, previamente homologados por el Ministerio de Transporte, que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos de acuerdo con la infraestructura de cada modo de transporte;

- **Decreto Nacional 1079 de 2015** “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”

ARTÍCULO 2.2.1.3.1.1 *Autoridades de transporte. Son autoridades de transporte competentes las siguientes:*

** En la Jurisdicción Nacional: el Ministerio de Transporte.*

** En la Jurisdicción Distrital y Municipal: los Alcaldes Municipales y/o distritales o los organismos en quien estos deleguen tal atribución.*

** En la Jurisdicción del Área Metropolitana constituida de conformidad con la ley: la Autoridad Única de Transporte Metropolitano o los alcaldes respectivos en forma conjunta, coordinada y concertada.*

Las autoridades de transporte no podrán autorizar servicios por fuera del territorio de su jurisdicción, so pena de incurrir en causal de mala conducta

Artículo 2.2.1.3.1.2. Control y vigilancia. *La inspección, vigilancia y control de la prestación del Servicio Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi, estará a cargo de los Alcaldes o las autoridades municipales que tengan asignada la función.*

Artículo 2.2.1.3.3. Servicio público de transporte terrestre automotor en vehículos taxi. *Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 2297 de 2015. El Transporte Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en vehículos de taxi, es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, en forma individual, sin sujeción a rutas ni horarios, donde el usuario fija el lugar o sitio de destino. El recorrido será establecido libremente por las partes contratantes.*

“Artículo 2.2.1.3.3. Servicio público de transporte terrestre automotor Individual de Pasajeros en los niveles básico y de lujo. *El Transporte Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en los niveles básico y de lujo, es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente*

habilitada en esta modalidad, en forma individual, sin sujeción a rutas ni horarios, donde el usuario fija el lugar o sitio de destino. El recorrido será establecido libremente por las partes contratantes.

Parágrafo 1°. El servicio de transporte público terrestre automotor individual de pasajeros, en el radio de acción Metropolitano, Distrital o Municipal, se clasifica en:

1. Básico. Es aquel que garantiza una cobertura adecuada, con términos de servicio y costos que lo hacen asequible a los usuarios. Se puede ofrecer a través de medios tecnológicos, con plataformas para la oportuna y eficiente atención a los usuarios, o por medio de atención directa en las vías. La remuneración por la prestación del servicio puede realizarse con dinero en efectivo.

2. Lujo. Es aquel que ofrece a los usuarios condiciones de comodidad, accesibilidad y operación superiores al nivel básico. Se caracteriza por ofrecer sus servicios utilizando únicamente medios tecnológicos con plataformas para la oportuna y eficiente atención a los usuarios. El pago solo se realiza por medios electrónicos y el servicio únicamente se presta en vehículos clase automóvil sedan, campero de cuatro puertas y/o camioneta cerrada. Este servicio contará con tarifa mínima regulada, que en ningún caso será igual o inferior a la del nivel básico.

Parágrafo 2°. Los vehículos utilizados para la prestación del servicio de Transporte Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en el nivel básico y de lujo, deberán cumplir las especificaciones y características establecidas en el presente decreto y en la regulación que para tal efecto expida el Ministerio de Transporte”.

“Artículo 2.2.1.3.4. Definiciones. Para la interpretación y aplicación de presente Capítulo, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones específicas:

** Municipios contiguos: son aquellos municipios que gozan de límites comunes.*

** Planilla única de viaje ocasional: es el documento que debe portar todo conductor de vehículo de servicio público de esta modalidad para la realización de un viaje ocasional.*

** Taxi básico: automóvil destinado a la prestación del servicio básico público individual de pasajeros*

** Taxi de lujo: vehículo clase automóvil sedan, campero de cuatro puertas y/o camioneta cerrada, destinado a la prestación del servicio público Individual de Pasajeros en este nivel.*

** Vehículo nuevo: es el vehículo automotor cuyo modelo corresponde como mínimo al año en el que se efectúa el registro del mismo.*

** Viaje ocasional: es aquel que excepcionalmente autoriza el Ministerio de Transporte a un vehículo taxi en el nivel básico y de lujo, para prestar el servicio público de transporte individual por fuera del radio de acción autorizado”.*

Artículo 2.2.1.3.2.1. Habilitación. Las empresas, personas naturales o jurídicas, legalmente constituidas, interesadas en prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros, deberán solicitar y obtener habilitación para operar en el nivel básico y/o de lujo. La habilitación lleva implícita la autorización para la prestación del servicio público de transporte en esta modalidad, en el o los niveles de servicio autorizados.

La habilitación concedida autoriza a la empresa para prestar el servicio solamente en la modalidad solicitada y en el o los niveles de servicio que le sean autorizados. Si la empresa, persona natural o jurídica, pretende prestar el servicio de transporte en una modalidad diferente, deberá acreditar ante la autoridad competente de la nueva modalidad, los requisitos de habilitación exigidos.

Parágrafo 1°. Las autoridades de transporte competentes deberán conocer y resolver las solicitudes de habilitación de empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros.

No podrá resolverse negativamente la solicitud por razones asociadas a la congelación del parque automotor. En estos casos, la empresa de transporte, una vez habilitada, podrá vincular vehículos por cambio de empresa.

Parágrafo 2°. Las empresas, personas naturales o jurídicas, actualmente habilitadas en el servicio de transporte público terrestre automotor individual de pasajeros, se consideran autorizadas para prestar el servicio básico. Podrán prestar el servicio en el nivel de lujo mediante la modificación de su habilitación, presentando la respectiva solicitud ante la autoridad de transporte competente, la cual deberá cumplir con las condiciones fijadas en el artículo 2.2.1.3.2.9. del presente decreto.

Parágrafo 3°. Las empresas que a la entrada en vigencia del presente parágrafo deseen habilitarse deberán solicitarlo ante la autoridad competente, y cumplir los requisitos establecidos en el presente Capítulo, de acuerdo con el nivel de servicio solicitado.

Parágrafo 4°. Las plataformas tecnológicas que empleen las empresas de transporte debidamente habilitadas, para la gestión y prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros, deben obtener la habilitación del Ministerio de Transporte. Para ello, demostrarán el cumplimiento de las condiciones de servicio que establezca el Ministerio de Transporte, como la posibilidad de calificar al conductor y al usuario, identificar el vehículo que prestará el servicio e individualizar el conductor.

- **Decreto Nacional 2297 de 2015** "Por el cual se modifica y adiciona el Capítulo 3, Título 1, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en relación con la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en los niveles básico y de lujo"

- **NORMATIVIDAD DISTRITAL**

- **ACUERDO 257 DE 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”**

Artículo 108, literales b) y e) del del definen como funciones básicas de la Secretaría Distrital de Movilidad, las de "Fungir como autoridad de tránsito y Transporte y "Diseñar, establecer, ejecutar, regular y controlar, como autoridad de Tránsito y transporte, las políticas sobre el tránsito y el transporte en el Distrito Capital".

- **Decreto Distrital 567 de 2006 “por el cual adopta la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital de Movilidad”**

Artículo 2, literal e), establece como una de sus funciones la de "Diseñar, establecer, ejecutar, regular y controlar, como autoridad de tránsito y de Transporte, las políticas sobre el tránsito y el Transporte en el Distrito Capital.

Finalmente, es procedente precisar:

Que a través de la Resolución 2163 de 2016 expedida por el Ministerio de Transporte, se reglamentó el Decreto Nacional 2297 de 2015 y se definieron las características generales y funcionalidades que deben cumplir las plataformas tecnológicas que deben utilizarse para la prestación del servicio de transporte público terrestre automotor individual de pasajeros en el nivel básico y/o de lujo.

Que en aplicación de la Resolución 2163 de 2016, la Administración Distrital expidió el Decreto Distrital 456 de 2017 por el cual se “establecen medidas para el reporte de la información del servicio de transporte público individual en el nivel básico en el Distrito Capital mediante plataformas tecnológicas”.

Que por medio del Decreto Distrital 568 de 2017 la Administración Distrital, “estableció las tarifas para el servicio público de transporte automotor individual de pasajeros en el nivel básico en vehículos tipo taxi en Bogotá, D.C., fijó las condiciones para el reconocimiento del factor de calidad del servicio y dictó otras disposiciones.

Que la Secretaría Distrital de Movilidad profirió la Resolución 220 de 2017 modificada por la Resolución 103 de 2018, por medio “de la cual se reglamentan los Decretos Distritales 630 de 2016, 456 de 2017 y 568 de 2017, y se establecen las condiciones para el reporte y publicación de la información de la operación del transporte público individual”.

Que dentro del proceso de acción de nulidad con radicado No. 11001032400020160048100 interpuesta ante la Sección Primera del Consejo de Estado el pasado 30 de abril se profirió auto en que se resolvió la solicitud de medida cautelar de Suspensión provisional solicitada por el actor decretando: “la suspensión provisional de los efectos de la Resolución nro. 2163 de 27 de mayo de 2016, «Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras disposiciones», expedida por el Ministerio de Transporte.

Que mediante resolución No. 123 de 2018, la Secretaría Distrital de Movilidad suspendió la Resolución 220 de 2017 hasta que el Consejo de Estado resuelva en forma definitiva sobre la legalidad de la resolución 2163 de 2016 o levante la medida cautelar decretada.

Que, mediante auto del 8 de agosto de 2018, el Consejo de Estado, levantó la medida cautelar decretada en el proveído de 30 de abril de 2018 consistente en la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 2163 de 27 de mayo de 2016, «Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras disposiciones», expedida por el Ministerio de Transporte.

Que mediante resolución No. 156 de 2018, la Secretaría Distrital de Movilidad levantó la suspensión establecida en la Resolución 123 de 2018 y modificó los plazos establecidos en el artículo 25 de la Resolución 220 de 2018.

Que la Secretaría Distrital de Movilidad expidió la resolución 181 del 13 de septiembre de 2018, en la que se resolvió aplazar los términos establecidos en la Resolución 156 de 2018 mediante la cual se modificó el artículo 25 de la Resolución 220 de 2017 modificada por la Resolución 103 de 2018, hasta que el Consejo de Estado resuelva la solicitud de aclaración de la medida cautelar, o hasta que en forma definitiva decida sobre la legalidad de la Resolución 2163 de 2016, o hasta que el Ministerio de Transporte expida la Resolución que derogue el acto demandado con el lleno de los requisitos legales.

Que en auto del 18 de septiembre de 2018, el Consejo de Estado aclaró la providencia de 8 de agosto de 2018, en el sentido de precisar que el levantamiento de la medida cautelar está sujeto a que el Ministerio de Transporte continúe con el trámite y culmine el procedimiento de expedición de la Reglamentación que corrige el yerro de la Resolución 2163 de 2016, en un plazo no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, so pena de que haya lugar a un nuevo estudio de la procedencia de la medida cautelar.

Que en el mencionado Auto, la máxima corporación de lo contencioso administrativo, en su parte considerativa, señaló: “(...) Luego, de ninguna manera puede interpretarse que hasta el momento en que se expida una nueva Resolución, se levantará la medida cautelar decretada de suspensión de los efectos de la Resolución 2163 de 2016. pues lo cierto es que la medida ya fue levantada y el condicionamiento se limitó a que la entidad demandada continúe con el procedimiento que dará lugar a que se subsane el yerro cometido al momento de la expedición, lo que garantizará que la nueva regulación cuente con el concepto de la autoridad competente que permita evaluar su impacto en la competencia del mercado, así como con las razones para acatarlo o separarse del mismo. (...)”

Que el 21 de Diciembre de 2018 se expidió por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito la Resolución 246 “Por medio de la cual se reanuda la implementación de los Decretos Distritales 630 de 2016, 456 de 2017 y 568 de 2017, se deroga la resolución 181 del 13 de septiembre de 2018 y se modifica la Resolución 220 de 2017.

Con base en lo anteriormente expuesto, y toda vez que a la fecha, a pesar de que el Ministerio de Transporte ha publicado y se encuentra tramitando una nueva Resolución que deroga la Resolución 2163 de 2016; habiéndose transcurrido dos años aun no se expide el correspondiente acto administrativo como lo condicionó el Consejo de Estado en su providencia, es menester que por parte del Distrito Capital en el marco de sus competencias y observando plenamente las disposiciones legales vigentes, adopte medidas tendientes a promover y garantizar a los usuarios del Transporte Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en vehículo Taxi, las condiciones de accesibilidad, comodidad, calidad, y seguridad en la prestación de dicho servicio. Por ello, y ante la inseguridad jurídica generada por decisiones mencionadas, se acogen en el presente proyecto de acuerdo, disposiciones contenidas en el marco normativo referido, con el fin de contar con herramientas que posibiliten adoptar medidas orientadas al propósito fijado para la mejora en la prestación del servicio descrito.

II. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

El servicio público de taxis, cuenta con antecedentes que es importante abordar desde el contexto histórico, lo cual permite dimensionar el origen y evolución de este. Por lo tanto, se referencian abordajes que se han realizado al respecto:

“En Colombia la llegada del taxi es tardía con relación a Europa y Estados Unidos. La fecha en la que el primer vehículo llegó al país es incierta, pero lo que se presume es que en Colombia la primera flota oficial llegó en 1929 (El Tiempo, 2008). Después del año 1930, Antonio María Pradilla, fundador de Praco, empresa dedicada a la comercialización de vehículos, decidió crear una flota de carros para buscar alguna rentabilidad, en donde los 20 primeros fueron puestos en servicio causando sensación en la ciudad, emoción que provocó que en los cuatro meses siguientes, los 100 vehículos restantes tuvieran una buena acogida por los ciudadanos y comenzara a dar frutos el negocio de movilidad (Mejía, F. La historia del taxi en el mundo y en Colombia, 2013 en Martínez Garzón, J. F. & Bacca Benítez, J. M.

Esto muestra que efectivamente los taxistas son referentes del transporte a nivel mundial, y en el caso de Bogotá y en general en Colombia, llegó a consolidarse como un sistema único en su clase, en sus inicios entonces, las empresas de taxis eran innovadoras en su clase y además pertenecían a sectores ciertamente privilegiados de la sociedad. De ahí se puede partir de la idea que las luchas de los gremios taxistas se desarrollaban por móviles que se referían a sus pretensiones de elevar sus derechos laborales o a aumentar sus ingresos por ejercer su actividad como conductores. Sin embargo es a partir del año 2013 que UBER se consolida en Colombia y entra a un mercado de por sí saturado.

Según registros de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, para el año 2012 por las vías de Bogotá se movilizaron aproximadamente 52.000 taxis, lo cual representa aproximadamente el 32 % del uso de la red vial de la ciudad. Esta cifra es significativa, teniendo en cuenta que, en ciudades como Hong Kong, la ocupación llega a tener una participación del 25 % aproximadamente (Perilla Gómez, C; Santos Sabogal, J; Sánchez Monsalve, N y Ramos, P, 2014).”⁶

De igual forma, se relaciona lo consignado por Sara Orozco Palacio y Manuela Velásquez Fernández:

“Es difícil establecer la fecha exacta en la cual se empezó a regular el servicio de transporte público en Colombia. “Aunque desde el inicio de la historia de la República ha sido intensa la expedición de normas del sector de transporte, la gran mayoría se restringieron, conforme con las circunstancias de la época, al diseño y la financiación de la infraestructura vial” (Salazar, 2001, p.202). No obstante, tomaremos como punto de partida la Constitución Política de 1886, debido a que fue allí en donde se empezó a evidenciar una clara intervención del Estado en los servicios públicos, dentro de los cuales se encuentra el servicio de transporte. En ese sentido, el artículo 32 de la mencionada disposición, si bien permitió la libertad de empresa y la iniciativa privada, le otorgó la facultad al Estado de intervenir en la economía con el fin de lograr un desarrollo integral .

Por su parte, el Código de Comercio de 1907 estableció el principio de regulación en el transporte público. Así, correspondía al Gobierno Nacional la inspección de las empresas públicas de transporte y el desarrollo de su respectiva reglamentación. A partir de esto, se expidió la Ley 15 de 1959 *“Por la cual se da el mandato al Estado para intervenir en la Industria del transporte, se decreta el auxilio patronal del transporte, se crea el fondo de transporte urbano y se dictan otras disposiciones”*. Para el efectivo cumplimiento del mandato legal,

⁶ Juan Alejandro Acevedo González* Universidad Santo Tomás ARTE-FACTO. Revista de Estudiantes de Humanidades. Enero 2018 No. 5.

el Gobierno emitió una serie de normativas, dentro de las cuales se pueden destacar: *“la de creación del Instituto Nacional del Transporte - INTRA - en 1968; el decreto ley 1393 de 1970 - Estatuto Nacional de Transporte- y el decreto ley 80 de 1987 que asignó funciones a los municipios en relación con el transporte”* .

Correlativamente a lo anterior, fue surgiendo una nueva modalidad en la prestación del servicio de transporte público. *“La historia cita que la aparición de los primeros taxis en Bogotá fue totalmente accidental y fruto de una terrible crisis económica que sobrevino en 1930”* . Aunado a la crisis económica del país, en los años de 1925 y 1926 se produjo una gran sequía en el río Magdalena que obstaculizó el transporte fluvial de mercancías desde los puertos costeros hacia el interior del país. Así, la empresa PRACO, representante e importadora de FORD para Colombia, trajo al país una flota de 120 vehículos que fueron represados en el puerto de Barranquilla debido a las circunstancias del momento.

Posteriormente, dichos vehículos fueron trasladados a la capital para su comercialización. Sin embargo, no existieron compradores y *“Antonio María Pradilla, fundador de PRACO decidió entonces crear una flota de taxis para buscar alguna rentabilidad de los inventarios”* .

Poco tiempo después, apareció la empresa Taxis Rojos cuyo propietario era el señor Leonidas Lara e Hijos, la cual aumentó el número de taxis en la ciudad de Bogotá. Así, de manera creciente se fue incrementando el negocio de taxis en el país. En este sentido, una de las primeras normas relacionadas con el servicio de transporte individual mediante vehículos taxi, que se expidió en Colombia, fue el Decreto 826 de 1954, el cual definió lo que debía entenderse por Empresa de Transporte Automotor, y estableció una serie de requisitos mínimos para la prestación de este servicio (Rodríguez A. y Acevedo J., 2012, p.262 – 265).

Ahora bien, con la aparición de la Constitución Política de 1991 se dio un cambio respecto al modelo de Estado. Así lo ha manifestado la Corte Constitucional, al afirmar que *“La Constitución colombiana, al consagrar un Estado social de derecho en su artículo 1, combina el intervencionismo económico –lo cual supone una permanente posibilidad de restricción estatal de las libertades económicas- con el radical respeto de los derechos civiles y políticos- por lo cual la restricción de estos últimos debe tener fundamento expreso y específico. En efecto, de un lado, la Constitución consagra una economía social de mercado dirigida, puesto que reconoce genéricamente que la iniciativa privada y la actividad económicas son libres (artículo 332) pero establece, también de manera global, que ‘la dirección general de la economía estará a cargo del Estado’ (artículo 333)”* (CConst, C-265/1994, H. Barrero).

Siguiendo esta línea argumentativa, el transporte público en Colombia ha sido considerado por la Constitución Política, la Ley y los Entes Estatales como un derecho, un servicio, y una actividad económica. En este sentido, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes ocasiones, estableciendo que el mismo es un servicio público de carácter esencial de gran importancia para el desarrollo de algunos Derechos Fundamentales tales como la libertad de movimiento y circulación (artículo 24 CP), el libre desarrollo de la personalidad (artículo 16 CP), y el derecho al trabajo (artículo 25 CP) . Igualmente, se considera una actividad económica, ya que el transporte puede ser prestado directamente por el Estado o indirectamente a través de empresas privadas, y produce un beneficio económico a quien lo presta.”⁷

⁷ UBER: La plataforma tecnológica que rompe con los esquemas tradicionales de la regulación en materia de transporte individual de pasajeros en Colombia. Sara Orozco Palacio y Manuela Velásquez Fernández .

LOS TAXIS EN BOGOTÁ

Localidad	Atracción	Producción
Antonio Nariño	2,922	3,277
Barrios Unidos	16,275	15,17
Bosa	3,838	3,853
Candelaria	6,302	5,962
Chapinero	43,155	46,308
Ciudad Bolívar	2,608	2,752
Engativá	26,86	27,075
Fontibón	18,685	17,829
Kennedy	24,826	26,008
Los Mártires	11,926	12,598
Puente Aranda	17,806	20,195
Rafael Uribe	7,283	6,306
San Cristóbal	6,727	6,994
Santa Fe	20,212	18,697
Suba	45,561	43,896
Teusaquillo	34,32	33,114
Tunjuelito	3,295	4,397
Usaquén	53,889	52,559
Usme	2,26	2,181

Tabla 1: Producción y atracción de viajes por localidad (Secretaria de Movilidad de Bogotá, 2014)

“La anterior tabla hace hincapié en el estado de viajes realizados en Taxi por localidad, con el fin de ilustrar la inmensidad de viajes que por localidad se realizan utilizando taxi, sin embargo las condiciones laborales pueden resultar precarias para los taxistas, en el sentido de que no depende del número de viajes diarios que se hagan, sino de la capacidad que se tiene para dar cobertura a un servicio necesario para los ciudadanos sin mantener pérdidas, pues hay que tener en cuenta que los taxistas no propietarios se ven obligados a pagar cupos, licencias, seguros, combustibles, permisos, etc., causando incluso, que su servicio se exhiba como rústico para un ciudadano.

La inestabilidad laboral de los conductores de taxi de Bogotá, tiene por lo menos dos causas: en primer lugar, los altos índices de informalidad en este sector, pues según la exDirectora de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte Ayda Lucy Ospina: “el conductor hoy no es considerado como un empleado del propietario del taxi o de la empresa”. Esto sugiere que el vínculo entre las empresas y los conductores es mínimo, pues éstas delegan la responsabilidad de la selección del conductor al propietario, lo cual conlleva a un bajo control en la elección de los mismos y a los fenómenos de informalidad. Asimismo, los taxistas no están realizando su labor a través de contratos de trabajo, fenómeno que permite que ellos sean considerados como recursos prescindibles por parte de los propietarios y las empresas. En segundo lugar, se evidencia el incumplimiento o cumplimiento parcial del decreto 1047 del 2014, el cual obliga a los propietarios de los

vehículos a afiliar a sus conductores al sistema integral de seguridad social; sin embargo, algunos taxistas manifiestan que este decreto aún no ha podido ser implementado en su totalidad por diversas razones que no han permitido darle cumplimiento estricto.

Todas estas causas hacen que el escenario laboral, con la inmersión de UBER dentro de las dinámicas de transporte público individual, se mantenga más complejas para los taxistas no propietarios y de esta manera se constituyen los gremios de taxistas en formato de movimiento social, con el fin de demandar reformas respectivas a la regulación y coacción gubernamental sufrida por parte de los taxistas del común. Susodichas demandas de reformas se dan en dos sentidos 1) reducir el número de regulaciones implementadas a los taxistas, o 2) Aumentar el número de mecanismos que regulan Uber.⁸

PANORAMA DE LOS TAXIS EN COLOMBIA

Taxis registrados en el Runt

Ciudad	Cantidad
Bogotá	54.695
Medellín	19.899
Cali	17.034
Barranquilla	12.916
Cúcuta	6.803
Cartagena	5.823
Soledad	4.728
Floridablanca	4.652
Santa Marta	4.340
Ibagué	4.197
Otros	76.377



63 empresas
operadoras de
taxis en Bogotá

49.000 propietarios
en la capital

El negocio de los taxis
mueve en Bogotá

\$2,9 billones

Hacen cerca de
700.000 viajes al día

211.464 taxis
registrados en el Runt

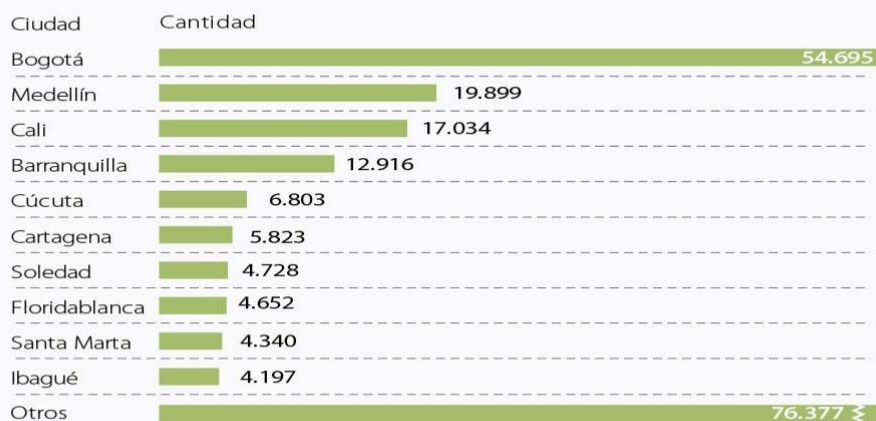
Fuente: Asociación de propietarios de taxis/ Andemos

Gráfico: LR, VT

⁸ Juan Alejandro Acevedo González* Universidad Santo Tomás ARTE-FACTO. Revista de Estudiantes de Humanidades. Enero 2018 No. 5.

PANORAMA DE LOS TAXIS EN COLOMBIA

Taxis registrados en el Runt



Fuente: Asociación de propietarios de taxis Andinos. Gráfico U&VT

“La magnitud de esta industria se puede revisar al ver un informe de ProBogotá que afirma que el negocio de los taxis mueve casi \$3 billones en efectivo anualmente, solo en la capital, que se alcanza con un promedio de 700.000 viajes diarios.

Por ello, la queja ante el avance de los servicios de las plataformas tecnológicas, que según el mismo estudio reúnen a más de 150.000 los conductores vinculados a aplicaciones como Uber, Didi, In Driver y Beat.

Pese al desfase en los cálculos, los taxistas sí reconocen que puede haber una caída en el sector debido a que algunos propietarios han comprado vehículos particulares para inscribirlos en las plataformas. No obstante, solo en 2019, Andemos calculó que se registró la matrícula de 10.201 taxis nuevos.”⁹

LA NECESARIA REINVENCIÓN DEL TAXI EN BOGOTÁ¹⁰

“Taxis y nuevas tecnologías

Las aplicaciones que permiten a los conductores de vehículos particulares prestar un servicio de transporte público, como Uber y Cabify (TNCs, por su acrónimo en inglés, Transportation Network Companies), han enfrentado la resistencia de la industria de los taxis y del Gobierno colombiano. El ministerio de Transporte expidió recientemente una circular para castigar a los conductores de estas plataformas con la cancelación de sus licencias hasta por 25 años. Sin embargo, los usuarios están mucho más satisfechos con el servicio que prestan las TNCs que con el de los taxis.

Así lo muestra un estudio de la Universidad de los Andes en 2017 que investigó sobre los factores que afectan la satisfacción y la calidad del servicio de taxis y de las TNCs en Bogotá.

En una escala de 1 a 5, los taxis alcanzaron una calificación de 3,22, mientras que Uber y Cabify lograron la sobresaliente cifra de 4,42. Mientras que los taxis se rajaron en limpieza de los vehículos (2,77), en percepción

⁹ La República. Febrero 2020

¹⁰ Álvaro Rodríguez Valencia enero 14, 2019

de seguridad personal (2,80), en percepción de seguridad vial (2,80) y en manejo y conducción (2,91), las TNCs no se rajaron en nada: el atributo peor calificado fue el conocimiento de la ruta (3,69).

¿Qué hace que los bogotanos se sientan tan satisfechos con las TNCs y tan insatisfechos con los taxis tradicionales? Los resultados de la investigación muestran que los usuarios de las TNCs se sienten satisfechos, sobre todo, por la percepción de limpieza de los vehículos, la seguridad personal y el confort. En cuanto a los taxis, los usuarios reconocen que la facilidad para conseguirlos es un factor que aporta positivamente a su satisfacción. Pero la percepción de que el precio es injusto es uno de los factores que más negativamente afecta la percepción de los pasajeros.

Ante ese panorama, no basta con las buenas intenciones de los taxistas y la promesa de que prestarán un mejor servicio y cobrarán lo justo. Es necesario hacer cambios de fondo y reinventar el servicio de taxi en Bogotá.

El conflicto con las TNCs se deriva de una revolución tecnológica que produjo el internet móvil de acceso masivo y las economías colaborativas. Por eso, la solución para salvar a los taxis tradicionales debe ser creativa e ingeniosa. En todo caso, hay que tener en cuenta que la restricción legal para las TNCs y el marco regulatorio del transporte de taxis en Colombia es de aplicación nacional. Las ciudades tienen muy poca capacidad de maniobra en ese aspecto.

Los taxistas y los usuarios ya han visto los primeros beneficios de aprovechar la tecnología. Aplicaciones de celular independientes para conseguir taxis (como EasyTaxi o la desaparecida, pero querida Tappsi) han demostrado un mejor comportamiento de conductores, y una mayor satisfacción de los usuarios.

Es probable que cada vez lleguen nuevas y mejores tecnologías que agudicen la competencia.

Ahora, imaginémonos que cualquier taxi en la calle aproveche la tecnología de forma similar. Los beneficios serían considerables: se acabaría el cobro fraudulento, las quejas de los usuarios serían atendidas por la Secretaría de Movilidad, y ésta podría sancionar a los malos conductores y desterrarlos del sistema.

Es decir, se tendrían los mismos beneficios que ofrecen las TNCs, con la ventaja de poder tomar un vehículo directamente en la calle. Y, como en Uber o en Cabify, el usuario tendría la certeza de saber quién es el conductor y podría tener un registro de su viaje, lo cual implicaría más seguridad personal.”¹¹

“La revolución tecnológica del internet móvil ha cambiado nuestro comportamiento y la forma de concebir los negocios, por ejemplo, por medio de las economías colaborativas. Los servicios que requerían intermediación se han transformado. Ante ese panorama, las empresas tienen dos posibilidades: resistirse al cambio y tratar de mantener el statu quo o reinventarse y adaptarse al nuevo contexto.

El conflicto con las TNCs está lejos de terminar. Es probable que cada vez lleguen nuevas y mejores tecnologías que agudicen la competencia en este campo. Nadie sabe qué camino tomará la regulación de las TNCs en Colombia. Casi todo cambio tecnológico implica adaptaciones. Es normal que las industrias se vean afectadas por esos cambios (pensemos en los directorios telefónicos, en los beepers, etc). Pero de nada sirve quedarse en quejas y en luchas perdidas por volver al pasado. Sin importar si se prohíben o no las TNCs, la peor estrategia que puede adoptar la industria de los taxis es resistirse al cambio.

Por eso, el primer paso para lograr un mejor servicio es dejar de pensar en los pasajeros como usuarios que “compran” ocasionalmente un viaje y empezar a verlos como clientes, cuya fidelidad y confianza hay que mantener. Un alto nivel de satisfacción crea confianza y lleva a los clientes a recomendar el servicio y a atraer más personas.”¹²

¹¹ *Ibíd.*

¹² *Ibíd.*

Con base en lo anteriormente expuesto, se hace necesario introducir lineamientos orientados a promover a través de diversas medidas, que se garantice a los usuarios del Transporte Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en vehículo Taxi, las condiciones de accesibilidad, comodidad, calidad, y seguridad en la prestación de dicho servicio en el Distrito Capital.

III. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así:

DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.

Art. 12. Atribuciones. *Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:*
(...)

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

(...)

19. Dictar normas de tránsito y transporte.

IV. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación. Las medidas a adoptar deberán ser financiadas con el presupuesto de las entidades pertinentes.

El Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, estableció:

“Artículo 7°. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”

Es relevante mencionar, para el caso en concreto, que no obstante lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia C-911 de 2007, puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en obstáculo para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa, afirmando:

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con

lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo”.

“(…) Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda”.

V. TÍTULO – ATRIBUCIONES - CONSIDERANDOS

PROYECTO DE ACUERDO XXX DE 2025

PROYECTO DE ACUERDO NO 651 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE DEFINEN LINEAMIENTOS EN MATERIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AL SERVICIO PÚBLICO INDIVIDUAL DE PASAJEROS - TAXI EN EL DISTRITO CAPITAL”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 12 numerales 1 y 19 del Decreto Ley 1421 de 1993,

I. ARTICULADO**ACUERDA:**

ARTÍCULO 1. OBJETO. La Secretaría Distrital de Movilidad promoverá a través de diversas medidas, que se garantice a los usuarios del Transporte Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en vehículo Taxi, las condiciones de accesibilidad, comodidad, calidad, y seguridad en la prestación de dicho servicio en el Distrito Capital.

ARTÍCULO 2. MEJORA DEL SERVICIO. Dentro de los aspectos que se deben considerar para mejorar la prestación del servicio de Transporte Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en vehículo Taxi estarán:

a. Acceso a la prestación del servicio por medio de Plataformas Tecnológicas que deberán implementar aplicaciones móviles o interfaces web a los que se pueda acceder directamente desde un teléfono móvil o desde algún otro dispositivo electrónico y que posibilitarán la recolección de información de la operación. Dichas plataformas deberán permitir que todos los servicios prestados queden registrados sin importar que el servicio sea solicitado a través de medios tecnológicos o por medio de atención directa en las vías.

b. Las aplicaciones disponibles para el usuario deberán permitirle solicitar y cancelar el servicio, conocer anticipadamente el valor del servicio, la identificación del conductor que prestará el servicio, así como el vehículo correspondiente; la estimación del tiempo promedio de viaje, efectuar pagos por medios electrónicos, presentar quejas, reclamos y calificar el servicio. Lo anterior, sin perjuicio de que el servicio prestado por los vehículos sea solicitado por los usuarios en vía o por otros medios y que se pague en efectivo o por medios electrónicos como tarjetas débito y crédito.

c. Promover que los vehículos taxi cuenten con una pantalla táctil adicional al dispositivo móvil en el vehículo que disponga de una interfaz gráfica para el usuario. Esta deberá permitirle al usuario verificar la información contenida en la tarjeta de control, establecer y confirmar el origen y el destino del servicio, conocer anticipadamente la tarifa, calificar el servicio y presentar quejas, cuando este sea solicitado a través de medios tecnológicos o por medio de atención directa en las vías.

ARTÍCULO 3. PROTECCIÓN DE DATOS. Los responsables del manejo de la información atenderán, en todo momento, los lineamientos dispuestos en la Ley 1581 de 2012 y en las demás normas sobre hábeas data y tratamiento de datos personales.

ARTÍCULO 4. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. La Secretaría Distrital de Movilidad, en su condición de autoridad de tránsito y transporte distrital, podrá utilizar la información recopilada por las plataformas tecnológicas, para establecer políticas tendientes a mejorar la operación, gestión y la seguridad del servicio de Transporte Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en el nivel básico en el Distrito Capital, y con ello garantizar a los usuarios las condiciones de accesibilidad, comodidad, calidad, seguridad y oportunidad.

Las empresas de transporte habilitadas para la prestación del servicio mencionado, deberán acatar las disposiciones que en materia de inspección, vigilancia y control establezca la Secretaría Distrital de Movilidad relacionadas con el reporte de la información de la operación.

ARTÍCULO 5. DIVULGACIÓN. Las disposiciones que se adopten producto de lo contenido en el presente Acuerdo, serán divulgadas por la Secretaría Distrital de Movilidad a las empresas de transporte habilitadas para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, en el Distrito Capital.

ARTÍCULO 6. OBSERVANCIA LEGAL. Las medidas que se adopten por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad para garantizar a los usuarios del Transporte Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en vehículo Taxi, contar con condiciones de accesibilidad, comodidad, calidad, y seguridad en la prestación de dicho servicio en el Distrito Capital, deberán observar completa e integralmente el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que establezca el Ministerio de Transporte con relación a dicha materia.

ARTÍCULO 7. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de su fecha de publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

H.C. JULIÁN ESPINOSA ORTÍZ.

Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

PROYECTO DE ACUERDO NO 652 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE BUSCA INCENTIVAR, IMPULSAR Y ESTABLECER CORREDORES
TURÍSTICOS SEGUROS DE BOGOTÁ D.C.”****I. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA**

El presente proyecto de acuerdo está sustentado en las siguientes normas circunscritas a la constitución nacional, a las leyes colombianas y los acuerdos del distrito capital.

- **DE ORDEN CONSTITUCIONAL**

Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.

Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles.

ARTICULO 227. El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones directas para la constitución del Parlamento Andino y del Parlamento Latinoamericano.

ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

- **DE ORDEN LEGAL**

LEY 300 DE 1996: *"Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras disposiciones".*

LEY 2068 DE 2020: *"Por el cual se modifica la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones."*

- **INTERNACIONAL:**

Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural: 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972.

DECLARACIÓN DE LA HAYA SOBRE TURISMO (1989): Organización Mundial De Turismo.

CÓDIGO ÉTICO MUNDIAL PARA EL TURISMO (2001) Resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

- **DECRETOS**

DECRETO 1074 DE 2015: *"Por medio del cuál se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo".* (Última Versión 30 de enero del 2024)

- **NORMATIVIDAD DISTRITAL**

Acuerdo Distrital 761 de 2020: *"Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2020-2024 "un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI".*

(...) **Programa 26. Bogotá - Región, el mejor destino para visitar.** Reconocer los atractivos culturales y naturales a partir del diseño y puesta en marcha de productos turísticos-culturales (gastronómico, religioso, ancestral, música, arte, nocturno, compras, entre otros), de naturaleza (aviturismo, agroturismo, aventura, biciturismo, senderismo, entre otros), de bienestar (medicinas alternativas, terapias corporales, esparcimiento, actividades recreativas en espacios naturales, termalismo, entre otros) y de reuniones (reuniones, incentivos, congresos, ferias, eventos, entre otros) de alto impacto, teniendo como base la interacción entre propios y visitantes con escenarios urbanos y rurales característicos del Distrito Capital. Se apuesta a la formulación de la Política Pública Distrital de Turismo que revitalice el sector, oriente el modelo de desarrollo turístico sostenible; propone la construcción e intervención de infraestructura turística, la implementación de un plan de promoción y mercadeo para el posicionamiento de la ciudad y la ejecución de acciones estratégicas que hacen de Bogotá un destino atractivo a nivel nacional e internacional, que impacta positivamente el desarrollo económico de la ciudad.

Acuerdo Distrital 927 de 2024: *“Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”*

(...) **Artículo 106. Estrategia Distrital de Turismo.** El instituto Distrital de Turismo, adelantará una estrategia para el desarrollo del sistema Distrital de Turismo, en consonancia con el artículo 570 del decreto 555 de 2021 (Plan de ordenamiento territorial), como esquema que permita generar acciones y proyectos interinstitucionales para la consolidación de Bogotá Región como destino líder en Colombia y Latinoamérica.

Artículo 108. Creación del Sello "ALTO AL ESCNNA". Créase el Sello "ALTO AL ESCNNA" como un reconocimiento a las empresas, establecimientos de comercio y/o organizaciones del sector turismo, hotelero y relacionados, que prestan sus servicios en el Distrito Capital y que están comprometidos con la lucha contra la Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y Adolescentes.

Artículo 168. Bogotá Destino Turístico Inteligente. Las entidades distritales trabajarán, en cabeza del Sector Desarrollo Económico, en la implementación de estrategias que permitan generar experiencias, promocionar a nivel nacional e internacional la ciudad, mejorar la competitividad del destino, fortalecer el tejido empresarial y trabajar en el diseño de productos turísticos innovadores, en el marco de los ejes de gobernanza, sostenibilidad, accesibilidad, tecnología, innovación, seguridad y desarrollo empresarial.

II. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

El Observatorio de Turismo del Instituto Distrital de Turismo (IDT), publicó el 6 de febrero las cifras más representativas del sector turismo que corresponden a los datos disponibles en las siguientes fuentes: Migración Colombia, Terminal de Transporte, Aerocivil, DANE y ONU Turismo:

Según el DANE y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en el año 2023, el PIB de Bogotá, reportó una variación positiva de 0,6% frente al año 2022, siendo este de 261.645 millones de pesos. La actividad turística (sector alojamiento y servicios de comida) en la ciudad de Bogotá registró 5.635 millones de pesos, es decir que participó con el 2,4% sobre el total del PIB de la ciudad, sin embargo, este disminuyó en 3,3% respecto al año 2022.

LLEGADA DE TURISTAS.

De acuerdo, al Observatorio de Turismo, en 2024 la capital recibió un total de 13.421.026, de los cuales 11.805.518 fueron de origen nacional y 1.865.507 de origen internacional. Lo anterior representó una variación positiva de 8,7 % respecto al año 2023 y de 7,7 % frente al 2019, año prepandemia.



En 2024, Bogotá recibió 1.865.507 visitantes extranjeros, quienes indicaron que la capital sería su ciudad de hospedaje, esto representa el 38,5 % del total de extranjeros en el país.

Las principales ciudades de donde provienen estos turistas son Estados Unidos (16,0%); Venezuela (15,5%); México (9,5%); Ecuador (6,3%); España (5,3%); Brasil (4,4%); Perú (3,8%); Panamá (3,2%); Chile (3,1%) y Francia (3,0%).

En 2024 se movilizaron 15.580.410 pasajeros en la Terminal de Transporte de Bogotá, es decir, un 1,63% más frente a 2023. El 56,3% de los pasajeros se movilizó por la Terminal Central (Salitre), el 30,4% por la Terminal Norte y el 13,3 % por la Terminal Sur.

ANTECEDENTE: Entre enero y mayo de 2023, Bogotá recibió 676.963 visitantes extranjeros, esto significa un aumento del 22,0 % respecto al mismo periodo del año 2019 (555.090). Fuente: Migración Colombia

EMPLEO SECTOR TURISMO.

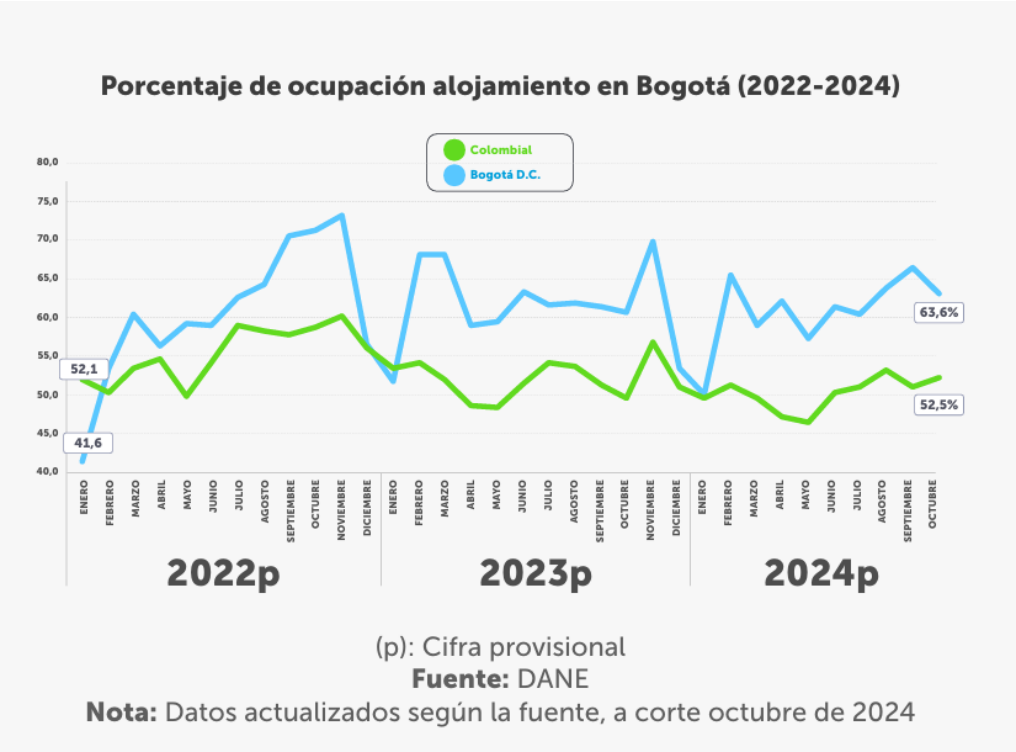
Para el año 2024 (corte octubre) el sector turismo en Bogotá registró un promedio mensual de 106.908 empleos, lo que representa el 2,6 % del total de empleos en la ciudad. La variación frente a 2023 (corte octubre) fue de 9,3 %.

Los sectores conexos (alimentos y bebidas, congresos, ferias y convenciones y esparcimiento y cultura) presentaron la mayor participación en el empleo, con el 42,9 %, seguidos por los sectores de transporte (aéreo y terrestre) con el 31,9 %, mientras que los sectores directos (Alojamiento Agencias de viaje) representaron el 25,2 %.

ANTECEDENTE: Según datos del DANE, durante el año 2022 el sector turismo genera en Bogotá aproximadamente 90 mil empleos.

OCUPACIÓN HOTELERA.

De acuerdo con cifras de la Encuesta Mensual de Alojamiento - EMA, realizada por el DANE, la tasa de ocupación de alojamiento en Bogotá que corresponde a hoteles, aparta-hoteles, centros vacacionales, alojamiento rural, hostales y zonas de camping, alcanzó en octubre de 2024 un 63,3%, lo que indica que fue superior en 2,6 p.p. respecto al mismo mes del año anterior.



ANTECEDENTE: Según cifras de COTELCO, entre enero y junio de 2023, en promedio, la tasa de ocupación hotelera en Bogotá fue de 65,32 %, esto indica un aumento de 4,91 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año 2019 (60,41 %). Fuente: COTELCO

PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS.

Según cifras de MINCIT, la ciudad cuenta con 13.924 Prestadores de Servicios Turísticos con Registro Nacional de Turismo. La mayoría de los prestadores son viviendas turísticas y agencias de viaje, superando el 70,0 % del total.

Prestadores de Servicios Turísticos por localidad (diciembre 2024)

Localidad	Categoría de los principales Prestadores de Servicios Turísticos					Total General
	Viviendas Turísticas	Agencias de Viajes	Establecimientos De Alojamiento Turístico	Guias De Turismo	Operadores Profesionales De Congresos Ferias Y Convenciones	
Chapinero	2.554	450	172		84	3.448
Usaquén	1.418	334	70		49	2.001
Teusaquillo	840	154	229		47	1.330
Santa Fe	1.048	108	89		20	1.322
Suba	493	359	18		47	996
No Aplica	414	283	48	741	34	878
Engativá	359	161	77		31	741
Barrios Unidos						741
Fontibón	480	122	36		36	723
Kennedy	120	178	47		16	408
Candelaria	236	53	44		3	373
Los Mártires	79	80	9		11	207
Puente Aranda	89	44	43		7	192
Bosa	12	61	9		7	97
San Cristóbal	47	19	1			84
Rafael Uribe Uribe	18	41	3			81
Antonio Nariño	30	43			1	77
Ciudad Bolívar	27	35	5		4	76
No Geo	11	51	2		1	76
Usme	6	25	3			40
Tunjuelito	6	20	2			31
Sumapaz	1					21
Total General	8,289	2.621	907	741	398	13.924

Fuente: : MINCIT

ANTECEDENTE: En 2019, la ciudad contaba con 5.104 Prestadores de Servicios Turísticos con Registro Nacional de Turismo, a febrero 2023 el total era 10.231 Prestadores de Servicios Turísticos. Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá

OTROS DATOS.

Según la investigación, Gran Encuesta Viajeros 2024, estudio del Observatorio de Turismo de Bogotá, publicado el 10 de marzo de 2025, Bogotá recibió la visita de 14.074.859 turistas en 2024, lo que representa un crecimiento del 14% respecto a 2023 y del 12,9% frente a 2019.

20% de los turistas internacionales eligió plataformas de viviendas turísticas, consolidando esta opción de hospedaje, según la Gran Encuesta Viajeros 2024, estudio del Observatorio de Turismo de Bogotá, publicado el 10 de marzo de 2025

Monserate (65,3%), La Candelaria (60,5%) y el Museo del Oro (47,4%) fueron los sitios más visitados por turistas, según la Gran Encuesta Viajeros 2024, estudio del Observatorio de Turismo de Bogotá, publicado el 10 de marzo de 2025.

FONDETUR (APOYO A EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS)

El Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá - FONDETUR, creado en cumplimiento de lo establecido en el artículo 122 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, que determinó su creación, como un fondo cuenta para promover, apoyar e impulsar el desarrollo del sector turístico en la ciudad de Bogotá.

FONDETUR mediante el desarrollo de convocatorias públicas logró los siguientes resultados:

- 24 convocatorias
- 5.874 millones aprox. entregados en estímulos
- 1.008 estímulos entregados (beneficiarios)

Con presencia en 19 de las 20 localidades de la ciudad de Bogotá, durante la operación de FONDETUR, se logró vincular a diferentes actores de la cadena de turismo y otros:

• Agencias de viajes	322
• Guías de Turismo	143
• Establecimientos de alojamiento y Hospedaje	59
• Atractivos Turísticos	15
• Firmantes de Paz	8

Impacto Poblacional:

Mujeres:	271 proyectos \$1.858 millones de pesos en estímulos
Jóvenes:	54 proyectos \$297 millones de pesos en estímulos
Población LGBTQ+:	18 proyectos \$124 millones de pesos en estímulos
Empleabilidad:	Empleos Directos 2.816 Empleos Indirectos 2.099

Sin embargo, en el año 2024 en el marco del Acuerdo Distrital 927 de 2024, por medio del cual se expidió el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura”, fue derogado el acto de creación del Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá – Fondetur.

III. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTA

EL Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que facultan a la Corporación para dictar normas así:

DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.

1. *Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito*

IV. IMPACTO FISCAL

En cumplimiento de la Ley 819 de 2003, “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones y que en su artículo 7 determina que: “Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. (...) Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberán contener la

correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.”

Aclaramos que las presentes iniciativas **NO generan un impacto fiscal** que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación, ya que las acciones deben estar enmarcadas en los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo Distrital.

V. TÍTULO – ATRIBUCIONES - CONSIDERANDOS

PROYECTO DE ACUERDO NO 652 DE 2025

PRIMER DEBATE

**“POR MEDIO DEL CUAL SE BUSCA INCENTIVAR, IMPULSAR Y ESTABLECER
CORREDORES TURÍSTICOS SEGUROS DE BOGOTÁ D.C.”**

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C.

**En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas
por el artículo 12 numerales 1, 7 y 13 del Decreto Ley 1421 de 1993,**

ACUERDA

VI. ARTICULADO

ARTÍCULO 1. OBJETO. El presente acuerdo tiene por objeto incentivar, impulsar y establecer corredores turísticos seguros de Bogotá D.C.

ARTÍCULO 2. LINEAMIENTOS: Con el fin de desarrollar una estrategia integral, la administración Distrital, según las competencias de sus entidades desarrollara los siguientes lineamientos:

- a) **Promoción:** Con el fin de incentivar el turismo en Bogotá el Instituto Distrital De Turismo (IDT) deberá liderar iniciativas que permitan a la ciudad convertirse en uno de los principales destinos turísticos enfocándolo en su diversidad cultural, gastronómica y el ecoturismo.
- b) **Adopción de Practicas Sostenibles:** La administración Distrital propenderá por desarrollar e implementar prácticas para un turismo sostenible especialmente en lo referente al ecoturismo.
- c) **Prevención y Seguridad:** Con el fin de garantizar un disfrute seguro para la oferta turística que ofrece la capital, la Secretaria Distrital De Seguridad deberá crear una estrategia de corredores seguros para turistas y residentes que garantice el disfrute de dichas actividades.
- d) **Cooperación:** Es deber de la administración Distrital coordinar sus acciones con los sectores privados que se vean inmersos en dicha iniciativa.

ARTÍCULO 3: Integración: La administración deberá incluir y ajustar en su “Estrategia Distrital De Turismo” los festivales, eventos, encuentros y demás ofertas de carácter privada y pública con el fin de generar una “Gran Oferta” para incentivar el turismo en Bogotá.

ARTÍCULO 4: Corredores: Los entes encargados deberán definir, articular y determinar los corredores turísticos, para generar una estrategia intersectorial de los corredores ya definidos y los nuevos que se crean a partir de la implementación de este proyecto de acuerdo.

ARTÍCULO 5: Estrategia De Seguridad: Para garantizar la seguridad de turistas y habitantes de la ciudad, la Secretaria De Seguridad y Convivencia deberá crear e implementar programas para el disfrute de las zonas donde se concentren la oferta turística en Bogotá.

Parágrafo N°1: El Distrito debe garantizar que en Bogotá existan zonas libres de Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA); y debe seguir impulsado su sello "ALTO AL ESCNNA".

Parágrafo N°2: El Distrito deberá garantizar que en las zonas de oferta turísticas exista un acompañamiento de 24/7.

ARTÍCULO 6: Informe: El Instituto Distrital De Turismo (IDT) y la Secretaria De Seguridad y Convivencia presentará un informe anual sobre la implementación del presente acuerdo ante el Concejo Distrital de Bogotá.

ARTICULO 7. Vigencia: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

H.C. JULIÁN ESPINOSA ORTÍZ.

Concejal de Bogotá

Partido Alianza Verde

PROYECTO DE ACUERDO NO 653 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UNA JORNADA DE REFLEXIÓN POR LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN EN CONMEMORACIÓN DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A BOGOTÁ”

I. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente proyecto de acuerdo está sustentado en las siguientes normas circunscritas a la constitución nacional, a las leyes colombianas y los acuerdos del distrito capital.

- **DE ORDEN CONSTITUCIONAL**

ARTÍCULO 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.

Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.

ARTÍCULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

- **DE ORDEN LEGAL**

Ley 33 de 1994: “Por la cual se desarrolla el Decreto de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política.”

- **DECRETOS**

Decreto 1396 de 1997: “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 133 de 1994, el artículo 45 del Decreto-ley 2150 de 1995 y se modifica el Decreto 782 de 1995.”

- **NORMATIVIDAD DISTRITAL**

Acuerdo 683 de 2017: “Por el cual se rinde homenaje al Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, con motivo de su visita a Bogotá D.C.”

II. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

El Papa aterrizó en Bogotá el 6 de septiembre del 2017, en su primer recorrido en la ciudad desde el Aeropuerto El Dorado una multitud sin precedentes por la Calle 26, salieron a saludarlo a su paso hacia la Nunciatura Apostólica. A su llegada lo esperaban unos jóvenes del IDIPRON quienes fueron los encargados de darle la bienvenida a la que sería su casa en Colombia durante los siguientes 4 días.

La segunda jornada del Papa Francisco en Colombia fue el 7 de septiembre, la agenda del Sumo Pontífice en Bogotá inició en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, en donde fue recibido por el presidente de la República y las autoridades nacionales. Posteriormente se reunió con el presidente Juan Manuel Santos, en donde destacó los esfuerzos por alcanzar la paz.

Posteriormente, el Papa Francisco recorrió en el papamóvil la Plaza de Bolívar, en donde lo esperaban más de 25 mil jóvenes de todo el país y las autoridades Distritales. Visitó la Catedral Primada en donde le dedicó unos minutos de oración a la Virgen de Chiquinquirá. Ante los jóvenes presentes en la Plaza de Bolívar desde el balcón del Palacio Cardenalicio, dio un discurso sobre lo importante de soñar y los bendijo. Posteriormente se reunió allí mismo con los obispos del país. Recorrió en el papamóvil la carrera séptima de regreso a la Nunciatura Apostólica. En horas de la tarde, tuvo un encuentro con el comité directivo del CELAM en la Nunciatura Apostólica.

En su último evento oficial en Bogotá, el papa Francisco ofició una Eucaristía ante 1.360.000 feligreses en el Parque Simón Bolívar. Una vez arribó el máximo jerarca de la Iglesia Católica al parque, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, empezó la interpretación de la música. La acompañaba el Coro Filarmónico Juvenil de Bogotá, la Sociedad Coral Santa Cecilia y el Coro Infantil de la Catedral. Todos los asistentes a la misa lograron apreciar de cerca al papa Francisco, quien recorrió en su papamóvil el interior del parque Simón Bolívar. En conclusión, el Papa realizó cinco recorridos en el papamóvil por las calles de Bogotá, cinco recorridos en automóvil y cuatro actos de bienvenida cada noche en la Nunciatura Apostólica, todos incluyeron una masiva afluencia de público deseoso de ver y manifestar su afecto al máximo jerarca de la Iglesia Católica.

Según las estimaciones hechas por los observatorios de la Secretaría de Desarrollo y el Instituto Distrital de Turismo, la inyección a la economía de la ciudad por la visita del Papa Francisco ascendió a más de 180 mil millones de pesos.

La seccional Bogotá de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) reportó una ocupación del 62,7 %, lo que significó un repunte de casi 10 puntos con respecto al promedio del primer semestre de este año (53,4 %) y una demanda adicional de mil habitaciones, aproximadamente.

La ciudad acogió durante la visita del papa a unos 600 mil visitantes, lo que le representó a la ciudad ingresos por este concepto de 115 mil millones de pesos, correspondiente a los gastos generados en los eventos previos y durante la visita del papa a la ciudad.

De otro lado, se observó que el 53 % de los visitantes llegó a la ciudad en bus intermunicipal; el 26 %, en avión; el 15 %, en vehículo particular y el 6 %, en transporte especial. Además, cerca del 90 % de los turistas nacionales y el 70 % de los internacionales llegaron a Bogotá para asistir a la misa campal que se llevó a cabo en el Parque Simón Bolívar.

Otro dato entregado por la Alcaldía de Bogotá, las compañías de telefonía celular también tuvieron un repunte importante en cuanto al consumo de datos móviles, que se dispararon en un 40 % durante los días que estuvo el papa en la capital del país. El sistema de transporte masivo (Transmilenio y SITP) reportó, a su vez, que movilizó de manera fluida a más de 6,3 millones de personas los días 6 y 7 de septiembre, una cifra récord.

Los cálculos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico destacaron que al menos tres millones de personas acudieron al encuentro del papa Francisco durante su paso por Bogotá, en los distintos eventos y desplazamientos.

Según cálculos aproximados, cada asistente residente a la misa campal gastó en promedio 40 mil pesos. Y en las demás actividades como recorridos y Plaza de Bolívar se tiene un estimativo de 20 mil pesos para ver al sumo pontífice, lo que generó ingresos adicionales de los residentes para la ciudad cercanos a los 65 mil millones de pesos, según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Adicionalmente, el encuentro del papa con más de 25.000 jóvenes que se congregaron el jueves 6 de septiembre en la Plaza de Bolívar les generó ingresos a comerciantes y empresarios de la capital por 500 millones de pesos, según proyecciones del Observatorio de Desarrollo Económico.

III. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

EL Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993 No. 13, principalmente en el numeral 1 que facultan a la Corporación para dictar normas así:

(...)

DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.

13. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural.

IV. IMPACTO FISCAL

En cumplimiento de la Ley 819 de 2003, “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones y que en su artículo 7 determina que: “Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. (...) Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberán contener la

correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.”

Aclaramos que las presentes iniciativas **NO generan un impacto fiscal** que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación, ya que las acciones deben estar enmarcadas en los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo Distrital.

Cordialmente,

H.C. JULIÁN ESPINOSA ORTÍZ.

Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

V. TÍTULO – ATRIBUCIONES - CONSIDERANDOS

PROYECTO DE ACUERDO NO 653 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UNA JORNADA DE REFLEXIÓN POR LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN EN CONMEMORACIÓN DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A BOGOTÁ”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 12 numeral 13 del Decreto Ley 1421 de 1993,

ACUERDA

I. ARTICULADO

ARTÍCULO 1. OBJETO. El Distrito Capital establecerá una jornada de reflexión por la paz y la reconciliación en conmemoración de la visita del Papa Francisco.

ARTÍCULO 2. DECLARATORIA. Declárase el 7 de septiembre de cada año como el Día en Conmemoración de la visita Papa Francisco en Bogotá.

ARTÍCULO 3: CONMEMORACIÓN: La administración propenderá por realizar actividades de carácter religioso y laico en pro de la jornada de reflexión por la paz y la reconciliación en conmemoración de la visita del Papa Francisco.

ARTÍCULO 4: INFORME: La administración Distrital a través de las entidades competentes presentará un informe anual sobre la implementación del presente acuerdo ante el Concejo Distrital de Bogotá.

ARTICULO 5: VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.